**En lo principal**: deduce cuestión previa; **en el primer otrosí**: contesta Acusación Constitucional; en el **segundo otrosí**: acompaña documentos; **en el tercer otrosí**: se tenga presente.

**HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS**

**Andrés Chadwick Piñera**, ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, abogado, asistido por su abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio, ambos domiciliados para estos efectos en calle Alonso de Córdova N° 3788, comuna de Vitacura, de la ciudad de Santiago, en acusación constitucional interpuesta en su contra, a esta H. Cámara de Diputados, respetuosamente digo:

Con fecha 30 de octubre de 2019, y haciendo uso de la facultad otorgada en virtud del artículo 52 N° 2, letra b), de la Constitución Política de la República (en adelante, indistintamente, “**CPR**” o “**Constitución**”), un grupo de 11 honorables Diputados presentaron ante esta H. Cámara de Diputados, acusación constitucional en mi contra (en adelante, respectivamente, los “**acusadores**” y la “**Acusación**”), la que me fue notificada con fecha 8 de noviembre de 2019, en la que se imputa a este ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, haber infringido gravemente la Constitución y las leyes y haber dejado éstas sin ejecución.

Encontrándome dentro de plazo, vengo en contestar la Acusación, planteando, en lo principal, cuestión previa de admisibilidad, solicitando la misma sea acogida y se tenga la Acusación por no presentada para todos los efectos legales. Para el caso que tal cuestión sea desestimada, en el primer otrosí, contesto la acusación en el fondo, haciéndome cargo de sus dos capítulos acusatorios, para concluir solicitando, en definitiva, que la Acusación se rechace en su totalidad.

La acusación señala que este ex Ministro de Estado sería responsable constitucionalmente de vulnerar la Constitución en sus artículos 19 Nº 1 en relación a los artículos 5 inciso segundo, 6 y 7, como asimismo el artículo 43 en relación al artículo 19 Nº 7; como también los siguientes textos legales: Artículos 1.1, 4.1, 5.7, 8 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño, artículos 4, 5, 6, 7 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 9 de la Convención Interamericana sobre derechos humanos de las personas mayores; artículos 1, 2 y 3 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el artículo 12 de la Ley N º 18.415, Orgánica Constitucional de Estados de Excepción Constitucional (en adelante, la “**LOC de los Estados de Excepción**”).

Además, se señala que este Ministro de Estado habría dejado sin aplicación las siguientes normas: artículos 1.1, 4.1, 5, 7, 8 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 3 letra b) de la ley Nº 20.502[[1]](#footnote-1), Orgánica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (en adelante la “**Ley Nº 20.502**”) en relación con los artículos 1 Nº1 y 2 del decreto supremo Nº 1.364, de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (en adelante, “**DS N° 1.364**”).

Lo cierto, H. Cámara, y como expondré a lo largo de este escrito, es que durante mi gestión como Ministro del Interior y Seguridad Pública no infringí la Constitución ni las leyes en forma alguna, por acción ni omisión, ni tampoco vulneré el derecho a la vida, integridad física o psíquica, debido proceso legal, inviolabilidad del hogar y de la libertad personal de nuestros compatriotas. Durante el ejercicio de mi cargo, y muy especialmente entre los días 18 a 28 de octubre de 2019, observé una estricta sujeción a la Constitución y a las leyes, actuando dentro de mis competencias y facultades.

# ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS.

Se analizará en este apartado la naturaleza de la acusación constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, la relación entre los estados de excepción constitucional y la protección de la democracia y el Estado de Derecho. Posteriormente, expondré los hechos que llevaron a S.E. el Presidente de la República a decretar los estados de excepción constitucional de emergencia (en adelante, “**Estado de Emergencia**”), y las facultades que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el ámbito de orden público, y así como la preocupación y las medidas adoptadas en materia de derechos humanos en relación a las policías durante mi gestión. Por considerarlo de interés en dicha materia, además abordaré cómo la modernización institucional de las policías fue una de las preocupaciones desde el inicio de mi gestión y cómo avanzamos, de manera consensuada con parlamentarios y representantes de todo el espectro político, en esa necesaria transformación.

## **Naturaleza de la Acusación Constitucional en Nuestro Ordenamiento Jurídico y en la práctica de esta H. Corporación.**

Nuestra regulación confiere diversos mecanismos de control de los actos que componen los distintos poderes del Estado, dentro de los cuales se encuentra la acusación constitucional en contra de las más altas autoridades de nuestro ordenamiento jurídico.

La acusación constitucional se encuentra regulada en el artículo 52 N° 2 y en el artículo 53 N° 1, ambos de la Constitución, así como también en los artículos 37 y siguientes de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional (en adelante, la “**LOC del Congreso Nacional**”). Al respecto, disponen las normas de la Constitución:

* Artículo 52 N° 2 de la Constitución, entre las atribuciones exclusivas de esta H. Corporación: “*2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:*

*(…)*

*b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;*

*(…)*

*La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso.*

*Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella.*

*Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.*

*En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes*.”

* Artículo 53 N° 1 de la Constitución, entre las atribuciones exclusivas del H. Senado: “*1) Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados entable con arreglo al artículo anterior.*

*El Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa.*

*La declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación en contra del Presidente de la República o de un gobernador regional, y por la mayoría de los senadores en ejercicio en los demás casos.*

*Por la declaración de culpabilidad queda el acusado destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.*

*El funcionario declarado culpable será juzgado de acuerdo a las leyes por el tribunal competente, tanto para la aplicación de la pena señalada al delito, si lo hubiere, cuanto para hacer efectiva la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados al Estado o a particulares*.”

En base a estas normas, la doctrina ha definido a la acusación constitucional, como aquel juicio en que:

“*[s]e juzga a las más altas autoridades del Estado por delitos, infracciones o abusos de poder expresamente contemplados en la Constitución y que tienen por objeto, por una parte, establecer tanto la efectividad de tales infracciones como la culpabilidad o inocencia de la autoridad acusada, y, por la otra, hacer efectiva su responsabilidad constitucional mediante la destitución del infractor y su inhabilitación para ejercer toda otra función de carácter público por el término de cinco años*.”[[2]](#footnote-2)

Durante largo tiempo la doctrina chilena ha debatido acerca la naturaleza de la acusación constitucional, específicamente acerca de si se trataría de un juicio político, un juicio jurídico o un juicio jurídico-político. Conforme a distintos autores, la acusación constitucional regulada en nuestro ordenamiento jurídico no se trataría de un juicio político, ya que la misma Constitución “*restringe la facultad que ha otorgado al Congreso Nacional para lograr la destitución de altos dignatarios, estableciendo causales específicas y taxativas incluso para aquellos cargos que tienen una naturaleza esencialmente política. (…) no basta un mero juicio de reproche o aprobación sobre la persona del acusado. Es necesario también determinar si dicha autoridad a través de actos u omisiones –es decir, actos concretos- ha configurado alguno de los ilícitos constitucionales que ameritan su destitución y que contempla la propia Constitución.*”[[3]](#footnote-3)

En ese sentido se ha manifestado Fernando Atria, señalando: “*Un voto de confianza (o censura) es un elemento característico de los sistemas parlamentarios, y es el medio a través del cual el parlamento le reitera o retira su confianza a un ministro o incluso al jefe de gobierno. Es de la naturaleza de un voto de confianza que no tiene causales: no importa por qué el parlamento ha perdido la confianza en un funcionario, basta el hecho de que la haya perdido. Pero la acusación constitucional en la constitución vigente entre nosotros no está configurada de este modo, sino que tiene causales. Esto mostraría que no basta que el Congreso pierda confianza por cualquier razón en un funcionario, y es necesario que el funcionario incurra en alguna de esas causales. Por consiguiente, sigue el argumento, que la acusación constitucional no es un juicio político (“de mérito”) sino uno de estricta legalidad, de infracción de normas legales vigentes*.”[[4]](#footnote-4)

Cualquiera sea la posición que se adopte en ese debate, resulta innegable que la acusación constitucional tiene, a lo menos, una dimensión jurídica y una naturaleza mixta. Esto porque es la Constitución quien le entrega al Congreso la facultad de conocer y resolver la acusación constitucional, estableciendo expresamente los sujetos activos y pasivos, la oportunidad y la forma para ello, así como también las causales taxativas establecidas, el procedimiento, entre otros.

Así lo reconocen, en este caso, los acusadores al señalar que “*las conductas del Ministro deben ser subsumidas en una o más de las causales constitucionales*”[[5]](#footnote-5), lo que necesariamente da cuenta que una acusación constitucional debe cumplir con ciertos estándares jurídicos para poder prosperar.

Se trata de un acto formal, que debe cumplir con requisitos específicos que determinan su procedencia. Así, se trata de un acto que debe constar por escrito y contener capítulos que den cuenta del conjunto de hechos concretos que determinen los delitos, infracciones o abusos de poder, que, conforme a la Constitución, autorizan para dar curso a una acusación constitucional.

De este modo, y teniendo a la vista los graves supuestos por los que la CPR autoriza la interposición de una acusación constitucional, y la práctica constitucional de la Corporación, es indubitado que solo procede respecto de cargos fundados, basados en hechos acreditados e imputables personalmente a la autoridad acusada y constitutivos de las causales establecidas en la Constitución.

Como se verá, este requisito básico no se verifica en la Acusación. Por el contrario, si bien los acusadores identifican correctamente el estándar jurídico que debe cumplir toda acusación constitucional, al momento de formular sus imputaciones, no logran satisfacer dicho estándar e incurren en vulneraciones graves al debido proceso; en imputaciones atribuidas a este ex Ministro de Estado por hechos que son de terceros; estableciendo del mismo modo una responsabilidad objetiva sin que pueda identificarse alguna conducta en la que hubiera incurrido personalmente, para luego abordar materias sobre la delegación de facultades en los decretos que declararon el estado de excepción constitucional de emergencia (en adelante, “**Decretos de Estado de Emergencia**”)[[6]](#footnote-6), y exponer que con ello se ha extendido el objeto de una acusación constitucional, al pretender revisar los fundamentos de decisiones que son privativas de S.E. el Presidente de la República, como es la declaración de un Estado de Excepción Constitucional.

Si los acusadores fuesen consistentes con la naturaleza de esta acción, a la que ellos mismos reconocen una dimensión jurídica, sabrían que la acusación constitucional no es un mecanismo para expresar diferencias políticas con respecto al Gobierno, y mucho menos para impugnar decisiones como es la declaración de estados de excepción constitucional.

La intención de los acusadores a este respecto también queda manifiesta cuando reconocen que pretenden establecer “*una crítica a los Estados de Excepción constitucional*”,[[7]](#footnote-7) los cuales, en su concepto, “*han representado continuamente un problema para la democracia*”.[[8]](#footnote-8) Como es lógico, criticas de este tipo resultan improcedentes en esta sede, que tiene por objeto determinar la responsabilidad jurídico-constitucional de un ex Ministro de Estado, no dirimir la conveniencia de la declarar el Estado de Emergencia, y mucho menos de los Estados de Excepción Constitucional, en general.

## **Estado de Excepción Constitucional como Herramienta Para Resguardar el Estado de Derecho.**

La declaración de Estado de Emergencia, es una herramienta excepcional entregada por nuestra Constitución, que permite la afectación temporal en el ejercicio de los derechos de libertad de locomoción y de reunión, a fin de velar por la restauración del orden público o por la seguridad de la Nación, cuya declaración constituye una facultad contemplada para atender distintas situaciones de carácter urgente en que la seguridad y el orden del Estado estén siendo gravemente afectados.

De este modo, cuando nos enfrentamos a situaciones tan extremas, de una lesividad tan potente, el imperativo de las autoridades es buscar dentro de todas las medidas que el ordenamiento jurídico dispone para resguardar el Estado de Derecho y la democracia, que no acepta la violencia ni el vandalismo en los niveles que vivimos durante esos días de octubre. Estamos plenamente de acuerdo con la libertad de expresión, con el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente y sin armas, apoyamos que la ciudadanía pueda exponer sus demandas a la autoridad, pero cuando nos enfrentamos a actos de violencia inusitada, que ponen en peligro la libertad y seguridad de todos los ciudadanos, no existe otra alternativa que resolver sobre la aplicación de las medidas que la Constitución y las leyes contemplan para proteger la democracia y la seguridad de todas las personas.

Así lo expresé el día 23 de octubre de 2019, ante esta misma Corporación, cuando concurrí a informar sobre la situación de emergencia que afectaba al país:

*“[N]osotros y el Presidente tiene el deber de recurrir a los instrumentos constitucionales para efectos de poder ir garantizando esa situación de control y seguridad del orden público a todas las personas. Es su deber como Presidente de la República y debiera ser nuestro deber, de quienes estamos actuando en la vida democrática, de rechazar y condenar las acciones de violencia.*

*Un deber indispensable para que la democracia pueda funcionar y pueda desarrollarse normalmente, un deber indispensable y no fallemos en este momento que puede ser extraordinariamente difícil, pero decisivo. La democracia no acepta la violencia ni el vandalismo que hemos visto, la democracia no acepta la violencia y el vandalismo que hemos vivido y […], ojalá que, por el bien del país y el futuro, esto sea algo que pueda ser compartido por todos.” [[9]](#footnote-9)*

Con este marco, corresponde analizar cómo se ajusta a los principios de juridicidad, la declaración de Estados de Excepción Constitucional.

Uno de los principios fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en el derecho público, es el principio de juridicidad, recogido en los artículos 6 y 7 de la CPR. En particular, el artículo 6 de la Constitución dispone:

“*Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República*.

*Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo.*

*La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley*.”

De la norma antes citada, se desprende que los órganos que componen la Administración del Estado deben actuar de conformidad a lo establecido en la Constitución y las normas dictadas conforme a ésta. En esta norma, específicamente en sus incisos primero y segundo se “*plasma la vinculación directa de la Constitución (eficacia normativa de la norma constitucional) y del resto del ordenamiento jurídico, es decir, la imperatividad de la norma para la Administración*.”[[10]](#footnote-10)

Por su parte, el artículo 7 de la Constitución establece:

“*Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.*

*Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.*

*Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale.”*

De lo anterior se deduce que, para que los órganos que componen la Administración del Estado actúen válidamente, deben cumplir con tres requisitos fundamentales: (1) previa investidura regular (ocupar un cargo de forma válida), (2) dentro de la esfera de su competencia (otorgada por el ordenamiento jurídico), y (3) de acuerdo a la forma prescrita o establecida en la ley.

Como bien señala el profesor Bermúdez Soto:

“*el principio de juridicidad supone respetar toda la pirámide normativa, en cuanto al grado y en cuanto a la materia. Es más bien una sujeción al “bloque de la juridicidad”. Como consecuencia de lo anterior, la Administración del Estado estará vinculada por la CPR, por las normas con rango legal (incluyendo los decretos leyes) y también por las normas reglamentarias.*”[[11]](#footnote-11)

En el mismo sentido, la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (en adelante, “**Ley N° 18.575**”) también consagra el principio de juridicidad en su artículo 2, que establece:

“*Los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes*.”

De conformidad al artículo 24 de la CPR, el gobierno y la administración del Estado le corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe de Estado. El artículo 1 de la Ley N° 18.575 agrega que el Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración de los órganos que establece la CPR y las leyes, dentro de los cuales se encuentran los Ministros y Ministras de Estado, quienes, de conformidad al artículo 33 de la Constitución, son colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y la administración del Estado.

El artículo 32 de la Constitución establece cuáles son las atribuciones especiales que la misma Carta Fundamental le entrega al Presidente de la República. Específicamente, y en relación a la Acusación presentada en mi contra, el artículo 32 N° 5 de la Constitución establece, como una de las facultades especiales del Presidente de la República, la de “*declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalan en esta Constitución*;”. Por su parte, el artículo 39 de la Constitución establece que:

“*El ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes* ***situaciones de excepción:*** *guerra externa o interna, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado*” (énfasis agregado).

Dichas situaciones de excepción, los Estados de Excepción Constitucional, están regulados en los artículos 39 y siguientes de la CPR, así como también en la LOC de los Estados de Excepción, a cuya regulación se remite el artículo 44 de la Constitución[[12]](#footnote-12). Los Estados de Excepción Constitucional contemplados en nuestro ordenamiento jurídico son: (a) estado de asamblea; (b) estado de sitio; (c) estado de emergencia; y (d) estado de catástrofe; constituyendo una herramienta contemplada para atender distintas situaciones de carácter urgente en que la seguridad y el orden del Estado estén siendo gravemente afectados.

En particular, el Estado de Emergencia, se encuentra tratado en el artículo 42 y en el inciso final del artículo 43, ambos de la Constitución, los que disponen:

* Artículo 42: “*El estado de emergencia, en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación, lo declarará el Presidente de la República, determinando las zonas afectadas por dichas circunstancias. El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso Nacional. El referido acuerdo se tramitará en la forma establecida en el inciso segundo del artículo 40.*

*Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción* ***con las atribuciones y deberes que la ley señale****.*

*El Presidente de la República estará obligado a informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia.*” (énfasis agregado).

* Artículo 43, inciso final: “*Por la declaración del estado de emergencia, el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión.*”

De lo anterior, se puede concluir que el Estado de Emergencia puede ser declarado por S.E. el Presidente de la República, sin el acuerdo del Congreso Nacional, cuando **exista una grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación**, debiendo establecer la zona afecta a dicho estado de excepción constitucional y el tiempo de duración de dicha medida, el que no puede extenderse más allá de quince días, sin perjuicio de la facultad de S.E. el Presidente de la República de prorrogarlo, de conformidad a lo establecido en la Constitución. La propia Constitución reconoce que, al declarar el Estado de Emergencia, el Presidente de la República debe designar al Jefe de Defensa Nacional, quedando de forma inmediata las zonas declaradas en estado de excepción constitucional bajo su dependencia, asumiendo la dirección y supervigilancia de su jurisdicción **con las atribuciones y deberes que la ley señale, esto es, en la LOC de los Estados de Excepción.**

Por su parte, la ley a la que se refiere el artículo 44 de la CPR es la LOC de los Estados de Excepción. Esta ley, en lo que se relaciona con el Estado de Emergencia, dispone, entre otras cosas, que:

Artículo 4°: “*Declarado el estado de emergencia, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe.”.*

Artículo 5°: “*Para los efectos de lo previsto en el inciso primero del N° 6° del artículo 41 de la Constitución Política de la República, durante el estado de emergencia, el jefe de la Defensa Nacional que se designe tendrá los siguientes deberes y atribuciones*:

1. *Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción;*
2. *Dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar;*
3. *Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno;*
4. *Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella;*
5. *Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros;*
6. *Impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona, y*
7. *Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal.”* (énfasis agregado)

Artículo 12: “*Entiéndese que se suspende una garantía constitucional cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la vigencia de un estado de excepción constitucional.*

*Asimismo, entiéndese que se restringe una garantía constitucional cuando, durante la vigencia de un estado de excepción, se limita su ejercicio en el fondo o en la forma.”.* (énfasis agregado)

Establecido el marco legal que regula esta materia, y las facultades de S.E. el Presidente de la República para decretar un estado de excepción constitucional en los casos previstos, corresponde analizar qué antecedentes se ponderaron para decretar el estado de excepción constitucional de emergencia en algunas zonas del país.

## **Antecedentes de hecho que llevaron a S.E. el Presidente de la República a decretar el Estado de Emergencia en diversas provincias del país**

### Hechos previos al día viernes 18 de octubre

El día 4 de octubre de 2019, el Panel de Expertos del Transporte Público[[13]](#footnote-13), ente técnico y autónomo, informó de una nueva estructura tarifaria y determinó un incremento al sistema de servicios subsidiados de buses, Metro y Tren Central (en adelante, “**Sistema de Transporte Público**”), en las 32 comunas de la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Ese reajuste implicaba el aumento en ciertas tarifas del Sistema de Transporte Público de las referidas comunas, de CLP $30 pesos de la Tarifa Metro Período Punta para el Metro de Santiago y CLP $10, para los buses, dada la variación del precio del petróleo, el índice de precios del consumidor, el incremento del costo de mano obra, la tasa de cambio, entre otros. La tarifa no tendría ninguna variación para estudiantes y adultos mayores.

Con motivo de lo anterior, durante los días siguientes al anuncio antes indicado, bajo la consigna “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”, ocurrieron evasiones masivas del pago del pasaje por parte de estudiantes secundarios, universitarios y otros usuarios del Metro de Santiago, en protesta por el aumento del precio de este servicio, en el horario punta. Los primeros de estos incidentes estuvieron concentrados en algunas estaciones ubicadas en el sector céntrico de Santiago y participaban en ellas estudiantes, principalmente.

Sin embargo, desde la semana del 14 de octubre las manifestaciones se intensificaron, expandiéndose a otros sectores y lugares de Santiago.

De hecho, los acusadores reconocen que se generó “*un proceso de manifestaciones pacíficas, consistentes en la evasión del pasaje del metro, iniciado por grupos de estudiantes secundarios*. *Dichas manifestaciones se incrementaron y masificaron durante los días de la semana del 14 de octubre*.”[[14]](#footnote-14)

Durante el día 14 de octubre de 2019, las manifestaciones fueron en aumento en el número de asistentes, expandiéndose, además, a distintos lugares de la ciudad de Santiago. Ese mismo día ocurrieron evasiones masivas en 8 estaciones de Metro. El día 15 de octubre se mantuvieron las manifestaciones, así como también aumentaron las evasiones masivas al Metro de Santiago, las que se realizaron en 11 estaciones, lo que provocó el cierre de estaciones o accesos controlados a ellas. Algunas estaciones estaban resguardadas con presencia policial en la zona de torniquetes. En horas de la tarde del día martes 15, Metro decidió suspender el servicio en estación Los Leones, velando por la seguridad de los pasajeros.

El gerente de Metro, señor Rubén Alvarado, señaló ese día martes 15 que “***El llamado que hacemos es a deponer este tipo de actitudes porque finalmente terminan afectando a muchas personas,****a muchos adultos mayores que necesitan viajar probablemente a un control médico, u otros estudiantes que necesitan ir a su lugar de estudio y que afectan el servicio, generan tensión, generan situaciones de violencia, y creemos que eso no es adecuado, no es propio, no corresponde”[[15]](#footnote-15)* (énfasis agregado)

Al día siguiente, miércoles 16 de octubre, las manifestaciones se tornaron más violentas, alcanzando a 22 estaciones, entre las que se cuentan algunas de especial relevancia para el Sistema de Transporte Público: Franklin, Santa Ana, Cumming, Bustamante, Patronato, Estación Central, Los Héroes y Laguna Sur.

El día 17 de octubre la situación vuelve a crecer en cantidad y además suma violencia, especialmente en el centro de Santiago. Para resguardar la seguridad, Metro dispuso accesos restringidos, con un número considerable de personas intentando entrar a las estaciones. Carabineros de Chile dispuso aumentar la presencia en zonas que determinó como de relevancia, como por ejemplo, las estaciones del Metro. En horas de la mañana, se registró una presencia masiva de estudiantes en la estación Los Héroes y Santa Ana, entre otras. Por la tarde, las estaciones San Miguel y Conchalí fueron cerradas por Metro, por razones preventivas y en otras se denegó el acceso.

La violencia también aumento el día jueves. En efecto, 51 estaciones de Metro sufrieron evasiones masivas, e inclusive algunas de éstas sufrieron actos de vandalismo, dentro de las cuales se encontraron:

* **Estación San Joaquín (Línea 5)**: 400 personas aproximadamente ingresaron violentamente evadiendo el pago de la tarifa del Metro, destruyendo completamente los validadores de la estación, afectando con ello el transporte de miles de ciudadanos, así como la seguridad de éstos y los funcionarios de Metro.
* **Estación Los Héroes (Línea 1)**: alrededor de las 20.00 horas, un grupo de manifestantes que se encontraba al interior de un vagón de Metro activó el freno de emergencia, debiéndose por ello detener el funcionamiento de la Línea 1, afectándose con ello la tranquilidad y la locomoción de cientos de miles de personas.
* **Estación Plaza de Armas (Línea 5 y 3)**: una multitud de personas forzó las rejas de uno de los accesos a la estación, derribándola e ingresando por la fuerza a ésta.
* **Estación Cumming (Línea 5)**: Un grupo de estudiantes forzó una reja.

Ante esta situación de evasión y los graves actos de violencia, se decidió cerrar algunas estaciones y Carabineros realizó procedimientos para mantener el orden público, en los cuales detuvo a más de 133 personas que participaban en actos violentos contra las instalaciones del Metro de Santiago. A consecuencia del daño en las estaciones, la afectación generada a la ciudadanía por los actos de vandalismo y violencia, y en resguardo de la integridad del personal del Metro de Santiago, Carabineros reforzó la custodia policial disponiendo un servicio especial para resguardar la seguridad de los ciudadanos en sectores de mayor complejidad, estableciendo dos turnos de 1.150 funcionarios cada uno. Para ese momento, todas las estaciones se encontraban operativas, pero con acceso controlado.

Llama la atención la afirmación de los acusadores que sostienen que “*[d]e esta forma, se masifica la evasión resignificada como mecanismos de protesta, mientras el Ejecutivo comienza a condenarse dicha manifestación como si se tratara de actos criminales*”[[16]](#footnote-16). En ese punto queremos plantear que no se ha señalado a la evasión como un acto criminal, pero al mismo tiempo, lo que se verificó posteriormente fue la destrucción de propiedades públicas, mediante daños, conducta tipificada en nuestro Código Penal. Luego, en opinión de los acusadores, “*el Gobierno comienza a aplicar medidas ineficaces, que lejos de apuntar al fondo de las demandas, reprodujeron su aproximación punitiva a las consecuencias*,”[[17]](#footnote-17) sin atender al hecho que es responsabilidad del Gobierno (y también de los acusadores, según el juramento prestado), “*cumplir y hacer cumplir las leyes*”, lo que incluye, por cierto, evitar la comisión de daños a los bienes de uso público y denunciar a la justicia a quienes los cometen, para que sean investigados y, de ser hallados culpables, sancionados, como disponen las leyes vigentes.

### Hechos ocurridos el día viernes 18 de octubre y la madrugada del día sábado 19 de octubre

Luego de la inusitada violencia registrada el día anterior, a las 07:30 del día viernes 18 de octubre, el Director de Orden y Seguridad General Ricardo Yañez, le informó al Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sobre el despliegue y distribución de los servicios policiales especiales previstos para ese día, de 1.172 carabineros, para el resguardo de las personas que requieran utilizar el Metro. El segundo turno, de la tarde, contaba con 1.182 efectivos.

Durante el día viernes 18 de octubre de 2019, y pese a los esfuerzos desplegados por Carabineros, se iniciaron nuevas manifestaciones, las que aumentaron exponencialmente en cuanto al número de participantes, los lugares donde se realizaron y los actos de violencia. De los hechos ocurridos ese día, resultan especialmente graves:

* A las 10:00 horas, me reuní con la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt; el Presidente del Metro, Louis de Grange; el gerente general del Metro, Rubén Alvarado, y el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para analizar medidas de seguridad que adoptaría la empresa de transportes tras los ataques violentos a distintas estaciones.
* A las 15:00 horas, el Metro suspendió el servicio de las Líneas 1 y 2, debido a los graves daños y desmanes causados por grupos de manifestantes que participaban en las evasiones masivas para eludir el pago de dicho transporte. La empresa anunció, además, que este cierre sería indefinido mientras no se normalizaran las condiciones de seguridad, debido a los constantes enfrentamientos entre manifestantes y funcionarios de Metro y Carabineros de Chile, muchos de ellos al interior de las estaciones, poniéndose con ello en riesgo la seguridad de los usuarios del Metro, así como también sus funcionarios.
* Durante la tarde de ese mismo día, continuaron realizándose, simultáneamente, diversos actos de violencia y daños con la destrucción al menos de 15 estaciones del Metro, las que, además de la destrucción de validadores y torniquetes, consistieron en el lanzamiento de diversos elementos contundentes a las vías del tren.
* Con motivo del mayor trastorno que las situaciones antes descritas produjeron en el transporte público y como forma de mitigar la evidente afectación del derecho de locomoción de los ciudadanos, la Red de Transantiago dispuso 40 buses de apoyo para reforzar los recorridos de las Líneas 1 y 2.
* Alrededor de las 18:30 horas, S.E. el Presidente de la República sostuvo una reunión conmigo, el Presidente de Metro S.A. y la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones para analizar los nuevos hechos de violencia.
* A las 19:30, todas las líneas de Metro se encuentran paralizadas, por decisión de la empresa, por cuanto, como consecuencia de los disturbios y destrozos, no es posible garantizar la seguridad de operarios, pasajeros y trabajadores.Para comprender la magnitud de esta situación, cabe tener presente que esta suspensión no se había presentado desde el terremoto del año 2010, y en dicha oportunidad la paralización solo fue por un día.
* De forma simultánea, anuncié la decisión del Gobierno de presentar querellas por Ley de Seguridad del Estado contra quienes resultaren responsables, por la gravedad de la afectación al orden público y de los daños que se había verificado durante el día, y por el nivel de impacto que representaba para la comunidad. Asimismo, informé que Carabineros de Chile reforzaría sus servicios e hice un llamado a “*los chilenos y chilenas a unirnos contra la violencia y actuar en conjunto contra los violentistas […] y aislarlos con el repudio de toda la ciudadanía, que cree en la paz*”.[[18]](#footnote-18)
* Se produjeron diversas manifestaciones violentas en distintos lugares de Santiago, en las que se interrumpió el tránsito, se siguieron dañando bienes de uso público mediante la destrucción de semáforos y señalética, y se instalaron barricadas, entre otros.
* Atendida la gravedad de la situación, el Subsecretario del Interior citó a una reunión de urgencia en la Moneda la tarde del viernes 18, pasadas las 21:00 horas, en la que participaron:
* Subsecretaría del Interior:
* Subsecretario, Sr. Rodrigo Ubilla
* Jefa de Gabinete, Sra. María José Gómez
* Jefe de Gabinete, Sr. Juan Pablo Torres
* Carabineros de Chile:
* General, Sr. Mario Rozas.
* General, Sr. Ricardo Yáñez.
* Policía de Investigaciones:
* Prefecto, Sr. Carlos Yáñez
* Prefecto, Sr. Manuel Leiva
* METRO S.A.
* Presidente, Sr. Louis de Grange.
* Gerente, Sr. Rodrigo Terrazas
* Gerente, Sr. Rubén Alvarado
* En dicha reunión, tanto Carabineros como la PDI informaron sobre el reforzamiento de sus servicios especiales. Respecto de los efectivos de Carabineros, los servicios especiales llegaban a 1.300 funcionarios, el máximo de dotación disponible sin afectar a los Carabineros de los servicios territoriales de cada comisaría, lo que habría significado desproteger a la población de las comunas de la capital.
* Alrededor de las 22:00 desconocidos prendieron fuego a las escaleras externas del edificio corporativo de ENEL, empresa productora y distribuidora de energía eléctrica y gas, ubicado en la intersección de las calles Santa Rosa y Padre Alonso de Ovalle, en pleno centro de Santiago. **El fuego, que se expandió por las escaleras del inmueble hasta el piso doce, ocurrió cuando aún se encontraban en el edificio setenta y cinco trabajadores, los que lograron ser evacuados sin registrarse heridos**. La empresa calificó el incendio como intencional y atribuyó el origen del siniestro a sujetos desconocidos que se encontraban en el lugar, que lanzaron materiales sacados directamente de las barricadas incendiadas. Estos hechos son constitutivos del delito de incendio en lugar habitado, uno de los más graves de nuestra legislación, no sólo por el riesgo de expansión a otros inmuebles, sino por el de muerte y lesiones de personas inocentes, previsto y sancionado con penas de 10 años y un día de presido hasta presidio perpetuo en el artículo 475 Nº 1 del Código Penal.
* Pasadas las 22:30 horas, junto al Subsecretario del Interior nos reunimos con S.E. el Presidente de la República en el Palacio La Moneda para informar la situación y evaluar las acciones a adoptar.
* Mientras transcurría dicho encuentro, entre las 23:00 horas del 18 de octubre y las 0:00 horas del 19 de octubre, los actos de vandalismo se expandieron por toda la ciudad de Santiago, concentrándose primero en las estaciones de Metro de comunas donde este medio representa un servicio clave para el transporte de miles de ciudadanos. El Metro de Santiago sufrió ataques incendiarios, prácticamente simultáneos, en distintas estaciones, resultando quemadas las siguientes 7 estaciones del Metro de Santiago: Trinidad, Elisa Correa, Macul (Línea 4), Gruta de Lourdes, Barrancas, Laguna Sur (Línea 5) y San Pablo (Línea 1). Estos ataques constituyen el gravísimo delito de incendio del artículo 476 Nº 2 del Código Penal, sancionado con penas de 5 años y un día a 20 años y puede constituir, si hubiere personas en su interior o se considerasen las estaciones lugares análogos a las oficinas o monumentos públicos, la hipótesis más grave de incendio contemplada en el artículo 475 Nº 1 o Nº 2 del Código Penal, respectivamente, crimen que contempla la pena de presidio perpetuo.
* En el mismo periodo, fueron quemados buses del Transantiago, uno en Avenida Vicuña Mackenna y otro en Santa Rosa. La Facultad de Odontología de la Universidad Mayor, ubicada en el centro de Santiago, también sufrió de un incendio, desmanes y destrozos, así como también el saqueo de un local comercial en Plaza Italia, hechos trasmitidos por la ciudadanía por medios de comunicación, además demúltiples atentados contra la propiedad pública y privada, desórdenes públicos y barricadas. Estos hechos son constitutivos de los otros tantos y graves crímenes de incendios contemplados en los artículos 475, 476 y 477 Nº 1 del Código Penal.
* Así también, durante el transcurso de la noche del 18 de octubre, se produjeron múltiples saqueos a distintos locales comerciales, así como también a supermercados ubicados en distintos puntos de Santiago, hechos constitutivos, a su vez, en múltiples delitos de robo con fuerza en lugares no habitados, previstos y sancionados en el artículo 442 del Código Penal.

### Declaración de Estado de Emergencia.

Los múltiples actos reseñados, constitutivos de delitos de la mayor gravedad, representaron además un riesgo general para la vida, integridad física y seguridad de la población, por el peligro de propagación de los incendios y su fuerza destructora. Estos hechos violentos - ataques incendiarios, barricadas y cortes de ruta - afectaron además, la libre circulación de vehículos y personas, afectándose con ello la garantía de libre circulación de las personas, así como el orden y la seguridad pública.

Resultó evidente que la dotación reforzada de Carabineros de Chile, que tenía desplegados en la calle un servicio especial de 1.300 efectivos, no era suficiente y había sido sobrepasada por la magnitud, violencia y simultaneidad de los delitos y ataques sufridos en distintos puntos de la ciudad. Cabe destacar en este punto, que la decisión institucional fue mantener los servicios regulares de cada comisaría, pues una decisión distinta habría implicado desproteger la seguridad de la población en las comunas de nuestra capital.

El viernes 18 de octubre, según información entregada por Carabineros de Chile, se registraron 92 eventos graves, 156 funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad lesionados, 15 civiles lesionados, 17 buses vandalizados y 49 vehículos policiales dañados.

Ante este complejo escenario de violencia, y en atención a la magnitud e impacto de la agresión y delitos que sufrió la ciudadanía, S.E. el Presidente de la República cumplió con su deber de hacer frente a esta grave alteración por medio de los instrumentos que el ordenamiento jurídico contempla, específicamente, la Constitución y la LOC de los Estados de Excepción.

La declaración de Estado de Emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo, de la Región Metropolitana, consideró los elementos propios de la legislación y también un ejercicio de proporcionalidad en orden a ponderar si la medida adoptada era idónea al fin pretendido, y sin duda lo era. No existe en el ordenamiento ninguna otra herramienta que permita enfrentar una situación de la gravedad, excepcionalidad y violencia delictual como la que se vivía ese día.

Tras el trámite de rigor de toma de razón por la Contraloría General de la República y su publicación en el Diario Oficial, comenzó a regir a partir del sábado 19 de octubre, en las provincias de Santiago y Chacabuco y comunas de Puente Alto y San Bernardo, de la Región Metropolitana, el Decreto de Estado de Emergencia, nombrándose como Jefe de la Defensa Nacional al General de División del Ejército de Chile, señor Javier Iturriaga del Campo. Todo según dispuso el decreto supremo N° 472, del 18 de octubre de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

A las 00:13 horas, del sábado 19 de octubre, el Presidente de la República realizó un punto de prensa para informar de esta situación al país, recalcando que el objetivo de este Estado de Emergencia “***es asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes, tanto público como privados y, por sobre todo, garantizar los derechos de todos y cada uno de nuestros compatriotas que se han visto seriamente conculcados por la acción de verdaderos delincuentes […] que están dispuestos a destruir una institución tan útil y necesaria como es el Metro, y que además no respetan los derechos ni las libertades de nuestros compatriotas****. En una democracia, un estado de Derecho, como el que con tanto esfuerzo hemos construido todos los chilenos en nuestro país, no debe haber espacio alguno para la violencia ni la delincuencia que hemos conocido en los últimos días en nuestra ciudad*”[[19]](#footnote-19). (énfasis agregado)

Una hora después del anuncio del Presidente de la República, la Intendencia de la Región Metropolitana reportó las siguientes estaciones de Metro siniestradas: República, San Pablo (Línea 1), Vespucio Norte (Línea 2), Macul, Trinidad, San José de la Estrella, Los Quillayes, Protectora de la Infancia (Línea 4), La Granja, San Ramón, Santa Julia (Línea 4A), Gruta de Lourdes, Barrancas, Las Parcelas, Laguna Azul, Pedreros, Cumming, San Joaquín y Pudahuel (Línea 5). Asimismo, informó la cantidad de eventos de alteración al orden público ocurridos, la cantidad de detenidos, así como también la cantidad de personas lesionadas, buses del Sistema Público de Transporte quemados, propiedades públicas y privadas con daños. Entre ellas se encontraban Correos de Chile, farmacias, instituciones bancarias, bombas de bencina, tiendas, supermercados, Ilustre Municipalidad de San Bernardo y comisarías.

### Hechos ocurridos durante la jornada del día sábado 19 de octubre

A las 9:00 AM Carabineros de Chile informó que, durante la noche, 41 estaciones de Metro sufrieron severos daños. Resultaron con daños 27 propiedades públicas y privadas, además de las estaciones del Metro.

Los delitos descritos, lamentablemente, se fueron expandiendo a otras zonas del país y obligaron al Gobierno a tomar nuevas medidas a fin de proteger a la ciudadanía de la violencia desatada por quienes los causaban, ciudadanía que vio su vida, integridad física, seguridad, y libertad ambulatoria amenazadas por incendios, robos (saqueos) y el bloqueo no autorizado de calles y caminos (barricadas).

El mismo día 19 de octubre, entre las 14:00 y las 22:00, los ataques se repitieron en dos regiones del país. En la Región de Valparaíso, hubo ataques que causaron daños a tres estaciones del metro tren, Merval, robos (saqueos) en la ciudad de Valparaíso a supermercados, daños e intentos de incendiar edificios públicos, fogatas y barricadas en las principales vías de la región. En Concepción se verificaron robos (saqueos) a locales comerciales y a un supermercado ubicado en el centro de la ciudad, terceros incendiaron las oficinas del COMPIN y apedrearon la Intendencia del Biobío, causando daños en sus vidrios y fachada.

Durante el día sábado 19 de octubre, y por canales de información oficiales, medios de prensa y redes sociales, se recibían mensajes de distintas personas, autoridades y civiles, que pedían con angustia más intervención para poder asegurar la vida, integridad física, seguridad, y libertad ambulatoria de los habitantes de su región o provincia.

Alrededor de las 22:30 horas, el Presidente de la República decretó Estado de Emergencia en la Región de Valparaíso y en la Provincia de Concepción, en la Región del Biobío, mediante decretos supremos N° 473 y N° 474, respectivamente, ambos del 19 de octubre, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se designaron, respectivamente, como Jefes de la Defensa Nacional el Contraalmirante Juan Andrés de la Maza y el Contraalmirante Carlos Huber.

Asimismo, con ocasión de los violentos robos (saqueos), daños y desmanes que seguían ocurriendo en diversos sectores de Santiago, se decretó, por parte del Jefe de la Defensa Nacional *toque de queda* para las zonas consideradas dentro del Estado de Emergencia, desde las 22:00 hasta las 7:00 hrs. del día domingo 20 de octubre. Ese mismo día en la tarde, dada la magnitud de los hechos de violencia, se amplió el Estado de Emergencia a toda la Región Metropolitana, mediante decreto supremo N° 479, de 2019, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La violencia delictual, lamentablemente se fue extendiendo a otras zonas del país. Los hechos constituían, en su mayoría, graves delitos de incendios, robos y daños a la propiedad pública y privada, que impactaron en el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos, impidiendo el desplazamiento seguro por zonas de su provincia o región y entorpeciendo o limitando la prestación de servicios de utilidad pública. Lo anterior motivó la declaración de Estados de Excepción Constitucional en otras provincias o regiones y el fundamento de la afectación que motivó cada declaración quedó consignado en cada decreto.[[20]](#footnote-20)

Así, se dictaron los Decretos de Estado de Emergencia en los lugares afectados, conforme a la situación de cada zona y en la oportunidad que se señala en la siguiente tabla:[[21]](#footnote-21)

| **Región** | **Zona Decretada** | **Decreto** | **Fecha Publicación** | **Decreto Término Emergencia** | **Fecha Término Emergencia** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Arica** | Comuna de Arica | 496 | 22-10-19 | 527 | 28-10-19 |
| **Tarapacá** | Provincia de Iquique Comuna de Pozo Almonte | 487 | 21-10-2019 | 528 | 28-10-19 |
| **Antofagasta** | Comuna de Antofagasta Comuna de Tocopilla Comuna Mejillones Comuna Calama | 478 495 | 20-10-2019 22-10-2019 | 529 | 28-10-19 |
| **Atacama** | Comuna de Copiapó Comuna de Caldera y Comuna de Vallenar | 488 | 21-10-2019 | 530 | 28-10-19 |
| **Coquimbo** | Comunas La Serena  Comuna Coquimbo | 475 | 20-10-2019 | 531 | 28-10-19 |
| **Valparaíso** | Región Valparaíso Excepción isla Pascua y Juan Fernández | 473 | 19-10-2019 | 532 | 28-10-19 |
| **RM** | Región Metropolitana | 472 479 | 19-10-2019 20-10-2019 | 533 | 28-10-19 |
| **O'Higgins** | Comuna Rancagua | 476 | 20-10-201919 | 534 | 28-10-19 |
| **Maule** | Comuna Talca | 482 | 20-10-201919 | 535 | 28-10-19 |
| **Ñuble** | Comunas de Chillán y Chillan Viejo | 484 | 20-10-201919 | 536 | 28-10-19 |
| **Biobío** | Provincia de Concepción | 474 | 19-10-201919 | 537 | 28-10-19 |
| **Araucanía** | Comunas de Temuco y Comuna Padre las Casas | 483 | 20-10-201919 | 538 | 28-10-19 |
| **Los Ríos** | Comuna de Valdivia | 477 | 20-10-201919 | 539 | 28-10-19 |
| **Los Lagos** | Comuna de Puerto Montt y Comuna de Osorno | 490 | 21-10-201919 | 540 | 28-10-19 |
| **Magallanes** | Comuna de Punta Arenas Comuna Puerto Natales | 485 497 | 20-10-2019 22-10-2019 | 541 | 28-10-19 |

En ese orden de ideas, la decisión de decretar los estados de excepción constitucional no respondió a un capricho ni a una arbitrariedad ni a un abuso de poder por parte de S.E. el Presidente de la República, sino que respondió al imperativo de velar por la seguridad de la población. En efecto, y como se ha descrito, y como todos pudimos apreciar, la afectación de la seguridad y orden público era tal que existía la absoluta necesidad de contener esa violencia por medio de los mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla. Es decir, cumplimos con nuestro deber para enfrentar una situación nunca antes vista desde el retorno a la democracia.

Es así como en la tarde del día 20 de octubre comuniqué la decisión de S.E. el Presidente de la República, de extender la declaración de estado de excepción constitucional en otras zonas del país:

*“Al mismo tiempo, por disposición del Presidente de la República, hemos extendido el Estado de Emergencia a otras zonas y regiones del país. En el día de hoy se han incorporado al Estado de Emergencia todas las comunas de la Región Metropolitana, más la ciudad de Antofagasta y la ciudad de Valdivia. Y se encuentra en estos minutos en trámite los decretos de Estado de Emergencia para todas las comunas de la región de Valparaíso, para la ciudad de Talca, para la ciudad de Chillán y Chillán Viejo, para la ciudad de Temuco y Padre Las Casas y, finalmente, la ciudad de Punta Arenas.*

***El Presidente ha tomado esta decisión porque no va a dejar de realizar ningún esfuerzo para resguardar la seguridad de las personas y dar tranquilidad a la población*** *[…]. Pero frente a ella, en forma muy clara, queremos decirlo como ha dicho el Presidente de la República:* ***actuaremos cumpliendo nuestra responsabilidad constitucional y nuestro compromiso ante todos los chilenos y chilenas.****”[[22]](#footnote-22)*(énfasis agregado)

En cada una de estas zonas, los respectivos Jefes de la Defensa Nacional, ejercieron en plenitud las atribuciones que les confieren la Constitución y la LOC de los Estados de Excepción. En ejercicio de dichas potestades, instruyeron, los llamados *toque de queda*, como medida necesaria y legítima de resguardo, exclusivamente cuando el nivel de violencia así lo ameritaba, atendiendo a la severidad de los desmanes y ataques que se iban produciendo en cada jornada. En cuanto fue posible, dichas instrucciones se levantaron, y el 26 de octubre, un día antes de que el Presidente de la República anunciara el fin de la declaración de Estado de Excepción, en ninguna localidad del país se encontraba vigente esta medida.

El mismo 26 de octubre, antes de que se cumpliera el plazo de 15 días de vigencia que establece la Constitución, el Presidente de la República anunció el fin del Estado de Emergencia en todo el país, a partir de las 00:00 horas del lunes 28 de octubre. En esa oportunidad señaló:

“*Las últimas semanas, el país y los chilenos hemos vivido tiempos de brutal y destructiva violencia, pero también hemos escuchado el profundo mensaje de la ciudadanía, de las chilenas y chilenos pidiendo y exigiendo una sociedad más justa y más solidaria. Nuestro Gobierno ha enfrentado esta situación cumpliendo con su deber […] y aplicando todos los instrumentos democráticos, legítimos y necesarios que la Constitución y la ley nos otorga para poder restablecer el orden público, la seguridad ciudadana y asegurarle a todos los chilenos el ejercicio de su libertad y de sus derechos. Nuestro Gobierno también se ha hecho cargo, con voluntad y con urgencia, de atender el profundo mensaje que hemos escuchado de todos los chilenos. Y, por eso, hemos propuesto al Congreso una profunda y exigente agenda social, que recoge muchos de los planteamientos sentidos y más significativos de nuestros compatriotas*.”[[23]](#footnote-23)

### Balance de los daños sufridos por el país

La magnitud del daño y destrucción causados por los delitos cometidos y que motivaron la declaración del Estado de Emergencia en distintas zonas del país aún no han sido cuantificada en su totalidad. Lamentablemente, estos daños han ido en aumento en las semanas siguientes.

Según información de Carabineros de Chile y las distintas intendencias, al 28 de octubre, tanto la Región Metropolitana de Santiago como en las distintas regiones del país, producto de los delitos de robo, incendio y daños cometidos se produjeron las siguientes graves consecuencias:

* 27 buses del Transantiago quemados, 741 sufrieron vandalismo, 5 estaciones intermodales sin operación y 9 terminales sufrieron vandalismo.
* 487 supermercados en todo el país fueron quemados, saqueados o presentan daños mayores.
* Daños en Municipalidades:
* Daños por tomas y lanzamientos de Molotov en la Municipalidad de Calama.
* Destrozos en la Municipalidad de Copiapó.
* Saqueo y daños en el Municipio de Villa Alemana.
* Incendio y daños en la Municipalidad de Quilpué.
* Incendio y daños en la Municipalidad de Olmué.
* Incendio y daños en la Municipalidad de Catemu.
* Daños en el Municipio de Cabildo.
* Daños en la Municipalidad de San Antonio.
* Daños en la Municipalidad de El Quisco.
* Daños en la Municipalidad de El Tabo.
* Saqueo de la Municipalidad de Valdivia.
* Destrozos en la Municipalidad de Coyhaique.
* Daños en Intendencias y Gobernaciones:
* Incendio en la Gobernación Marítima de Arica por bomba molotov.
* Daños a la Gobernación Provincial de Arica.
* Daños en la Intendencia Regional de Valparaíso.
* Destrozos en Intendencia de Tarapacá, en Iquique.
* Destrozos en la Intendencia de Atacama, en Copiapó.
* Daños en la Gobernación de San Antonio.
* Destrozos en la Intendencia de Los Ríos.
* Ataque con destrozos en Gobernación de Osorno.
* Daños a 84 entidades comerciales.
* Daños a 74 entidades financieras.
* Daños o tentativa de daños en distintos organismos:
* Intento de quema antenas de telecomunicaciones del Morro de Arica.
* Daños estructurales e intento de toma en la 6° División de Ejército en Iquique.
* Daños estructurales en la Tesorería Provincial de Calama.
* Incendio en el edificio de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social en La Serena.
* Saqueo y daños en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana
* Apedreo del Servicio de Impuestos Internos, Inspección del Trabajo y Edificio de la Fiscalía en Rancagua.
* Incendio del primer piso del Palacio de Tribunales, en el Registro Civil y en el edificio de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Concepción.
* Destrozos en el Registro Civil de Valdivia.
* Incendio Notaría de Osorno.
* Destrozos en el Servicio de Impuestos Internos Regional y Fiscalía Local de Coyhaique.

Es innegable que los graves hechos descritos previamente han generado un grave perjuicio a la ciudadanía, el que no solo se limita a lo material, sino también a la calidad de vida de ésta, constituyendo en muchos casos vulneraciones a derechos fundamentales.

Uno de los ejemplos más evidentes de lo anterior ha sido la destrucción parcial del Metro de Santiago, un servicio esencial en el traslado diario de más de 2 millones 900 mil chilenos, que resultó con 25 estaciones completa o parcialmente quemadas, 93 dañadas y 10 trenes quemados. Lo anterior ha implicado un grave perjuicio para todos los usuarios del Metro de Santiago que utilizan este medio de transporte para llegar a sus trabajos, establecimientos educacionales, centros de atención de salud, entre otros. Esta destrucción ha significado que actualmente se deban utilizar medios alternativos de transporte, que no cuentan con la rapidez que entregaba el Metro de Santiago, generando con ello mayores tiempos de traslados para las personas, lo que repercute directamente y repercute empeorando la calidad de vida.

El Metro de Santiago, con motivo de los graves daños sufridos y los costos que implica la subsanación de éstos, que ascienden a US$367 millones, estima que recién en diciembre de 2020 estará operativa la totalidad de la red del Metro, perdurando el perjuicio sufrido por todos los usuarios de dicho medio de transporte.

Transcurrido un mes desde los ataques, la red de Metro aún no se reestablece en su totalidad y funciona de manera parcial y no exenta de dificultades pues han continuado los ataques e intento de incendio en distintas estaciones.

Los saqueos, incendios y destrucción de cientos de locales y comercios, entre ellos varios supermercados, afectaron el riesgo de abastecimiento de las personas, sin contar con la situación de vulnerabilidad que esos actos significaron no sólo para quienes los cometen, sino también para terceros.

Con ocasión de los hechos violentos descritos en esta sección, se ha generado un grave daño para las pequeñas y medianas empresas. De conformidad al catastro realizado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de 6.800 PYMES, que entregan aproximadamente 40 mil empleos, 4.782 de éstas presentan deterioros significativos en su infraestructura, equipamiento y mercancía.

Las pérdidas sufridas por las PYMES afectan tanto a sus dueños, como a las personas que trabajan en ellas, considerando que muchas de estas empresas se han visto en la obligación, con ocasión de los perjuicios antes descritos, a reestructurarse para poder continuar funcionando e inclusive a cerrar. Ello ha provocado la pérdida de trabajos para miles de personas, con todas las consecuencias negativas que ello implica para éstas.

Del mismo modo se vio afectada la continuidad de los servicios educacionales prestados por los centros educativos del país, incluyendo establecimientos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (“**JUNJI**”) y de la Fundación Integra, colegios y universidades, cuyas clases fueron suspendidas por los daños de infraestructura que algunos de ellos sufrieron, por las dificultades en el transporte público que impidió acudir a ellos y, en todo caso, para velar por la seguridad de alumnos y trabajadores.

Resulta relevante lo señalado por el ex Presidente, señor Ricardo Lagos en una entrevista en CNN el día domingo 17 de noviembre de 2019:

“*Este es el evento más grave de la historia de Chile. La masividad. En todo Chile. Los saqueos en todas partes. Eso. Durante 4 semanas continuas, no lo conozco una época de esa naturaleza en la historia de este país.”*

## **La Función del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.**

Establecido el contexto fáctico en el que se inscriben las graves imputaciones que se me atribuyen, estimo relevante plantear desde ya ciertas cuestiones vinculadas con el primer capítulo de la Acusación, sin perjuicio de lo que se abordará en los capítulos relativos a la cuestión previa y a la contestación de fondo.

Así, el primer capítulo de la acusación me atribuye haber infringido gravemente la Constitución “*por no haber tomado medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de delitos graves por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de la manifestación social reciente”*.*[[24]](#footnote-24)*

Desde ya, cabe apuntar que las infracciones que la acusación atribuye a Carabineros, durante las graves situaciones ocurridas en el país entre el 18 y el 28 de octubre, tienen su origen en actuaciones particulares en las que habrían incurrido ciertos funcionarios, cuyas responsabilidades penales y administrativas se determinarán de acuerdo a procesos en curso. En ese sentido, cabe destacar que no es función del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, “*desplegar las fuerzas de modo oportuno y apropiado para mantener el orden y la seguridad pública interior*”[[25]](#footnote-25), tal como lo plantea la acusación.

En efecto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública carece de facultades operativas y así lo define el artículo 3 de la Ley 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al establecer las atribuciones de esta autoridad. Así, se destaca que es atribución del Ministro del Interior y Seguridad Pública *“****velar*** *por la mantención del orden público en el territorio nacional”*.

Refrenda esta idea el estatuto constitucional y legal aplicable a Carabineros de Chile. De acuerdo a la Constitución, en particular a su artículo 101, inciso segundo, entre las funciones de Carabineros de Chile se encuentra “***garantizar*** *el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas*” (énfasis agregado), cuyos términos son reiterados por la Ley N° 18.961. El contraste entre el lenguaje usado por el ordenamiento para referirse a las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en particular el verbo “*velar*”, y el que se usa para referirse a la finalidad de Carabineros de Chile, “*garantizar*”, subraya el hecho de que Ministerio del Interior y Seguridad Pública **no tiene competencias operativas** y que estas corresponden a Carabineros de Chile.

Tal distinción está lejos de ser trivial, ella obedece a una razón muy profunda: el carácter profesional de Carabineros de Chile, según está recogido en la Constitución, artículo 101, y en la Ley N° 18.961, articulo 2.

En efecto, es su carácter profesional el que constituye a Carabineros como un servicio público, según ha dictaminado la Contraloría General de la República,[[26]](#footnote-26) **dotado de autonomía operativa y técnica**, sin perjuicio de su sometimiento a las políticas definidas por la autoridad competente que es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que le son aplicables. Esta es la razón de fondo que explica que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no pueda, en caso alguno, dictar instrucciones operativas a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Si lo hiciera, vulneraría gravemente el carácter profesional que ellas tienen conforme a la Constitución y la ley. Por la misma razón, no puede sostenerse, como hace la Acusación, que lo obrado a nivel operativo por integrantes de Carabineros de Chile sea imputable personalmente al Ministro del ramo. Volveremos sobre este punto en el capítulo dedicado a la contestación de fondo.

Sin embargo, quiero dejar establecido que mientras me desempeñé como Ministro del Interior y Seguridad Pública, y dentro de las facultades que el ordenamiento me confiere, instruí que Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus acciones operativas, en las cuales, conforme he explicado, no tengo facultades legales para determinar, se respetaran en ellas la legalidad, protocolos y reglamentos vigentes.

Así, y para una adecuada comprensión de las materias a tratar, expondré como impulsé activamente durante mi gestión asuntos que se relacionan con la modernización institucional de Carabineros, atingentes a la autonomía institucional.

### **Acuerdo Transversal sobre Modernización Institucional de Carabineros de Chile.**

Una preocupación permanente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desde el inicio del Gobierno del Presidente Piñera fue la modernización y profesionalización de las policías. Por eso, apenas asumió su mandato, en el mes de marzo de 2018, llamó a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública.

Acogiendo este llamado de S.E. el Presidente de la República, en abril de 2018 se constituyó una Mesa de Trabajo por la Seguridad, de carácter transversal, integrada por representantes de distintos sectores, quienes durante 90 días entregaron todo su esfuerzo, compromiso y voluntad para buscar consensos y al país un conjunto de propuestas que abordan la temática de la seguridad pública de manera integral. Estas propuestas fueron recogidas dentro del Acuerdo Nacional por la Seguridad, publicado en Julio del 2018, que recoge 150 medidas para abordar la seguridad pública, siendo la primera de ellas la Modernización y Fortalecimiento de las policías.

En esa línea, en noviembre de 2018 el Gobierno envió los cinco primeros proyectos del acuerdo al Congreso. Uno de ellos, el de Modernización de las Policías, establece el reguardo de Derechos Humanos y Probidad Funcionaria (la no discriminación arbitraria, así como la observancia al respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas) y la creación de un sistema para la interposición, tramitación y resolución de los reclamos de la ciudadanía del actuar indebido de Carabineros de Chile.

En forma paralela a la tramitación de dicha iniciativa, en diciembre de 2018, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en conjunto con Carabineros de Chile, impulsó 15 medidas que se podían llevar adelante por la vía administrativa, sin necesidad de una ley. Dentro ellas se encontraban la revisión y actualización constante de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público; la creación de la Dirección de Derechos Humanos; el fortalecimiento de programas de formación continua en Derechos Humanos para el personal operativo, y la creación de un nuevo modelo de prevención y denuncia de conductas indebidas al interior de la Institución.

Posteriormente, el 26 de enero de 2019 suscribí con el H. Senador José Miguel Insulza, Presidente de la Comisión indicada, un Protocolo de Acuerdo sobre la Hoja de Ruta Legislativa para la Modernización Policial.[[27]](#footnote-27)

Este gran avance fue posible gracias al diálogo de varios sectores, tanto de parlamentarios, expertos y autoridades de distinto signo político, y que se materializó en un diagnóstico compartido, en materias como fortalecer el mando civil sobre las policías; robustecer la coordinación entre las instituciones policiales, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio Público en el marco del proceso penal; disponer la especialización preferente de las funciones policiales; reformar los sistemas de formación y la carrera policial; aumentar la transparencia y la eficiencia de la gestión administrativa y financiera de las policías, y generar mecanismos que aseguren estándares en la adquisición de tecnologías y su compatibilidad entre las distintas instituciones. Esta “Hoja de Ruta” incorporó además las medidas administrativas que ya estaba trabajando el Ministerio del Interior y Seguridad Pública con Carabineros, y agregó otras.

A su vez, el protocolo contempla 6 principios orientadores, que deben guiar la reforma que se comenzaba a tramitar:

1.- Terminar con los espacios de autonomía de las instituciones policiales que hoy dificultan su necesario control por parte de la autoridad política, de manera de contar con policías que respondan a las necesidades de un Estado Democrático de Derecho, de manera que las tareas policiales deben estar sujetas a la autoridad civil.

2.- Incorporar parámetros modernos de gestión y planificación estratégica, con una mayor y más eficiente fiscalización, con transparencia hacia la autoridad política y la sociedad civil, con procedimientos claros para la denuncia de irregularidades y faltas a la probidad sujetos a auditorias y control permanentes.

3.- Especialización Preferente: una dedicada en plenitud a la prevención del delito y el resguardo del orden público; y otra abocada a la investigación del delito, en estrecha cooperación con el Ministerio Público.

4.- Profesionalización de la carrera, con énfasis en el mérito.

5.- Modernización de las mallas curriculares, para formar policías dotados de ética, conocimientos, capacidad de acción y ascendiente sobre la ciudadanía a la cual deben proteger.

6.- Integración de las policías en el proceso de reformas.[[28]](#footnote-28)

Es manifiesto que los asuntos referidos a la autonomía de Carabineros constituyen un aspecto central y casi indubitado en el proceso de reforma a la Institución.

Cabe tener presente que han mencionado algunos Senadores con ocasión de la discusión en general y en particular de la iniciativa.

Así, en la sesión del 9 de Enero de 2019, el H. Senador Huenchumilla planteó:

*- El* ***señor HUENCHUMILLA****.- (….) Creo, señor Presidente, que hay tres puntos críticos que nosotros tenemos que resolver. Centralmente, ellos son los siguientes. Tenemos que resolver si vamos a modernizar o vamos a reformar. Tenemos que resolver si vamos a continuar con la naturaleza militar de Carabineros, o le vamos a dar una naturaleza ciudadana, de policía democrática o comunitaria, tal como existe en otras partes del mundo.* ***Y tenemos que resolver el problema de la subordinación y la autonomía****. Como aquí se ha señalado, nosotros debemos resolver, políticamente, si vamos a hacer un cambio cosmetológico, una modernización tecnocrática, o si vamos a efectuar una profunda reforma de la institución, la que, con cerca de cien años, posee la naturaleza que yo describí en el inicio de mi intervención. Esa es una decisión política que tendremos que conversar con el Gobierno: hasta dónde avanzar en la solución de la crisis que estamos viendo. Ahora, tenemos que resolver si vamos a continuar con la naturaleza militar de Carabineros, o si vamos a inclinarnos por una policía ciudadana (…)* ***Y tenemos que ver el tema de la subordinación plena y de la autonomía respecto del poder civil. ¿Dónde está la subordinación y dónde está la autonomía?*** *En mi opinión, la subordinación debe estar en el modelo de combate contra la delincuencia que debemos (…) Decía que la subordinación está en el modelo de combate contra la delincuencia que debemos tener como país y en la planificación estratégica que, a mi juicio, no debe estar en manos de Carabineros: debe definirse en conjunto con la autoridad civil. La autonomía de Carabineros debe estar en los planes tácticos y operativos.* ***Yo no le puedo decir a un policía: "Mire, ponga las tanquetas aquí" o "Coloque veinte carabineros por aquí y otros diez por acá". El plan operativo debe responder a un cierto diseño de protocolo que encaje en la planificación estratégica, el cual tiene que estar dirigido, necesariamente, por la autoridad civil***”(énfasis agregado)

Por su parte, el H. Senador Montes sostuvo en la misma sesión*:*

* *El* ***señor MONTES.-*** *(…) Es una crisis muy seria la que estamos viviendo. Sabemos que ella es estructural, en el sentido de que afecta al corazón de la institución: su doctrina, su ética y valores, su modelo organizativo y operativo, sus sistemas y contenido de formación, su relación con la sociedad, su relación con la autoridad política.*

En la discusión en particular, son ilustrativas las palabras del H. Senador Harboe.

“- El señor **HARBOE**.- *Señor Presidente, este es un proyecto que se enmarca dentro del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, al que muchos concurrimos para poder dotar a este país de mayores condiciones de seguridad.*

*Este es el primer proyecto de ese acuerdo. Establece, en la práctica, el control civil respecto de las instituciones policiales.*

*Esta iniciativa, probablemente, marca el retorno a la normalidad institucional****, porque lo que va a ocurrir a partir de la promulgación de la ley en proyecto es que las instituciones policiales, que van a mantener sus capacidades autónomas para desarrollar acciones operativas, quedarán bajo la sujeción y planificación del Ministerio del Interior. Es decir, los representantes del Presidente de la República, el Ministro del Interior y el Subsecretario del Interior, tendrán un rol destacado desde el punto de vista de la planificación estratégica y también de la planificación operativa.***

*Se consagran en la Ley Orgánica Constitucional normas relativas al respeto de los derechos humanos de todas las personas. Por tanto, esto se transforma en una obligación en el ejercicio de las funciones, y su infracción conlleva, obviamente, un grado de responsabilidad mayor.*

*Este proyecto de ley establece un ecosistema jurídico-administrativo que va a permitir equilibrar la autonomía con la sujeción a la planificación estratégica del representante del Presidente de la República.*

*- (….)Señor Presidente, este proyecto es un avance significativo. Es un avance en control presupuestario; es un avance en control operativo; es un avance en planificación estratégica. Pero también es un avance conceptual, desde el punto de vista de la incorporación en la propia Ley Orgánica de normas relativas a los derechos fundamentales. Y establece la obligación de crear procedimientos internos para observar casos de conductas inapropiadas, donde también el Ministerio del Interior tendrá mucho que decir*” (énfasis agregado).[[29]](#footnote-29)

De lo expuesto, no cabe sino concluir que los espacios de autonomía de Carabineros de Chile eran una materia que nos ocupó desde el primer momento, y constituía además un diagnóstico compartido. Es por eso que pudimos avanzar en la discusión, obtener una aprobación unánime del referido proyecto de ley, y además la suscripción de una Hoja de Ruta para la tramitación de estas materias. Todos estos acuerdos se orientaban a modernizar de una vez por todas las estructuras institucionales que evidentemente se encontraban superadas.

Por la misma razón, no es una sorpresa descubrir que aquellos espacios de autonomía contemplados por la actual ley orgánica de la Institución y desarrollados por años, generan un desafío legislativo orientado a delimitar dichos espacios.

### **Preocupación y acciones en materia de Derechos Humanos**

No puedo dejar de mencionar dentro de los antecedentes preliminares, dadas las graves imputaciones que se plantean en esta Acusación, la preocupación permanente y sostenida que mantuve como Ministro del Interior y Seguridad Pública, al igual que S.E. el Presidente de la República, desde el inicio de la actual Administración, por impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos en nuestras instituciones policiales, y así se realizó a través de distintas medidas.

Ello, ha significado no sólo actuar dentro del marco de la ley, sino observar en sus actuaciones el respeto a los Derechos Fundamentales garantizados en la Constitución y las leyes.

En este marco, en agosto de 2018, el Gobierno se comprometió, entre otras materias, a aprobar, mediante decreto supremo, los lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial, lo cual se materializó en diciembre del mismo año: S.E. el Presidente de la República dictó el DS N° 1.364, que estableció 8 lineamientos generales sobre el uso de la fuerza, entre ellos: respeto y cumplimiento de la ley en todo momento, evitar uso de fuerza en manifestaciones no autorizadas y de carácter no violenta y que exista una intervención policial sujeta a la normativa nacional y tratados internacionales.

Asimismo, y como forma de darle más celeridad a los cambios que se necesitaban para modernizar nuestras instituciones policiales, en diciembre de 2018, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública comenzó a trabajar una quincena de medidas administrativas, que incluían, entre otras materias: la revisión y actualización constante de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público, la creación de la Dirección de Derechos Humanos, el fortalecimiento de programas de formación continua en Derechos Humanos, con elementos de carácter teóricos y prácticos y la creación de un nuevo modelo de prevención y denuncia de conductas indebidas al interior de Carabineros.

En enero de 2019, nos comprometimos con la Comisión de Seguridad del Senado sellando una “Hoja de Ruta” legislativa donde se incorporó una veintena de medidas administrativas (entre ellas el sistema de denuncia de conductas indebidas de Carabineros, la actualización permanente de los protocolos de uso de la fuerza y el compromiso para la creación de la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros de Chile, que era solo un departamento).

En marzo de 2019, se actualizaron todos los protocolos de uso de la fuerza en contextos de control de orden público de Carabineros de Chile, ajustándose a los estándares internacionales de derechos humanos. Para la actualización de los protocolos de uso de la fuerza, Carabineros sostuvo reuniones y recibió observaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez y de la sociedad civil, a través de reuniones con el área temática de Seguridad Pública del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) que asesora a la Subsecretaría del Interior.

Así, en marzo de 2019, se publicó la Circular N° 1.832, sobre uso de la fuerza, que incorpora el principio de responsabilidad, que supone que se debe perseguir: al funcionario que cometa los actos u omisiones que importen el abuso en el uso de la fuerza; a los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos. También se establece el deber de no discriminación como eje del actuar policial, se explicita la prohibición de infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el reforzamiento de la excepcionalidad en el uso de armas de fuego en procedimientos que involucren niños, niñas y adolescentes.

De la misma manera, en marzo de 2019 se publicó la Orden General N° 2.635, que actualiza los protocolos mantención de orden público, en cumplimiento de la instrucción presidencial de realizar dicha actualización dentro del plazo de 90 días. En dicha Orden General, se incorporan protocolos específicos para el caso de establecimientos educacionales de enseñanza media o básica; se establece una mejor regulación para casos de privación de libertad en niños, niñas y adolescentes; consideraciones especiales para niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios; se regula, además del trabajo con el INDH, el correspondiente con la Defensoría de los Derechos de la Niñez, medios de comunicación social y organizaciones de la sociedad civil.

También en marzo de 2019, Carabineros de Chile dictó la Orden General N° 2640, que eleva el Departamento de Derechos Humanos a Dirección. Los contenidos y las evaluaciones de los cursos en Derechos Humanos para el personal operativo de Carabineros se actualizaron en julio de 2019, tras el trabajo de una mesa interinstitucional (Carabineros de Chile, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el INDH y la Defensoría de la Niñez) para revisar y perfeccionar los cursos para el personal operativo.

Además, desde septiembre de 2019, Carabineros de Chile tiene disponible a través de la web de Comisaría Virtual ([www.comisariavirtual.cl](http://www.comisariavirtual.cl)) el módulo que permite realizar denuncias de conductas indebidas de funcionarios de Carabineros, ya sea en forma anónima o identificándose. En octubre de 2019, Carabineros de Chile dictó la Orden General que aprueba el Plan Institucional en Derechos Humanos, que construye la hoja de ruta de la institución para su fomento, en su malla de formación inicial.

De la misma manera, durante el Estado de Emergencia, tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones recibieron instrucciones expresas del Gobierno, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de que su actuación para restablecer el orden público debían realizarse con estricto apego a los protocolos de uso de la fuerza vigentes y que el cumplimiento de su deber debía ser dentro del marco de lo que la ley establece. Así lo señalé en forma pública, reiteradamente.

Asimismo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública instruyó a las policías, y así lo señalé también públicamente en múltiples oportunidades, que ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, inmediatamente la institución debía abrir el respectivo sumario disciplinario, y dar cuenta de ello al Ministerio Público, para que fueran investigados y sancionados, si así corresponde.

**Efectuadas las consideraciones preliminares y teniendo presente que la Acusación me atribuye hechos de terceros, en los que no he tenido participación directa ni indirecta, y además respecto de hechos que están actualmente en investigación, formulo a continuación cuestiones previas de admisibilidad.**

# II.- Formula Cuestiones Previas de Admisibilidad

Como se expresó, cada uno de los capítulos del libelo acusatorio debe ser admisible en los términos que se derivan del texto de las disposiciones de los artículos 52 y 53 de la CPR, y de las garantías del debido proceso y la responsabilidad personal contempladas en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución.

Sin embargo, como se explicará a continuación, los capítulos acusatorios no cumplen con los requisitos mínimos para que esta Honorable Corporación pueda considerar su mérito, razón por la cual debe declararse inadmisible.

Antes de continuar con la exposición de motivos por los cuales esta Acusación no debe acogerse a trámite, quiero expresar que lamento profundamente todos aquellos casos que generaron dolor, lesiones o incluso la muerte de algunos compatriotas. Casos en que, por un actuar alejado de los protocolos, uso excesivo de la fuerza, se cometieron abusos o delitos y no se respetaron los derechos de nuestros compatriotas, siempre impulsé e instruí, y así lo señalé públicamente, que debían ser denunciados inmediatamente al Ministerio Público, para su investigación y, si así correspondía, como es propio de un Estado de Derecho donde funcionan las instituciones, fueran sancionados por la Justicia.

Tengo la tranquilidad de haber hecho siempre todo lo que estuvo de mi parte y dentro de mis facultades, para evitar dichas situaciones, y del mismo modo, no puedo sino solidarizar con todas las chilenas y chilenos, civiles y uniformados, que han sido víctimas de violencia. Hoy confío en el trabajo serio y responsable que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial y todos los órganos competentes, llevan adelante con el objeto de determinar las responsabilidades que correspondan, y que eso traiga algún consuelo para aquellas familias que han sido afectadas por la agresión y violencia.

Mi compromiso con el Estado de Derecho ha sido total y se verifica por la colaboración y transparencia con la que he actuado durante toda mi gestión. Por eso, velar por la mantención de este es esencial para garantizar el actuar de todos los órganos del Estado, en todo momento, y también durante la vigencia de los estados de excepción constitucional. En este contexto, los derechos fundamentales de las personas continuaron bajo resguardo, porque todos los órganos del Estado se mantuvieron sujetos a los límites ordinarios, sin que la declaración de estado de excepción constitucional alterara en absoluto esta regla.

La mantención de la institucionalidad, corroborada por el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Contraloría General de la República, entre otros, es la prueba manifiesta de la vigencia del Estado de Derecho y es la garantía de la total colaboración y transparencia del Estado para el esclarecimiento de aquellos hechos que se denuncian y son materias de investigación.

## **Primera Cuestión Previa de Admisibilidad: la Acusación contraviene el debido proceso**

Entre las imputaciones que me atribuyen en la Acusación, que son abordadas de manera confusa a lo largo del libelo, se encuentran las siguientes:

1. “*Omitir deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de la manifestación social reciente*”[[30]](#footnote-30);
2. “*[O]mitir tomar acciones para evitar y tolerar la flagrante vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso legal (art. 19 N° 3), de la inviolabilidad del hogar (art. 19 N° 5) y de la libertad personal y seguridad individual (art. 19 N° 7) de miles de personas en la República producto de aplicarse medidas no contempladas en un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que es el que decretó concurriendo con su firma.*”[[31]](#footnote-31).

No obstante, de la sola lectura de dichas imputaciones es posible advertir que por una parte se me atribuye una actuación omisiva en la que no se identifica en su formulación cuáles serían las conductas esperadas (“medidas eficaces”) que sostiene habría omitido, medidas que, por lo demás, deberían ser eficaces, sujetándolas a un test de eficacia o ponderación no contemplado para esta sede. La indeterminación anterior hace imposible, en mi defensa, probar su inexistencia y a la H. Cámara pronunciarse sobre su existencia, infringiendo con ello el principio del debido proceso, garantizado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución.

## **El debido proceso resulta plenamente aplicable a la acusación constitucional**

### La Constitución ordena respetar el debido proceso siempre que se ejerzan facultades jurisdiccionales

En el artículo 19 N° 3 de la Constitución se reconoce el debido proceso –el cual puede definirse como aquel derecho que “*franqueado el acceso a la jurisdicción, permite que el proceso se desarrolle con todas las garantías esenciales, racionales y justas que contribuyan a un procedimiento equitativo y no arbitrario*”[[32]](#footnote-32)– como un derecho fundamental,[[33]](#footnote-33) que debe ser respetado en todo procedimiento de un órgano del Estado que ejerza potestades jurisdiccionales.

En efecto, así se extrae de la simple lectura del ya mencionado artículo, el cual señala que “***toda sentencia*** *de un* ***órgano que ejerza jurisdicción*** *debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos*”.

### **La acusación constitucional supone el ejercicio de una función jurisdiccional por parte del Congreso Nacional**

La acusación constitucional supone el ejercicio de una función jurisdiccional por parte del Congreso Nacional. Esta idea ha sido ampliamente reconocida a nivel doctrinario, concluyéndose que la acusación constitucional es:

“*[u]n* ***juicio constitucional****. Dicha naturaleza emana de que ha sido establecido por nuestra propia Carta Fundamental como tal,* ***configurándose todos los elementos típicos de la función jurisdiccional*** *desde el momento en que existe un acusador, un acusado, una sanción y un órgano llamado a su conocimiento y resolución, que en este caso es el Parlamento. Por lo tanto****, estamos claramente frente a un caso de jurisdicción constitucional****, en que es la propia Constitución la que ha creado un* ***órgano jurisdiccional especial***” (énfasis agregado).[[34]](#footnote-34)

Del mismo modo, este carácter jurisdiccional ha sido confirmado a nivel jurisprudencial por nuestro Tribunal Constitucional, el cual ha establecido que:

“***[e]l Congreso Nacional*** *-órgano colegislador-* ***ejerce funciones jurisdiccionales al conocer de la acusación constitucional****, especialmente el Senado de la República, quien debe resolver como jurado, en los términos que establece el artículo 51 N° 1 de la Constitución Política de la República*” (énfasis agregado).[[35]](#footnote-35)

Sin ir más lejos, el carácter jurisdiccional de la acusación constitucional ha sido incluso reconocido por los acusadores, quienes han señalado que “*en cuanto a la naturaleza jurídica de la acusación constitucional, la doctrina mayoritaria la ha conceptualizado como una figura mixta, con elementos* ***de juicio jurídico-político***” (énfasis agregado).[[36]](#footnote-36)

### La acusación constitucional, en cuanto supone el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Congreso Nacional, debe respetar la garantía del debido proceso

Dado que, como se señaló en el punto anterior, la acusación constitucional supone el ejercicio de una función jurisdiccional por parte del Congreso Nacional, la garantía del debido proceso debe ser respetada en el ejercicio de esta función.

Este punto también ha sido refrendado por la doctrina, la cual ha señalado que “*si bien la acusación constitucional no es un proceso penal, si asimilamos la acusación constitucional a un procedimiento sancionatorio que afecta derechos fundamentales****, este debe asumir los parámetros básicos de un debido proceso***”.[[37]](#footnote-37)

## **La Acusación se funda en imputaciones genéricas y en hechos no acreditados**

Habiendo quedado establecido que la garantía del debido proceso legal resulta plenamente aplicable a un procedimiento de este tipo, corresponde explicar por qué ese derecho se ve vulnerado por la Acusación.

Esto ocurre por dos razones principales. En primer término, la Acusación se basa en hechos cuya calificación jurídica aún no se ha establecido por los órganos competentes para ello, y en consecuencia, aún no se han acreditado. Ello es reconocido por los acusadores cuando califican ciertos hechos en los que fundan la Acusación, como “presuntos”. En segundo lugar, la Acusación considera imputaciones genéricas e imprecisas, ya sea porque se refieren a hechos gravísimos cometidos por terceros, porque se basan en aseveraciones que en sí mismas son contradictorias, o porque en su formulación no se contiene un mínimo para que se pueda configurar la imputación que me atribuyen los acusadores.

### **Alegaciones contenidas en el Capítulo Primero de la Acusación**

En el Capítulo Primero de la Acusación se me intenta hacer responsable de hechos gravísimos, que habrían sido cometidos por terceros, y que en opinión de los acusadores, habrían constituido vulneraciones del derecho a la vida y la integridad física de “*miles de personas en el territorio de la República*”.[[38]](#footnote-38)

En efecto, los acusadores me atribuyen como consecuencia de las omisiones que no especifican, el “*uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de la manifestación social reciente*”, imputándome así conductas de terceros fundadas en gravísimas acusaciones de delitos que están actualmente en investigación y cuya ocurrencia deberá ser establecida, o no, por los Tribunales de Justicia.

Es decir, las denuncias y querellas sólo dan cuenta de procesos en curso y no permiten dar por cierta la calificación de los hechos que en ellos se realiza, las circunstancias de su ocurrencia ni tampoco de sus partícipes. Cabe agregar que no se trata de hechos en los que yo haya tenido participación alguna, en ningún grado ni de ningún modo.

Algunos de los antecedentes en que se basa la Acusación ni siquiera son denuncias y querellas realizadas ante las autoridades correspondientes, sino que meras declaraciones en medios de comunicación o de agrupaciones políticas.[[39]](#footnote-39) Llama la atención que se afirme que entre las instituciones que “*han hecho denuncias respecto de vulneración de derechos humanos*” se encuentre la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, pues en realidad se trata de una declaración que expresa preocupación por ciertas denuncias, pero no las da por acreditadas.[[40]](#footnote-40)

Los supuestos hechos que alegan los acusadores no han sido acreditados, y así lo reconocen en la Acusación. Así, por ejemplo, se refieren a homicidios que “*presuntamente*” habrían ocurrido a manos de agentes del Estado[[41]](#footnote-41), en los que, por cierto, no he participado.

Este tratamiento de los hechos que fundan la Acusación produce una doble vulneración al debido proceso. Por una parte, dificulta gravemente el derecho a la defensa de este acusado, toda vez que supone hacerse cargo de hechos controvertidos, no acreditados y afirmados sin antecedentes de respaldo.

En segundo lugar, tratándose de imputaciones tan graves como las que formula la Acusación, la utilización de esos hechos en mi contra, no existiendo pronunciamiento de los tribunales competentes, supone una vulneración grave de mi derecho a la presunción de inocencia, el cual “*[…] impide que se trate como a un culpable a la persona a quien se le atribuye un hecho punible, cualquiera que sea el grado de verosimilitud de la imputación, hasta tanto el Estado, por intermedio de los órganos judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad en esta materia, no pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena*”.[[42]](#footnote-42)

Lo anterior es particularmente relevante por cuanto la decisión final sobre una acusación constitucional recae sobre si el acusado es o no culpable de la **infracción, delito o abuso de poder** que se le imputa al acusado (artículo 53 CPR), de manera que esta presunción tiene aplicación en esta instancia.

Se me acusa de haber omitido las medidas necesarias para evitar graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, los acusadores nada señalan acerca de que medidas serían aquellas que consideran como eficaces y que se habrían omitido con ese objeto o qué atribuciones legales dejó de ejercer este ex Ministro de Estado, en el marco de sus competencias, a fin de hacerle responsable de hechos tan graves.

Muy por el contrario, el Capítulo Primero se limita a enumerar, con antecedentes poco rigurosos, hechos gravísimos que habrían ocurrido en las últimas semanas. Ellos constituirían vulneraciones al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de “*miles de personas en el territorio de la República*”,[[43]](#footnote-43) por las que yo sería directamente responsable.

En este aspecto, el silencio de los acusadores acerca de la esfera de competencias que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en relación a Carabineros de Chile, resulta especialmente delicado. La Acusación omite totalmente el hecho de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene competencia política y normativa en relación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, pero que carece de competencia operativa y técnica, según será explicado con detalle. Dicho de otro modo, las omisiones que se me imputan solo pueden referirse a aquellas materias en las que estoy facultado para intervenir, y como se ha expuesto, no hay ninguna duda en que el Ministro del Interior y Seguridad Pública carece de competencias en materias operativas de Carabineros.

Luego, como se adelantó, se ha infringido el debido proceso puesto que, al denunciarse una omisión, se ha debido señalar con precisión la conducta esperada y cómo su omisión ocasionó los hechos que se acusan. En efecto, los acusadores sostienen que, en mis intervenciones ante los medios de comunicación, no habría mencionado los hechos gravísimos que denuncian, que no habría enviado un mensaje de moderación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y no les habría recordado públicamente sus deberes legales.[[44]](#footnote-44) Sin embargo, dichas afirmaciones no solo no se condicen con la realidad, sino que son insuficientes para generar el vínculo causal que pretenden los acusadores.

De todas las imputaciones formuladas, las únicas que satisfacen mínimamente un estándar de precisión compatible con el debido proceso son dos omisiones en las que según los acusadores, sería directa y personalmente responsable. Ellas son que no se habría dado cumplimiento al deber de actualizar los protocolos de actuación de Carabineros de Chile, contenido en el DS N° 1.364 y que habría omitido la fiscalización de la Orden General N° 2.635, de 2019, de Carabineros de Chile.

Sin embargo, los hechos invocados son completamente falsos y carentes de fundamento legal, **pues dichos protocolos sí fueron actualizados en marzo de este año**. Como se esperaría, quienes realizan una acusación de esta naturaleza y gravedad, deberían conocer que según consta en la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile, se aprobaron los nuevos “Protocolos de Intervención para el Mantenimiento del Orden Público”.[[45]](#footnote-45) De hecho, de conformidad a los lineamientos entregados por el DS N° 1.364, se actualizaron las instrucciones respecto al uso de la fuerza por medio de la Circular N° 1.832, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile.

Respecto de lo segundo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública fiscalizó el cumplimiento de tales protocolos, mediante la revisión de los informes que la ley exige.[[46]](#footnote-46) Por tanto, la absoluta falta de fundamento de estas imputaciones es suficiente para tenerlas por no presentadas y declarar inadmisible el capítulo acusatorio que las contiene.

Así, el cargo formulado no debe admitirse pues atribuye responsabilidades al acusado por hechos de terceros, sin que éstos se encuentren acreditados, infringiendo el derecho a un debido proceso.

1. **Alegaciones contenidas en el Capítulo Segundo de la Acusación**

Siguiendo la línea del Capítulo Primero, el Capítulo Segundo acusatorio insiste en imputarme graves infracciones a la Constitución fundándose en hechos no acreditados y sin señalar de qué forma precisa se habrían configurado esas infracciones.

Lo anterior, incluso después de que los propios acusadores reconocen que, en los estados de excepción constitucional, es “*[…] muy complejo establecer una clara delimitación de las facultades de las fuerzas de orden que operan en Estado de Excepción así como las* ***responsabilidades políticas imputables a dichos hechos***”.[[47]](#footnote-47) (énfasis agregado)

Así, se me atribuye responsabilidad basándose en que, en los Decretos de Estado de Emergencia, el Presidente de la República no habría delegado atribuciones de restricción de derechos en los Jefes de la Defensa Nacional, lo que habría quebrado la cadena de mando. Cuestión que, como se verá más adelante, es completamente errada.

De igual manera se me atribuye directamente responsabilidad por supuestas “*detenciones en lugares y circunstancias en que la ley no lo habilita*”.[[48]](#footnote-48) Acusación que, en primer lugar, no ha sido acreditada ni respaldada por los acusadores, y que, nuevamente, ignora la distinción entre la competencia política y normativa que tiene el Ministerio del Interior y Seguridad Pública sobre las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y la competencia operativa de la que dicho Ministerio claramente carece.

Más aún, la parte acusadora arguye que el toque de queda –decretado por los Jefes de la Defensa Nacional– habría impuesto a la población una restricción a la libertad de locomoción de mayor intensidad que la permitida en un Estado de Emergencia. Nuevamente, esta imputación ignora la distinción entre competencia política y operativa y, además, como se podrá apreciar más adelante, es un argumento que ha sido descartado por nuestros propios tribunales de justicia.

A tal punto llega la liviandad y generalidad de las acusaciones, que se me acusa de haber afectado el prestigio de Chile en el exterior. Esto, sin aportar ningún antecedente o cifra medianamente objetiva que dé cuenta de que esto realmente habría ocurrido. Incluso, la parte acusadora llega al absurdo de vincular mis actuaciones con la no asistencia de un jefe de Estado a la APEC 2019 con una supuesta merma en la imagen internacional del país.[[49]](#footnote-49) ¿Cómo se vinculan mis actuaciones con la no asistencia del Presidente de Rusia? Del mismo modo, ¿Cómo se vincula la no asistencia de un Presidente con un deterioro del prestigio nacional? La parte acusadora guarda silencio en este punto.

## **Segunda Cuestión Previa de Admisibilidad: La Acusación se funda en hechos de terceros que son arbitrariamente imputados a este Acusado**

## **La acusación constitucional sólo procede por actos u omisiones en que la autoridad acusada sea personal y directamente responsable.**

De acuerdo al texto de la Constitución, toda acusación constitucional debe cumplir con un requisito básico: dirigirse en contra de alguna de las autoridades que la Constitución señala por actos u omisiones que le sean personal y directamente imputables. No corresponde, por tanto, desviar los fines de este instrumento para sancionar a una autoridad por actos u omisiones que no realizó materialmente o no se encuentren bajo la esfera de sus atribuciones. Hacerlo, supone una vulneración grave del texto constitucional y una injusticia patente.

Así se concluye, en primer lugar, de las normas constitucionales aplicables. Por una parte, respecto de los Ministros de Estado, el artículo 52 N° 2, letra b), de la Constitución exige de la autoridad acusada el “*haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno*”. En otras palabras, se exige una conducta del acusado, sea activa u omisiva, que pueda subsumirse en alguna de las causales que especifica el texto. Por otra parte, en la misma línea, el artículo 53 N° 1 de la Constitución, señala que el Senado “*se limitará a declarar si el acusado es o no* ***culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa***” (énfasis agregado). Nuevamente, los términos del texto constitucional exigen una conducta que pueda ser reprochada a la persona acusada, en razón de actos u omisiones que le sean subjetivamente imputables.

No procede, entonces, una acusación constitucional que se dirija en contra de un ex Ministro de Estado por hechos de terceros mientras no se verifique una acción u omisión que le **sea personal y directamente imputable al acusado**. Como se verá en detalle, la Acusación está llena de imputaciones gravísimas que corresponden a hechos de terceros y respecto de las cuales este ex Ministro del Interior y Seguridad Pública cumplió plenamente sus deberes constitucionales y legales, y no puede asignársele responsabilidad alguna.

### **Los precedentes de esta H. Corporación y la doctrina más autorizada han confirmado que la acusación constitucional sólo procede por hechos personal y directamente imputables al acusado**

La exigencia constitucional de que las acusaciones constitucionales se fundamenten en conductas que sean personal y directamente imputables al acusado ha sido respaldada transversalmente por la práctica de esta H. Corporación. En numerosas ocasiones, y por todos los sectores políticos, se ha sostenido que sin ese reproche subjetivo la acusación constitucional resulta improcedente. Resulta lamentable constatar que los acusadores han pasado por alto ese precedente ya asentado.

Así, por ejemplo, don Alejandro Silva Bascuñán da cuenta de que, ya en el año 1945, resolviendo sobre la acusación interpuesta en contra del ex Ministro Sótero del Río, la comisión informante señalaba que “*la acción* ***solo procede siempre que se refiera a un acto personal del Ministro****, debiendo tenerse por tal aquel en el cual le ha cabido efectiva participación (…)*”[[50]](#footnote-50). La misma postura ha sido reiterada por esta H. Cámara en numerosas ocasiones:

* En la acusación dirigida en contra de los ex Ministros, Alejandro Foxley y Alejandro Hales, en 1994, esta H. Corporación reafirmó lo dicho al sostener que la ejecución de la ley solo era exigible a aquellas autoridades a quienes la propia ley había habilitado para ello;[[51]](#footnote-51)
* En la acusación intentada en contra del ex Ministro de Educación, don José Pablo Arellano, en 1997, nuevamente esta H. Cámara sostuvo que, habiéndose cumplido la obligación de dictar la normativa necesaria para reconocer la capacitación de profesores, no cabía asignarle responsabilidad al acusado si dicho reconocimiento no se había producido por hechos que no le eran imputables;[[52]](#footnote-52)
* En la acusación interpuesta en contra de don Ricardo Lagos, el año 1998, en su calidad de ex Ministro de Obras Públicas, la que fue rechazada por estimarse, entre otras razones, que las actuaciones impugnadas no le eran personal y directamente imputables;[[53]](#footnote-53)
* En la acusación dirigida en contra del ex Ministro de Justicia, don Luis Bates, el año 2004, caso en el que la cuestión previa fue acogida precisamente por estimarse que los hechos no podían ser de competencia del acusado;[[54]](#footnote-54)
* En las acusaciones dirigidas en contra del ex Ministro del Interior, don Rodrigo Hinzpeter, los años 2011 y 2012, en que se hizo valer el mismo punto, como parte de la cuestión previa, esta H. Cámara reafirmó, una vez más, lo que venimos señalando, en cuanto a que la responsabilidad constitucional solo procede por actos que le sean personal y directamente imputables al acusado;[[55]](#footnote-55)
* En la acusación constitucional interpuesta en contra de la ex Ministra de Salud, doña Carmen Castillo, en la que la cuestión previa fue aprobada, entre otras razones, porque se estimó que las acusaciones se referían a hechos que estaban fuera de su competencia;[[56]](#footnote-56) y
* En la acusación constitucional intentada en contra de doña Javiera Blanco, ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos, el año 2016, nuevamente esta H. Corporación confirmó el criterio que venimos comentando, al acoger la cuestión previa fundándose en la falta de responsabilidad personal de la Ministra.[[57]](#footnote-57)

De todos estos precedentes, resulta particularmente pertinente lo dicho por las defensas de las ex Ministras, doña Carmen Castillo y doña Javiera Blanco. En el caso de la ex Ministra Castillo, recogiendo precisamente la práctica de esta H. Corporación, la defensa a cargo del abogado don Javier Couso señaló:

“***[l]a acusación constitucional exige que los hechos que son aptos para dar lugar a alguna de las causales hayan sido cometidos personalmente por la autoridad acusada****. Así ha sido establecido en reiteradas oportunidades por la Cámara de Diputados, por ejemplo, en 1994, en la acusación constitucional en contra de los entonces ministros de Hacienda, señor Alejandro Foxley, y de Minería, el fallecido señor Patricio Hales.* ***Se ha sostenido por la Cámara de Diputados que imputar a un acusado responsabilidad por fallas sistémicas u orgánicas vulnera el requisito de imputar responsabilidades estrictamente personales***” (énfasis agregado);[[58]](#footnote-58) y

“*Respecto de cada autoridad acusable, se exige la configuración de la responsabilidad individual. No se les juzga por la actuación general del gobierno. Por el contrario, la* ***actuación que puede dar lugar a una acusación debe ser estrictamente personal y realizada dentro del ámbito de competencias de la autoridad***” (énfasis agregado).[[59]](#footnote-59)

Por su parte, don Jorge Correa, abogado que representó a la ex Ministra Blanco, insistió en el mismo criterio, recogiendo la tradición ininterrumpida de esta H. Corporación:

“*Debe acogerse la cuestión previa por cuanto la acusación no persigue la responsabilidad personal y directa de la ministra, sino que le atribuye responsabilidad por hechos de terceros.* ***La loable tradición de esta honorable Cámara de Diputados ha sido desestimar todas las acusaciones en virtud de las cuales se acusa a un ministro por hechos de terceros***” (énfasis agregado);[[60]](#footnote-60) añadiendo al respecto:

“*Sé que los precedentes no son obligatorios en esta instancia, pero* ***el principio básico y de civilización es que las personas responden por sus hechos, los cuales deben ser claros y precisamente enunciados como actuaciones personales***” (énfasis agregado).[[61]](#footnote-61)

Estamos, entonces, frente a un requisito que goza de amplísimo respaldo en la tradición de esta H. Corporación, y no podría ser de otro modo. Como señaló don Jorge Correa, la responsabilidad personal se trata de un “*principio básico y de civilización*”.[[62]](#footnote-62)

A lo dicho debe agregarse, que esta ha sido también la opinión de la doctrina más autorizada que se ha pronunciado al respecto. Sobre este punto, el profesor Alejandro Silva, señalaba que no procede:

“*[****s]ancionar a una persona con una especia de responsabilidad penal por un acto del cual no es responsable****, siendo distinto, a su juicio, cuando un Ministro de Estado no ha cumplido un deber propio de su cargo, que podría configurar un acto delictivo, como es velar por el normal funcionamiento de un servicio público*” (énfasis agregado).[[63]](#footnote-63) Agregando que:

“*[t]oda forma de responsabilidad ha de revestir carácter personal y no fundarse en decisiones o actuaciones que no se produzcan mediante su directa participación, salvo por excepción respecto de quienes están particularmente obligados, en virtud de su superior potencialidad directiva, a velar por la salvaguardia de la recta actuación de sus subordinados, escogidos en razón de la confianza que les merecieron al llamarlos*.”[[64]](#footnote-64)

En doctrina se ha señalado que la infracción a la Constitución es un ilícito que exige acciones positivas o negativas atribuibles directamente a la actuación de un funcionario imputado que debe verificarse como un quebrantamiento de la norma constitucional.[[65]](#footnote-65)

Así lo ha resuelto en diversas oportunidades anteriormente la Cámara de Diputados, al acoger cuestiones previas. Así, por ejemplo, en la acusación constitucional en contra del ex Ministro de Justicia, Luis Bates la Comisión informante señaló que “[…]*en caso alguno puede prosperar una acusación constitucional que se funda en infracciones o incumplimientos de otras personas, sean estas autoridades o particulares, por cuanto* ***la responsabilidad que persigue hacer efectiva la acusación es siempre de carácter personal***” (énfasis agregado).[[66]](#footnote-66)

Por su parte, en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ex Ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, se señaló con claridad que la responsabilidad que se atribuye a la autoridad respectiva debe ser personal, y que no se puede pretender enjuiciar actos antijurídicos de terceros.

Específicamente se sostuvo lo siguiente: “*Se trata, entonces, de una responsabilidad constitucional de tipo subjetivo, y no objetivo, y por* ***actos propios y no por actos ajenos o de terceros****; ya que si se trata de enjuiciar actos antijurídicos de funcionarios subalternos, se debe recurrir al procedimiento disciplinario por responsabilidad administrativa previsto en el Estatuto Administrativo. En este punto es menester hacer presente que el jurista señor* ***Silva Bascuñán cita en su informe en derecho de 16 de octubre de 1998 las opiniones vertidas en la comisión Ortúzar por los comisionados señores Bertelsen y Guzmán, en orden a que la responsabilidad en el ´impeachment´ es de tipo personal y por incumplimiento de los deberes propios del cargo***” (énfasis agregado).[[67]](#footnote-67)

### **Por lo demás, la responsabilidad personal es una exigencia mínima de justicia al ejercer el *ius puniendi* del Estado**

Como es lógico, la responsabilidad personal se trata de un principio básico de justicia en cualquier examen de responsabilidad. Ella es la regla generalísima en todas las áreas del derecho, admitiendo escazas y calificadas excepciones, todas ellas dispuestas expresamente por la ley, y resulta especialmente aplicable al derecho sancionador. En efecto, el ejercicio del *ius puniendi* estatal siempre se ha entendido como la respuesta a un acto que puede ser imputado subjetivamente.

De modo que no procede la Acusación si los actos que configurarían una responsabilidad constitucional no son, como resulta evidente en este caso, jurídica y estrictamente imputables de forma personal a la autoridad acusada.

## **La Acusación se funda en hechos de terceros y no en actos personales del acusado.**

### **El Capítulo Primero de la Acusación imputa a este ex Ministro de Estado hechos de terceros que escapan el ámbito de su responsabilidad**

### **Hechos de terceros que se imputan a este ex Ministro de Estado en el Capítulo Primero de la Acusación**

En relación al Capítulo Primero, la Acusación dice imputarme el haber omitido“*deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado*”.[[68]](#footnote-68) Sin embargo, al detallar los hechos que fundarían esa imputación prácticamente nada señala la Acusación sobre actos u omisiones de este ex Ministro de Estado. Las únicas referencias al respecto consisten en una pretendida omisión, esto es un supuesto incumplimiento del deber de actualizar los protocolos de actuación de Carabineros de Chile, al tenor del DS N° 1.364, y una supuesta falta de fiscalización de la Orden General N° 2.635, de 2019, de Carabineros de Chile; ambos reproches completamente infundados, según se acreditará al contestar el fondo.

En efecto, cualesquiera sean las omisiones que se me atribuyen (las que, por cierto, no se especifican), éstas no pueden consistir, al mismo tiempo, en el ejercicio abusivo de mis facultades (que tampoco se especifican).

De este modo, esta imputación infringe el principio lógico de no contradicción, lo que conduce necesariamente a declarar inadmisible este cargo y, eventualmente, el capítulo completo, por cuanto de lo contrario, se sometería a la H. Cámara y, eventualmente, al H. Senado, a presentar y resolver una acusación cuyos presupuestos se anulan entre sí, infringiendo la garantía del debido proceso.

Además, el cargo no indica la forma en que este supuesto ejercicio abusivo de mis atribuciones como Ministro del Interior y Seguridad Pública habría afectado gravemente el honor y la seguridad de la nación. Luego, por las mismas razones expuestas respecto de la primera imputación, debe declararse inadmisible.

Los demás antecedentes del Capítulo Primero dicen relación con infracciones gravísimas que habrían cometido efectivos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, pero que escapan completamente a las atribuciones que la ley concede al Ministro del Interior y Seguridad Pública. En efecto, la Acusación no logra siquiera enunciar cuáles serían las supuestas omisiones que me harían responsable de los graves hechos que se relatan para fundar esta acción. En otras palabras, la Acusación insinúa una cosa, pero el papel dice otra. Los acusadores afirman que se basan en omisiones personales de este ex Ministro de Estado, cuando, en realidad, la Acusación se fundamenta en hechos de terceros por los que pretenden hacerme responsable.

Por otra parte, comparte con la primera imputación de este capítulo la tendencia de atribuirme hechos que no están acreditados y que, de estarlo, serían de responsabilidad de terceros, como la supuesta “violencia contra las personas provocada por las fuerzas policiales”.

¿Cuáles son esos hechos de terceros por los que pretende hacerse responsable a este ex Ministro de Estado? Una revisión del Capítulo Primero de la Acusación basta para confirmar que las imputaciones que ahí se realizan corresponden a hechos en los que este ex Ministro no intervino ni directa ni personalmente. Ahí se me pretende hacer responsable de hechos tales como “*delitos vinculados a tortura y otros tratos crueles*”[[69]](#footnote-69); las cifras de civiles heridos[[70]](#footnote-70); el caso de un “*menor detenido junto a tres adultos más*”, en la 43° Comisaría de Peñalolén[[71]](#footnote-71); un caso de “*violencia sexual contra estudiante de medicina en Pedro Aguirre Cerda*”[[72]](#footnote-72); un caso de abuso policial ocurrido en Buin, en que la víctima habría sufrido riesgo vital[[73]](#footnote-73); las cinco querellas por homicidio presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante, “**INDH**”)[[74]](#footnote-74); las lesiones oculares de civiles[[75]](#footnote-75); y distintos relatos recogidos en medios de comunicación sobre los mismos hechos.[[76]](#footnote-76)

Al margen de la liviandad con que son tratados estos hechos gravísimos por la Acusación, cuestión de la que me haré cargo al contestar el fondo, resulta evidente que todos ellos corresponden a infracciones que, están en conocimiento de los tribunales de justicia e investigadas por el Ministerio Público, en muchos casos con participación del INDH como parte querellante. Es decir, son hechos de los que solo conocemos su resultado, pero no es posible atribuir, en este momento, participación ni circunstancias de comisión, asunto que es materia de la investigación. Cabe reiterar en que ninguno de aquellos hechos he tenido participación, en ningún grado ni de forma, ni activa u omisiva.

Finalmente, debo destacar que la existencia de denuncias, querellas e investigaciones es una demostración de la fortaleza de nuestra institucionalidad, cuyo funcionamiento no se vio alterado por los graves y violentos hechos que afectaron a nuestro país.

### **Ámbito de responsabilidad que le corresponde al Ministro del Interior y Seguridad Pública**

Para entender a cabalidad este punto, corresponde precisar cuál es al ámbito de responsabilidad del Ministro del Interior y Seguridad Pública en las actuaciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y en las eventuales vulneraciones de derechos que cometan sus integrantes.

Respecto de dichas operaciones, el Ministro del Interior y Seguridad Pública es responsable dentro de los límites que señala la ley, sin que pueda imputársele cualquier infracción ocurrida en ellas. En otras palabras, el ámbito de su responsabilidad queda circunscrito al cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios. Si no se acredita una infracción de ese tipo, sancionar a un Ministro del Interior y Seguridad Pública por infracciones cometidas a nivel operativo, por funcionarios específicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, resulta claramente contrario a derecho y a cualquier noción básica de justicia.

En primer término, de acuerdo a los términos del artículo 1 de la Ley N° 20.502, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el “*colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión política en estas materias*”; adicionalmente, el artículo 3, letra b), dispone que, entre sus atribuciones, se encuentra “*Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional*”. Cabe señalar, que, en este aspecto, la Ley N° 20.502 no hace más que seguir las reglas generales aplicables a la Administración del Estado, en particular la Ley N° 18.575, en su artículo 22, que establece que los Ministerios solo en casos calificados por ley podrán “*actuar como órganos administrativos de ejecución*”.

Contrario a lo afirmado por los acusadores, el deber de velar por el orden público no dice relación con el mando técnico y operativo en el “*despliegue*” de las fuerzas de orden.[[77]](#footnote-77) La propia ley se encarga de especificar en qué consiste ese deber general de velar por el orden público, y lo hace en términos muy distintos a lo pretendido por los acusadores. Señala la Ley N° 20.502, en su artículo 3, letra b), que, en cumplimiento de ese deber, el Ministerio solicitará a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, al menos semestralmente:

* “*[i]nformes, antecedentes y estadísticas tendientes a materializar una evaluación de las medidas y programas adoptados por dichas Fuerzas para una eficaz, racional y eficiente mantención del orden público, tales como aquellos relativos a la distribución del personal;*”
* “*[m]edidas para el control e investigación de delitos;*”
* “*[l]os datos sobre la ocurrencia de delitos en los cuadrantes donde se aplique el plan respectivo junto con las acciones y medidas adoptadas a su respecto;*”
* “*[n]óminas de niños o niñas en situación de vulnerabilidad y los datos sobre las políticas y planes preventivos, de control e investigación de hechos delictivos, entre otros.*”

Como será explicado, este ex Ministro de Estado y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplieron a cabalidad con todas las obligaciones legales dispuestas para velar por el orden público; precaver cualquier vulneración a los derechos fundamentales; instando siempre por la instrucción de los procesos administrativos pertinentes cuando los hechos revestían el carácter de infracción o delito. Lo importante para efectos de plantear la cuestión previa es subrayar que ninguno de esos deberes legales dice relación con la dirección técnica u operativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, mucho menos con algún grado de incidencia material en lo efectuado por Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus funciones sea en comisarías, cuarteles, espacios públicos, etc. Mal podría hacerlo, cuando es evidente que el Ministro del Interior y Seguridad Pública no cuenta con la capacidad técnica, material ni habilitación legal para hacerlo.

### **La historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 20.502 confirma que Carabineros de Chile está sujeto normativamente a la autoridad política, pero tiene independencia operativa.**

Esta distinción entre la responsabilidad política y normativa que le corresponde a las autoridades políticas, y la responsabilidad operativa que le corresponde a Carabineros de Chile, estuvo presente a lo largo de toda la tramitación legislativa de la Ley N° 20.502. No obstante los múltiples cambios que sufrió el proyecto ley, este fue un principio que se mantuvo constante desde el Mensaje Presidencial hasta las últimas modificaciones antes de su aprobación y promulgación.

Así, en la historia de la ley, abundan referencias a este punto, comenzado por el Mensaje Presidencial que dio inicio a la tramitación del proyecto de ley, y señalaba:

“*Como las policías son vitales en las tareas de orden público y de seguridad pública,* ***para evitar los efectos negativos de una interpretación que pudiera ver en esta iniciativa legal una nueva forma de doble dependencia, se establece en el proyecto una distinción entre el nivel normativo y el nivel operativo***” (énfasis agregado).[[78]](#footnote-78)

Sobre el mismo punto, se pronunció el ex Fiscal Nacional, don Guillermo Piedrabuena:

“*[e]l objetivo del nuevo Ministerio sería, en lo fundamental, proponer al Presidente de la República y ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones sobre seguridad pública interior.*”[[79]](#footnote-79)

Misma opinión manifestó el entonces General Director de Carabineros de Chile, don Alejandro Bernales, señalando que la prerrogativa del Ministerio debía consistir en “*’desarrollar’ los planes generales*”, ya que “*en lo particular su ejecución sea dispuesta a través de los órganos pertinentes,* ***por cuanto la nueva Secretaría de Estado no tiene carácter operativo***” (énfasis agregado).[[80]](#footnote-80)

La relación crucial entre la independencia operativa y el carácter profesional de las Policías también fue subrayada durante el debate. Así, por ejemplo, el entonces senador, don Alberto Espina, sostenía que:

“*Todas las materias relacionadas con cuestiones de carácter administrativo y operativo serán ejercidas a través de tal organismo,* ***sin participación en medidas operativas -una de las características de la profesionalización de las Policías chilenas- ni politización por medio de Intendencias o Gobernaciones****.*

*Por lo tanto,* ***ello resguarda adecuadamente el carácter profesional de las Policías****, evitando que el día de mañana puedan ser utilizadas o influidas con fines distintos a su propósito institucional*” (énfasis agregado).[[81]](#footnote-81) Y que “*el* ***proyecto tiene la virtud de mantener la independencia operativa de las policías, las que solo están subordinadas desde el punto operativo a la Constitución y la ley***” (énfasis agregado).[[82]](#footnote-82)

En el mismo sentido, el entonces Subsecretario del Interior, don Patricio Rosende, exponiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados Subsecretario, sostuvo, en relación a la coordinación entre Carabineros de Chile y los intendentes, que:

“*[l]a política nacional de seguridad pública se ejecutará a nivel regional, provincial y local, a través de los intendentes regionales, quienes coordinarán a nivel regional y provincial acciones de seguridad pública que realicen los ministerios y servicios públicos, ejecución de medidas de control y prevención de la delincuencia y las que tiendan a la disminución de la violencia y reincidencia delictual.* ***Las atribuciones de los intendentes no se extienden a asuntos de carácter administrativo u operativo de las policías***” (énfasis agregado).[[83]](#footnote-83)

### **En razón de lo expuesto, resulta incontestable que las imputaciones realizadas en el Capítulo Primero corresponden a hechos de terceros y no existe fundamento jurídico para hacer responsable a este ex Ministro de Estado.**

Recapitulando lo expuesto, entonces, resulta claro que la Acusación argumenta omisiones personales de este ex Ministro de Estado, sin embargo, para fundarla, se limita a describir hechos de terceros. Tales hechos, ocurridos a nivel operativo durante el despliegue de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quedan fuera del ámbito de responsabilidad de este ex Ministro de Estado, toda vez que no puede alegarse en su contra ninguna infracción legal y reglamentaria, y mucho menos pasividad o tolerancia frente a ellos. Por el contrario, imputar al Ministro del Interior y Seguridad Pública infracciones cometidas por Carabineros de Chile en el ámbito operativo, supone una errada concepción respecto del estatuto constitucional y legal aplicable, en particular, de la falta de habilitación legal del Ministro del Interior y Seguridad Pública en decisiones operativas de Carabineros de Chile.

El Capítulo Segundo de la Acusación también imputa a este ex Ministro de Estado hechos de terceros.

Las imputaciones que formula el Capítulo Segundo de la Acusación se fundamentan, todas ellas, en la supuesta falta de habilitación legal de los Jefes de la Defensa Nacional para dictar instrucciones como el *toque de queda* y en que habrían ejercido atribuciones propias de un Estado de Sitio.[[84]](#footnote-84)

Como se verá detenidamente, ello no es así. Los Decretos de Estado de Emergencia se dictaron conforme a derecho y los Jefes de la Defensa Nacional se encuentran plenamente habilitados para ejercer todas las atribuciones que les confiere la ley. Sin embargo, aún si los vicios alegados por los acusadores fueran efectivos, ellos, en ningún caso, corresponden a actuaciones imputables de forma personal y directa a este ex Ministro de Estado. En otras palabras, las alegaciones que hacen los acusadores, de ser efectivas, darían cuenta de vicios que afectarían a ciertos actos de los respectivos Jefes de la Defensa Nacional, no de actuaciones del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

En cierta medida, los propios acusadores reconocen que se trata de hechos en que este acusado no tuvo participación directa y no le cabe responsabilidad subjetiva. Por esa razón, intentan justificar su reproche en que este ex Ministro sería “*responsable político de la situación*”.[[85]](#footnote-85) A falta de omisiones precisas y concretas que puedan imputarme, la responsabilidad “política” por la “situación”, es, a todas luces, un recurso deliberadamente ambiguo para imputarme responsabilidad por hechos de terceros.

Por otra parte, el Capitulo Segundo también pretende hacer responsable a este ex Ministro de Estado de haber “*afectado el prestigio de la República en el exterior*”.[[86]](#footnote-86) Para fundar esa imputación gravísima, sin embargo, los acusadores vuelven a echar mano a hechos que escapan completamente a mi órbita de responsabilidad.

Al respecto, refieren un comunicado del “Sistema de Naciones Unidas de Chile” que manifiesta preocupación por “*los graves hechos de violencia ocurridos en Santiago los días 18 y 19 de octubre*”, así como lamenta los heridos, tanto civiles como miembros de las fuerzas de orden;[[87]](#footnote-87) en el mismo sentido, como ya se ha destacado, la Acusación llega al extremo de asignarme responsabilidad por la decisión de un jefe de Estado de no asistir a la cumbre APEC, informada por medios de comunicación internacional.[[88]](#footnote-88) Resulta evidente que, por más laxo que sea el estándar de responsabilidad aplicado por los acusadores, no es razonable imputarle a autoridad política alguna los graves hechos de violencia ocurridos en Santiago, sin distinción de ningún tipo.

## **Tercera Cuestión Previa de Admisibilidad: La Acusación pretende cuestionar el mérito de la declaración del Estado de Emergencia, cuestión que no es atribución de esta H. Corporación.**

Los acusadores dicen reconocer el carácter mixto de la acusación constitucional y la necesidad de subsumir las conductas de la autoridad acusada en alguna de las causales establecidas por la Constitución,[[89]](#footnote-89) sin embargo, a lo largo de su presentación, optan por un derrotero distinto, que desnaturaliza completamente la Acusación.

En efecto, los acusadores construyen su argumentación sobre la base que la acusación constitucional sería un juicio político que les permitiría calificar y discrepar de los fundamentos y circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar un estado de excepción constitucional.

Ciertamente, lo anterior constituye un error. En primer lugar, este mecanismo tiene por objetivo estricto hacer efectiva una responsabilidad jurídico-constitucional de una autoridad determinada, no revisar el mérito de lecturas y decisiones políticas. En segundo lugar, porque no es lícito utilizar dicho mecanismo para juzgar políticamente el ejercicio de la facultad presidencial en la declaración de un estado de excepción constitucional.

## **La narración de los hechos que hace la Acusación revela que ésta persigue criticar las decisiones políticas tomadas por el Presidente de la República y sus Ministros.**

El relato de los hechos que fundan la Acusación no deja lugar a dudas acerca de cuáles son las motivaciones de los acusadores al momento de interponer esta acción. Éste deja de manifiesto que las causales identificadas por los acusadores son solo la excusa para cuestionar las decisiones políticas del Gobierno. A modo de ejemplo, dicen los acusadores:

“*9. En los días siguientes, ante* ***el silencio del Ejecutivo respecto de las demandas de fondo*** *y el aumento de la agresividad en la reacción represiva, aumentó progresivamente la masividad de las manifestaciones. De esta forma, se hizo evidente que la población no sólo estaba expresando su descontento a propósito del alza del pasaje de transporte, sino que su rechazo a vivir en un país profundamente desigual*.

*10. La respuesta del Presidente Sebastián Piñera y de su Ministro del Interior, Andrés Chadwick, fue profundizar aún más la represión, decretando 19 estados de emergencia en diversas comunas y provincias del país, entre las que destacan Valparaíso, Concepción, La Serena, Rancagua, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, lo cual responde a la lógica de enfrentamiento que se intentó instalar […].* ***Esto da cuenta de la falta de lectura política del histórico conflicto social*** *que se apoderaba de la “normalidad” de millones de chilenos, y aún más, hace responsable al ex Ministro Chadwick de la violencia desatada contra la población civil por las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en los días siguientes, que indudablemente se sintieron amparadas por los dichos del Presidente y su Ministro*” (énfasis agregado).

Como se expuso con anterioridad, los acusadores se valen de este instrumento para manifestar una crítica a decisiones de la autoridad, asunto que escapa de las estrictas causales por las que procede una acusación constitucional.

## **La Constitución no permite revisar el mérito de las decisiones políticas adoptadas por el Presidente de la República y sus Ministros mediante una acusación constitucional**

En términos generales, la acusación constitucional es un procedimiento de derecho estricto, razón por la cual debe circunscribirse a conductas reprochadas a una autoridad que, de un modo directo, personal y causal, importe infringir una norma de competencia o de atribución de potestades propias de la autoridad en cuestión.

En consecuencia, la acusación constitucional no es una vía idónea para hacer valer discrepancias con respecto a la conducción política de un gobierno en general. En particular, pretender que el Congreso Nacional revise el mérito y conveniencia de la declaración de Estado de Emergencia supone desconocer y contravenir abiertamente normas expresas de la Constitución.

Precisamente, la Constitución dispone que la declaración del Estado de Emergencia responde a una facultad privativa y exclusiva del Presidente de la República, no teniendo permitido el Congreso Nacional inmiscuirse aquél en su dictación o duración, sino sólo en el caso de que el Presidente pretenda prorrogarlo por segunda vez, transcurridos 30 días desde su establecimiento, conforme al artículo 42 de la Constitución, lo cual no ha ocurrido en estos hechos.

Así, el Presidente de la República tiene una habilitación directa para dictar el Estado de Emergencia. A los demás poderes del Estado les corresponde verificar que las facultades que se estén ejerciendo sean propias de ese Estado de Emergencia, estando impedidos de entrar a calificar los fundamentos de las medidas que haya adoptado la autoridad en el ejercicio de sus facultades.

Precisamente, la propia Constitución señala, en el inciso primero de su artículo 45, en relación a las medidas particulares que se adopten dentro de un Estado de Excepción Constitucional, que:

“*Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39. No obstante, respecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda*”.

De acuerdo a la misma norma constitucional, entonces, ni aún los tribunales de justicia podrían calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho invocadas por la autoridad para decretar el estado de excepción. Una interpretación lógica de dicha disposición obliga a concluir que también le está vedado al Congreso Nacional impugnar los fundamentos de dicha decisión. Si tal hubiera sido la decisión del constituyente, se habría incluido la aprobación del Congreso para la declaración del estado de emergencia constitucional, al igual como lo prevé para el estado de sitio.

## **Permitir la revisión del Estado de Emergencia por parte de un órgano como el Congreso Nacional resulta contrario a la Constitución, y más aún, pondría en grave riesgo la seguridad nacional y el orden público.**

La declaración tanto de Estado de Emergencia corresponde a una decisión privativa del Presidente de la República, sin que requiera el acuerdo de otro órgano del Estado. Por el contrario, el Estado de Asamblea y de Sitio deben ser declarados por el Presidente de la República “*con acuerdo del Congreso Nacional”*, de acuerdo al artículo 40 de la Constitución.

Este contraste resulta útil para el análisis de la Acusación, la cual, como se ha denunciado, intenta impugnar veladamente una decisión privativa del Presidente de la República, en la cual no corresponde se inmiscuya el Congreso Nacional.

Lo anterior emana no sólo de la letra de las normas constitucionales aplicables, sino de la lógica que reside detrás de cada tipo de estado de excepción constitucional. En efecto, el Estado de Emergencia se estableció para responder a hipótesis de “*grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación*”, escenario que demanda una respuesta ágil por parte del Ejecutivo, sin instancias deliberativas que pudieran entorpecerlo –como es el Congreso Nacional–, en aras al pronto restablecimiento de la normalidad en la zona afectada.

Ciertamente, la decisión del constituyente de mantener reservado en el Presidente de la República la calificación de las circunstancias que habilitan a la dictación de un Estado de Emergencia y la duración de éste, responde a las necesidades urgentes del contexto que amerita su dictación. El propósito del Estado de Emergencia es procurar el pronto restablecimiento del orden público o de la seguridad –según sea el caso– dentro del acotado plazo que la Constitución permite, esto es, 15 días.

Por ende, la incorporación de un órgano explícitamente diseñado para ser una instancia deliberativa, como el Congreso Nacional, en la toma de la decisión inicial, calificando la *gravedad* de las circunstancias y luego dirimiendo la extensión geográfica y temporal que debiera tener, comprometería seriamente la celeridad de la medida. En última instancia, devendría en un mecanismo ineficaz para abordar las circunstancias que se propone enfrentar. En otras palabras, pondría en riesgo la seguridad nacional y el orden público.

De este modo, no habiéndose prorrogado el Estado de Emergencia por el plazo que, conforme a la Constitución, habilita al Congreso Nacional para incidir en la determinación de su duración, no concurren los requisitos para que dicho órgano intervenga en tal decisión. Por tanto, no es admisible el soterrado intento de los acusadores de impugnar los motivos del Presidente de la República.

## **La declaración de Estado de Emergencia fue oportuna y adecuada, permitió resguardar la seguridad nacional y evitó graves daños a infraestructura estratégica.**

Sin perjuicio de todo cuanto se ha señalado en este apartado, cabe destacar que la declaración del Estado de Emergencia por parte de S.E. el Presidente fue una decisión oportuna y proporcional a las circunstancias. En efecto, esta decisión fue motivada por un contexto de grave alteración del orden público, y en atención que constituye una función esencial e ineludible del Estado resguardar la seguridad de los ciudadanos y el orden público.

Aquel contexto fue una lamentable escalada de violencia y vandalismo, ya relatada pormenorizadamente, que tuvo principio en la sucesión de evasiones masivas en la red de Metro de Santiago, hasta que el día jueves 17 de octubre del año en curso se verificaron ataques violentos en cuatro estaciones de Metro. Al día siguiente, lejos de detenerse, los hechos de violencia crecieron exponencialmente, con nuevos ataques a estaciones de Metro, y sumándose saqueos, daños e incendios a edificios, fogatas y barricadas en las principales vías de Santiago. Así, caída la noche del día viernes 18 de octubre de 2019, la situación alcanzó una fase crítica.

Ante este complejo escenario de violencia, y la necesidad de complementar la dotación –ya reforzada- de Carabineros de Chile, el Gobierno decretó Estado de Emergencia para lasprovincias de Santiago y Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo de la Región Metropolitana.

Según ya se ha relatado, desde el sábado 19 de octubre, desgraciadamente, la violencia se intensificó y se fue extendiendo a otras zonas del país. En este contexto, el Presidente de la República decretó Estado de Emergencia para la Región de Valparaíso (con excepción de la provincia de Isla de Pascua y la comuna de Juan Fernández) y para la Provincia de Concepción en la Región del Biobío. Asimismo, se extendió a toda la Región Metropolitana, y el Jefe de la Defensa Nacional decretó toque de queda para esa noche.

Del mismo modo se operó el día 20 de octubre, decretándose nuevos Estados de Emergencia en las comunas de Antofagasta, La Serena y Coquimbo, Rancagua, Talca, Chillán y Chillán Viejo, Temuco y Padre de las Casas, Valdivia y de Punta Arenas; el 21 de octubre para la Provincia de Iquique y la comuna de Pozo Almonte, las comunas de Copiapó, Caldera y Vallenar, las comunas de Puerto Montt y Osorno; y el martes 22 de octubre, para las comunas de Arica, Tocopilla, Mejillones, Calama, y Puerto Natales.

En definitiva, la declaración de cada Estado de Emergencia constituyó **una respuesta necesaria y proporcional** a los actos de destrucción, delincuencia y vandalismo que se experimentaron exponencialmente en un breve lapso de tiempo, decisión adoptada en el ejercicio de las facultades constitucionales y legales vigentes.

Primeramente, no cabe duda que se trató de una decisión necesaria. Dan cuenta de ello el examen de los hechos y las solicitudes de diversas autoridades, requiriendo o bien la declaración de un Estado de Emergencia o bien su mantención.

Aquellas comunicaciones provinieron de autoridades de distintas veredas políticas y de diversos territorios y regiones. Cabe destacar que estas solicitudes no sólo manifestaban un deseo de que se estableciera o mantuviera el Estado de Emergencia, sino que también indicaban circunstancias concretas que lo hacían necesario.

Así, era transversal el entendimiento de que el Estado de Emergencia se erigía como un recurso necesario ante la crisis de violencia. Más aún, reputados políticos nacionales coincidieron que la declaración de Estado de Emergencia se trataba de una decisión *ineludible*. Así la calificó el ex ministro en las carteras de [Defensa Nacional](https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Defensa_Nacional_de_Chile" \o "Ministerio de Defensa Nacional de Chile) (2014-2015) e [Interior y Seguridad Pública](https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_y_Seguridad_P%C3%BAblica_de_Chile" \o "Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile) (2015-2016) del [segundo](https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_gobierno_de_Michelle_Bachelet" \o "Segundo gobierno de Michelle Bachelet) mandato de la ex presidenta [Michelle Bachelet](https://es.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachelet" \o "Michelle Bachelet) Jeria, Jorge Burgos Varela.[[90]](#footnote-90)

Junto a ello, en medio del Estado de Emergencia, más de mil académicos y políticos firmaron una misiva titulada "En defensa de la democracia", donde aseguraron respaldar *“la acción del Estado y de sus instituciones para que se reestablezca la paz y la seguridad de las personas”*.[[91]](#footnote-91)

En esta misma línea, en la sesión especial de esta H. Cámara de Diputados celebrada el domingo 20 de octubre de 2019, don Raúl Leiva Carvajal, diputado del Partido Socialista, manifestó lo siguiente:

*“Yo no voté por este gobierno, pero tengo que ser respetuoso por las autoridades y efectivamente hoy, en un ánimo político crispado, hay algunos que pretenden sacar algún pequeño provecho político de la desgracia de nuestros vecinos. En nuestras comunas la gente tiene miedo. En nuestras comunas se dan cosas que no se había visto. Están saqueando supermercados. Están robando y haciendo daño a su gente y ahí hay que actuar con fuerza y energía dentro del Estado de Derecho y dentro del marco constitucional”.*

Por otro lado, además de necesaria, la decisión de decretar los Estados de Emergencia fue necesaria, urgente y proporcional. Su necesidad derivó del carácter tuitivo del régimen de excepción que permite a las Fuerzas Armadas colaborar con las Fuerzas de Orden Público y Seguridad para proteger las vidas,, tranquilidad, seguridad y bienes de la población. La urgencia se debió a la grave y sostenida alteración del orden público generado por los masivos atentados a los medios de transporte público, comercio, numerosas barricadas que impedían la garantía de libre circulación de las personas, constituyendo un peligro público actual e inminente para la población. Por último, la proporcionalidad de la medida resulta manifiesta si se considera que ella fue aplicada con límites de duración, circunscribiendo su ámbito geográfico a los lugares donde fuera estrictamente necesaria y alcanzando únicamente a los derechos de locomoción y reunión, garantizando, en todo momento, el control de legalidad de las actuaciones de los órganos públicos.

Por último, cabe tener presente que, durante la vigencia del Estado de Emergencia, de acuerdo a las cifras reportadas por las Intendencias, a lo largo del país se pudieron manifestar más de dos millones 700 mil personas, en 441 marchas. En ese período, Carabineros de Chile otorgó 244 mil salvoconductos, de los cuales 1.411 fueron al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a fin de facilitar la labor que le corresponde como organismo autónomo del Estado; 1.746 a periodistas, con lo que se aseguró una amplia cobertura de los hechos que ocurrían en el país y el ejercicio de la libertad de prensa, y a 1.082 abogados independientes.

El Estado de Emergencia que vivimos en nuestro país se aplicó tratando de afectar a la menor cantidad posible de población del país y, por ello, fue decretado sólo en aquellos lugares donde fuera necesario por los graves y severos niveles violencia y destrucción que conocimos en las últimas semanas, sin que pueda utilizarse una herramienta tan relevante como la acusación constitucional para cuestionar su mérito.

**POR LO EXPUESTO**, y considerando que la Acusación no cumple con los requisitos establecidos para darle tramitación, solicito se tenga por formulada la cuestión previa y se declare que la presente Acusación no puede ser acogida a trámite.

# En el Primer Otrosí: contesta Acusación Constitucional

# 

# Contestación al Capítulo Primero de la Acusación

## **Introducción**

La Acusación se ordena en torno a dos grandes ideas: por un lado, sostiene que este ex Ministro del Estado habría infringido la Constitución al omitir tomar medias eficaces para a prevenir vulneraciones a derechos humanos, y por otra parte, me impugna haber dejado sin aplicación determinadas normas, que derivaron en la infracción de ciertos derechos.

Sin perjuicio de la construcción defectuosa de los cargos que se me imputan, lo cierto es que no dejé de aplicar normas en momento alguno. Durante toda mi gestión lo que se observó fue un estricto apego a la Constitución, la ley orgánica del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y a las demás normas que regulan la actividad de dicho Ministerio.

En efecto, y como lo señalé antes, aquellas materias relativas al control de civil de Carabineros y a la necesidad de definir y limitar los niveles de autonomía de la Institución se revelaron como temas clave desde el inicio del Gobierno y desde ese punto de vista, nos enfrentamos a ellos con seriedad y decisión.

Así, apenas asumió el Gobierno, se generó un profundo cambio en el mando de Carabineros, que venía azotado por el caso Fraude y, más recientemente en 2017, por la Operación Huracán, pasando a retiro 15 generales de la Institución.

Posteriormente, y frente al desafío de impulsar nuevas medidas para la modernizacion de la institución, entre otras propuestas orientadas a mejorar la seguridad pública, el Presidente llamó a un gran acuerdo nacional por la Seguridad Pública, que se constituye en Abril de 2018 y entrega 150 medidas en Julio de 2018.

Así, el documento recoge que “*Nuestras policías necesitan incorporar parámetros modernos de gestión y planificación estratégica; una mayor y más eficiente fiscalización, rendición de cuentas y transparencia con la autoridad política y la sociedad civil; contar con procedimientos internos claros para la denuncia de irregularidades y faltas a la probidad, y someterse en forma permanente a procesos de auditoría y control financiero.*

*En suma, junto con actualizar debidamente la normativa aplicable a las policías, tanto interna como externa, se deben definir y limitar aquellos espacios de autonomía de las instituciones policiales que hoy impiden o dificultan su necesario control, basándose en criterios modernos relativos a la dependencia de las policías de la autoridad civil.”[[92]](#footnote-92)*

Tiene sentido dicha aproximación, considerando que el primer diagnóstico de la Mesa de Trabajo transversal, que se constituyó en abril de 2018 y entregó su informe en julio del mismo año, fue hacerse cargo de casos de alto impacto y connotacion pública, fenomenos graves y reprochables en los que participaron ex miembros de Carabineros y que generaron la necesidad de revisar cómo se define la autonomía de la institucion con un control civil efectivo y transparente.

Posteriormente, se dio contenido a dicha propuesta, formulándola en los siguientes términos:

***“****Relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía:*

*Siendo la policía la cara más visible de la autoridad y del poder del Estado, ésta debe demostrar en todo momento su compromiso irrestricto con el Estado de Derecho, respetando los códigos de conducta y demostrando profesionalismo e integridad. Debe buscar, además, la aprobación de la ciudadanía y de la autoridad civil, mediante la transparencia de sus actuaciones y resultados, desarrollando un vínculo de cooperación con la población. Finalmente, las normas que rigen su actuación deben ser claras, precisas y accesibles al público.*

*Teniendo a la vista la experiencia comparada, los procesos de modernización de las policías contemplan robustos dispositivos que velen por mantener y mejorar su transparencia y rendición de cuentas. Se necesita también definir exhaustivos y precisos protocolos que permitan ajustar sus actuaciones a los estándares nacionales e internacionales. Todos estos elementos deben ser definidos en la ley o en los respectivos reglamentos, según corresponda. Las propuestas para modernizar y fortalecer la relación de las policías con la autoridad civil y la ciudadanía están agrupadas en seis áreas:*

*Área Nº 1: Planificación estratégica e indicadores de evaluación*

*Área Nº 2: Fortalecimiento de las facultades de fiscalización de la autoridad civil*

*Área Nº 3: Fortalecimiento de los deberes de rendición de cuentas de las Policías*

*Área Nº 4: Deberes fuertes de transparencia*

*Área Nº 5: Participación de la sociedad civil*

*Área Nº 6: Otros”[[93]](#footnote-93)*

De este modo no hay dudas que ya existía, en periodo de normalidad constitucional, la preocupación por la definición y delimitación de la autonomía de las policías y reconfiguración del control civil sobre las mismas es un asunto que nos motivó tempranamente desde que asumimos el gobierno.

El 6 de noviembre 2018, S.E. el Presidente de la República envió los cinco primeros proyectos de ley al Congreso. Uno de ellos, el de Modernización de las Policías, establece el reguardo de Derechos Humanos y Probidad Funcionaria (la no discriminación arbitraria, así como la observancia al respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas) y la creación de un sistema para la interposición, tramitación y resolución de los reclamos de la ciudadanía del actuar indebido de Carabineros.

Para el Gobierno, además, resultaba fundamental reforzar una cultura de Derechos Humanos en nuestras policías, y así lo ha hecho a través de la adopción de distintas medidas. Ello, significa no sólo actuar dentro del marco de la ley, sino observar en sus actuaciones siempre el respeto a los Derechos Fundamentales garantizados en la Constitución y las leyes.

En este marco, el 9 de agosto de 2018, el Gobierno suscribió un Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones Caso N° 12.880 en virtud del cual, el Estado se compromete, entre otras materias a aprobar un decreto supremo que contenga lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial. En cumplimiento del mencionado acuerdo, el 4 de diciembre de 2018, S.E. el Presidente de la República dictó el DS N° 1.364, mediante el que instruye a Carabineros actualizar todos sus protocolos de uso de la fuerza y estableció para ello 8 lineamientos generales sobre el uso de la fuerza, entre ellos: respeto y cumplimiento de la ley en todo momento, evitar uso de fuerza en manifestaciones no autorizadas y de carácter no violenta y que exista una intervención policial sujeta a la normativa nacional y tratados internacionales.

Asimismo, y como forma de darle más celeridad a los cambios que se necesitaban para modernizar nuestras instituciones policiales, en diciembre de 2018, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública comenzó a trabajar una quincena de medidas administrativas, que incluían, entre otras materias: la revisión y actualización constante de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público, la creación de la Dirección de Derechos Humanos, el fortalecimiento de programas de formación continua en Derechos Humanos, con elementos de carácter teóricos y prácticos, y la creación de un nuevo modelo de prevención y denuncia de conductas indebidas al interior de Carabineros de Chile.

En enero de 2019, nos comprometimos con la Comisión de Seguridad del Senado sellan “Hoja de Ruta” legislativa donde se compromete tramitación de los Proyectos de Ley del acuerdo nacional de seguridad, algunas mociones parlamentarias y una veintena de medidas administrativas (entre ellas el sistema de denuncia de conductas indebidas de Carabineros, la actualización permanente de los protocolos de uso de la fuerza y la el compromiso para la creación de la Dirección de DD.HH. en Carabineros, que era solo un departamento).

Dentro del periodo previsto en el DS 1.364, se actualizaron todos los los protocolos de uso de la fuerza en contextos de control de orden público de Carabineros, ajustándose a los estándares internacionales de derechos humanos. Para la actualización de los protocolos de uso de la fuerza, Carabineros sostuvo reuniones y recibió observaciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Estas últimas instituciones hicieron llegar sus observaciones por la vía de oficios y documentos a Carabineros: el Oficio N°012 del INDH, del 28 de enero de 2019; el Oficio N°033/2019 de la Defensoría de la Niñez, del 31 de enero, y un documento del 15 de febrero del INDH. Asimismo, en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile se reunió con el área temática de Seguridad Pública del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) que asesora a la Subsecretaría del Interior, para efectos de recoger las observaciones de los representantes del mundo civil, utilizando el mecanismo y la institucionalidad que la ley dispuso para dicho fin. Se hace presente que las observaciones tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, remitidas a través de los oficios y documentos señalados, contenían recomendaciones de alto nivel técnico y de alto valor, motivo por el cual, una cantidad sustancial de puntos fueron recogidos en su integridad y otros parcialmente fueron tomados en consideración para realizar 66 modificaciones a los textos que inicialmente había confeccionado Carabineros de Chile.

Así, en marzo de 2019, se publicó la Circular N° 1.832, sobre uso de la fuerza, que incorpora el principio de responsabilidad, que supone que se debe perseguir: al funcionario que cometa los actos u omisiones que importen el abuso en el uso de la fuerza; a los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos. También se establece el deber de no discriminación como eje del actuar policial, se explicita la prohibición de infligir, instigar o tolerar actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el reforzamiento de la excepcionalidad en el uso de armas de fuego en procedimientos que involucren niños, niñas y adolescentes.

De la misma manera, en marzo de 2019 se publica la Orden General N° 2.635, que actualiza los protocolos mantención de orden público, en cumplimiento de la instrucción presidencial de realizar dicha actualización dentro del plazo de 90 días. Se homologaron los conceptos entre los protocolos, pues existía una diversidad e, incluso en algunos casos, ciertos conceptos tenían distintas denominaciones en distintos protocolos. En dicha Orden General, se incorporan protocolos específicos para el caso de establecimientos educacionales de enseñanza media o básica, que contienen mayores resguardos para el actuar policial; se establece una mejor regulación para casos de privación de libertad en niños, niñas y adolescentes; consideraciones especiales para niños, niñas y adolescentes pertenecientes a pueblos originarios; se categorizan todos los medios de fuerza que posee Carabineros; se regula, además del trabajo con el INDH que ya estaba, el correspondiente con la Defensoría de los Derechos de la Niñez, medios de comunicación social y organizaciones de la sociedad civil y se introduce un glosario de conceptos, para entregar mayor claridad.

También en marzo de 2019, Carabineros dictó la Orden General N° 2640, que eleva el Departamento de Derechos Humanos a Dirección, que incluye su respectiva directiva de funcionamiento, para dar operatividad. Este Departamento actualmente cuenta con una sede central en Santiago y dos sedes más, en Antofagasta y Temuco.

Los contenidos y las evaluaciones de los cursos en DD.HH. para el personal operativo de Carabineros se actualizaron en junio de 2019. Ello, tras el trabajo de una mesa interinstitucional (Carabineros, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el INDH y la Defensoría de la Niñez) para revisar y perfeccionar los cursos para el personal operativo. Así, el 29 de julio de 2019 se dictó la Orden General N° 2675, que establece los nuevos contenidos del programa de capacitación en Derechos Humanos. Entre otras materias, dispone: desplegar un plan de formación para personal operativo; se establece una nueva malla, que considera las conclusiones de la mesa técnica. Se hace presente que, desde el 2016, el antes departamento, desarrollaba cursos para personal operativo. Sólo en el 2019, se ha capacitado a 6.933 funcionarios y, desde 2016, a un total de más de 46 mil.

Conforme a lo dispuesto en el señalado D.S Nº 1.364, Carabineros dio cumplimiento a la a la instrucción del Presidente contenida en el señalado instrumento, remitiendo durante la primera quincena del mes de julio de 2019, el Informe *“Uso de la fuerza y episodios violentos”*, correspondiente al primer semestre de 2019.

Además, desde septiembre de 2019, Carabineros tiene disponible a través de la web de Comisaría Virtual ([www.comisariavirtual.cl](http://www.comisariavirtual.cl)) el módulo que permite realizar denuncias de conductas indebidas de funcionarios de carabineros, ya sea en forma anónima o identificándose, cumpliendo la medida administrativa respectiva de la hoja de ruta.

En octubre de 2019, Carabineros dictó la Orden General que aprueba el Plan Institucional en Derechos Humanos, que construye la hoja de ruta de la institución para su fomento, en su malla de formación inicial.

Avanzando en la “Hoja de Ruta” legislativa del Acuerdo Nacional, el 15 de octubre de 2019 se aprobó por unanimidad en la Sala del Senado el Proyecto de Ley de Modernización de las Policías.

Con esto quiero exponer, H. Cámara, que desde el inicio de esta Administración, he mantenido una preocupación permanente y sostenida por la modernización de las policías, por insistir en el control civil sobre esa institución, por impulsar una cultura de respeto a los derechos humanos y por delimitar su autonomía, cuestión que, como ya se expuso, es de una importancia radical.

Así, la preocupación por el respeto a los Derechos Humanos también estuvo vigente durante los estados de excepción constitucional. Esto importa tomar las medidas que el ordenamiento dispone, dentro de las competencias de cada autoridad, para prevenir, por una parte, conductas que atentaran contra los derechos humanos, y en aquellos casos en que se hubiere incurrido en abusos, disponer todo lo necesario para que el esclarecimiento de cada caso, con transparencia, cooperación y oportunidad.

Tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones recibieron instrucciones expresas, a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de que su actuación para restablecer el orden público durante el Estado de Emergencia debían realizarse con estricto apego a los protocolos de uso de la fuerza vigentes y que el cumplimiento de su deber debía ser dentro del marco de lo que la ley establece.

Asimismo, se instruyó a las policías, y así se señaló también públicamente en múltiples oportunidades, que ante cualquier denuncia de abuso, exceso o delito, **inmediatamente la institución debía abrir el respectivo sumario disciplinario y dar cuenta de ello al Ministerio Público**, para fueran investigados y sancionados, si así corresponde. El Estado Chileno, por sí mismo, es capaz de investigar y sancionar, si así corresponde, hechos que representen delitos o abusos.

De los lineamientos antes señalados a las policías, dan cuenta mis distintas vocerías:

**21 de octubre:** “*He señalado que lamentamos todos los fallecimientos y he señalado de que todos los incidentes en que una persona haya sido herida en este tipo de situaciones con la acción o donde haya estado presente la acción de las Fuerzas Armadas o de Orden* ***son puestas inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público para ser investigados***.” (énfasis agregado)

**22 de octubre.** “*Recibí al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy día en la mañana, a Don Sergio Micco. Para efectos estuvimos conversando sobre la distintas situaciones, él me hizo presente algunas situaciones que a él le preocupaba que inmediatamente han sido transmitidas para efectos de que se pueda precisar y aclarar y entregar toda la información al Instituto de Derechos Humanos, pero junto a eso le he señalado que para el Gobierno la labor del Instituto de Derechos Humanos es muy importante, es muy importante que ellos estén presentes, que exista total transparencia que vean y puedan observar el actuar que se está llevando a cabo en el Estado de Emergencia y que cualquier situación que ellos observen de carácter irregular, obviamente la puedan no sólo denunciar sino que también transmitir al Gobierno y al propio General a cargo del Estado de Emergencia, cualquiera sea el lugar del país que van a estar y sé que lo están muy prestos a poderlas recibir.*”.

***-Pregunta: Han denunciado abusos de poder…***

“*Obviamente, que eso se hace y ellos lo saben y son las instrucciones que el Presidente de la República les ha impartido, se hace siempre dentro de la ley*”.

Así, y antes de contestar las imputaciones que se me formulan, quiero hacer presente que en forma permanente y mientras me desempeñé como Ministro de Estado, siempre exigí la responsabilidad de quienes transgredan las normas y eso ha sido fiscalizado por el Congreso en múltiples oportunidades, por cuanto las bases del Estado de Derecho es el funcionamiento de las Instituciones con apego a la legalidad, a los protocolos e instrucciones.

En efecto, cuando fui citado ante esta H, Cámara, el pasado 23 de octubre a informar sobre el estado de excepción Constitucional, señalé:

*“¿Qué quiero señalar en esta materia señoras y señores Parlamentarios? Que el Estado de Emergencia como Estado Constitucional se desarrolla y se ejerce dentro del Estado de Derecho. Son atribuciones especiales para efectos de que se designe un jefe de la zona de Estado de Emergencia y las Fuerzas Armadas en las dotaciones que correspondan colaboren para efectos de la mantención del orden público y la seguridad de las personas. Pero obviamente se hace dentro de un Estado de Derecho y con la exigencia en el respeto a las disposiciones legales y a los protocolos que establecen el uso de la fuerza legítima…”.*

*“El Estado de Emergencia se desarrolla dentro del Estado de Derecho y, por lo tanto, cualquier situación irregular, indebida o ilegal en el uso de la fuerza, obviamente que de acuerdo a la ley y a los protocolos internos que se establecen para esta materia son y deben ser y así ha sido, denunciados de inmediato por las propias instituciones a las Fiscalías correspondientes para hacer la investigación.*

*Todas estas situaciones que yo he dado cuenta han sido denunciadas por los propios mandos a la Fiscalía colocando a las personas a disposición de la investigación correspondiente, salvo en el caso de esta persona que fallece en la Posta Central producto de heridas que su familia dice atribuir a Carabineros, que estamos esperando la información, que ya está en conocimiento de la Fiscalía.“*

*“Y lo dijo el General que es jefe del Estado de Emergencia de la unidad de emergencias de la RM: estamos para poder dar orden y tranquilidad y seguridad a las personas. Esa es su función y créanme que valoramos esa opción que se ha estado realizando y obviamente, así como están cumpliendo con su deber, en ese deber se cumple de acuerdo a la ley, se cumple en democracia y lo dije, se cumple con respeto al estado de derecho, se cumple con respeto a los Derechos Humanos, y el gobierno y todos nosotros y que nadie crea que esta uno por sobre el otro en esta materia, queremos y ejercemos nuestras responsabilidades y nuestros deberes para que se cumpla el uso de la fuerza de acuerdo a la ley, de acuerdo a sus protocolos y con respeto a los derechos y dignidad de cada persona.*

*Quiero señalarles, a manera de ejemplo que las causas y situaciones de fallecimiento en que ha estado involucrada una patrulla militar cumpliendo lo que son sus propias instrucciones y lo que se le ha señalado, las propias instituciones han puesto a los responsables individualizados con todos los antecedentes a disposición de la Fiscalía. La justicia está actuando a través de sus resoluciones judiciales para efectos de que esas responsabilidades puedan cumplirse y que nadie se sienta eximido de respetar las normas del Estado de Derecho con respecto a los Derechos Humanos”*[[94]](#footnote-94).

## **Imputaciones formuladas en el Capítulo Primero de la Acusación**

Lo que se me atribuye en la Acusación es haber omitido “*deliberadamente el dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de la manifestación social reciente*”.[[95]](#footnote-95) Sin embargo, en una primera aproximación, la imputación se describió como **“*omitir deliberadamente el no dictar medidas eficaces para evitar el uso abusivo y desproporcionado de la fuerza y la comisión de graves delitos por parte de Carabineros de Chile y los cuerpos de seguridad del Estado en el contexto de la manifestación social reciente*”**.[[96]](#footnote-96) Como ya hemos visto, los acusadores sólo se refieren a dos supuestas omisiones de este ex Ministro de Estado, en lo demás se limitan a relatar hechos en los que no tuve participación alguna.

## **Los hechos en que se funda el Capítulo Primero de la Acusación son de la máxima gravedad, sin embargo, los acusadores los tratan de forma superficial**

### **Los acusadores formulan imputaciones gravísimas fundadas en hechos que los propios acusadores reconocen como presuntos o no acreditados**

La Acusación se remite a antecedentes que resultan completamente insuficientes para dar por ciertos y establecidos los hechos en que se apoya. Esta falta de rigurosidad en el tratamiento de los hechos, resulta especialmente irresponsable si se considera que se trata de hechos gravísimos.

En primer término, se citan como respaldo de las imputaciones que configurarían las causales de procedencia de la Acusación, denuncias y querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por presuntas violaciones a los derechos humanos. A este respecto, conviene recordar que las denuncias y querellas dan inicio a un procedimiento investigativo, no tratándose por tanto de hechos comprobados, sino por comprobar, en los que no he tenido participación alguna y respecto de los cuales en caso de corroborarse la existencia de un delito, deben ser sancionados conforme a la ley, para evitar toda impunidad.

Sin embargo, la Acusación se basa en gran medida en cifras de querellas *presentadas*, lo que solo da cuenta de hechos que están siendo investigados. Más aún, señalan los acusadores que se habrían presentado 103 querellas[[97]](#footnote-97), pero, en los 3 casos que destacan, relatan los hechos de dichas querellas, como si se tratare de hechos ya comprobados. Así, por ejemplo, citan una querella interpuesta por un menor de edad y tres adultos, quienes habrían sido detenidos y trasladados a la 43º Comisaría de Peñalolén. Pues bien, tratándose de hechos que se encuentran siendo investigados, los acusadores optan por describirlos como si éstos fueran hechos firmes.[[98]](#footnote-98)

Por otra parte, de las 103 querellas que los acusadores señalan se habrían presentado, sólo destacan y detallan 3 casos “*por su gravedad*”: el caso recién comentado, el caso de un estudiante de medicina, y el caso de un presunto homicidio frustrado. Tres casos que repiten a lo largo de la Acusación en tres ocasiones distintas, generando una duplicidad en su relato.[[99]](#footnote-99)

Cabe agregar que son los propios acusadores quienes destacan estos hechos, ignoro las razones, porque lo cierto es que el reporte que citan del INDH no se refiere a estos casos en particular sino solo al número total de querellas presentadas.

Es decir, la Acusación tiene como base fundamental hechos que están siendo investigados por los órganos competentes, respecto de los cuales aún no existe sentencia judicial y, en los que no he tenido participación alguna.

Por otra parte, la Acusación nada señala respecto de la actividad desplegada por este ex Ministro de Estado para la adecuada y pronta investigación de hechos en los que se denunciara uso abusivo de la fuerza, por parte de efectivos policiales.[[100]](#footnote-100)

### **Los acusadores interpretan los hechos de forma antojadiza**

Adicionalmente, la Acusación exhibe un contraste notorio: despliega una narrativa fáctica descuidada y, acto seguido, concluye las más graves imputaciones. Ciertamente, los acusadores no guardan un debido equilibrio entre los hechos y sus conclusiones.

Así, por ejemplo, utilizan fechas diferentes en su comparación de números de heridos: para señalar la cifra de militares y policías heridos se basan en un dato al día 21 de octubre de 2019, y para señalar la cifra de civiles heridos utilizan un conteo al día 25 de octubre.[[101]](#footnote-101)

Por otra parte, la Acusación señala como fundamento detenciones que bien podrían estar plenamente justificadas, sin aportar antecedentes para distinguir unas de otras. En efecto, señalan que habrían “3.193 detenidos y detenidas”, pero no se realiza desglose alguno que permita distinguir cuántas de aquellas detenciones habrían sido legales, cuántas ilegales, y en qué circunstancias de habrían realizado; y, muy relevante, en base a qué antecedentes pueden considerarse justificadas unas y no otras. En otras palabras, aquella suma de 3.193 detenidos bien podría contener personas que hayan sido detenidas por hipótesis de flagrancia. De ahí la necesidad de no utilizar cifras que podrían inducir a error, en un contexto como el actual, en que a partir de ciertos hechos se formulan conclusiones de carácter grave.

Además, contra todo estándar de seriedad, la Acusación incluso intenta invocar teorías que han sido desmentidas públicamente, como el caso del supuesto centro de torturas al interior del Metro Baquedano. Es más, haciendo gala de desprolijidad, los propios acusadores señalan que “*ni los jueces ni el fiscal que se apersonaron en el lugar detectaron evidencia que sustente esa versión*”.[[102]](#footnote-102)

En efecto, atendida la gravedad y urgencia de la denuncia efectuada a través de un recurso de amparo, los magistrados Darwin Bratti y Daniel Urrutia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago requirieron la presencia de la Brigada de Derechos de Humanos de la PDI para prestarles transporte, seguridad y asistencia – dado que se encontraban en toque de queda - y se constituyeron en el recinto. Relata el magistrado Urrutia:

“*Evidentemente, lo que se estaba denunciando era muy grave así que concurrimos de inmediato y nos entrevistamos con personal de Carabineros, revisamos las cámaras de seguridad y cada sector del recinto junto a una abogado del INDH constatando que no habían detenidos, ni tampoco registro de ellos*”.[[103]](#footnote-103)

Por su parte, el magistrado Bratti descartó la presencia de los objetos materiales que la acción de amparo describía:

“*Hay que ser responsables y aclarar que revisamos todo el recinto. Incluso la abogada del INDH iba con una linterna alumbrando los sectores más oscuros y no encontramos indicio alguno de una detención no registrada, en los techos no había nada que diera cuenta de amarras, tampoco sangre.*”.[[104]](#footnote-104)

Lo anterior se contrapone a las declaraciones que se realizaron en diversos medios y redes sociales.[[105]](#footnote-105) Entre ellas, destaca una publicación de una de las acusadoras que en Twitter sostuvo que “*se encontró sangre y amarras (…) No puede quedar impune, no lo vamos a permitir*”. Posteriormente, se eliminó aquella publicación. [[106]](#footnote-106)

Rechazado el amparo, se ordenó enviar todos los antecedentes recopilados a la Fiscalía de Turno para que efectuara las indagatorias correspondientes, lo que demuestra que estos hechos están lejos de tenerse por acreditados, sin que pueda afirmarse con tanta liviandad que se hubiesen llevado a cabo torturas y apremios ilegítimos en la comisaría ubicada en la estación Baquedano del Metro.[[107]](#footnote-107)

En suma, no cabe duda alguna que los acusadores presentan los hechos sin el rigor necesario que permita sostener una acusación tan grave. Hechos así descritos, no pueden servir para elaborar una conclusión de la gravedad que pretenden los acusadores, ni configurar las causales invocadas.

### **Los acusadores presentan como fundamento de la Acusación antecedentes que carecen del mínimo de rigurosidad**

En línea con lo anterior, los acusadores sustentan sus afirmaciones en antecedentes que carecen de rigurosidad, tales como relatos de prensa o declaraciones públicas de partidos políticos, como son las Juventudes Comunistas.[[108]](#footnote-108) Ciertamente, no se trata de antecedentes revestidos de un rigor y formalidad que permitan dar por ciertos los hechos que incriminan, sino más bien, de un levantamiento de circunstancias a investigar; investigación que el Gobierno ha procurado y respaldado.

En definitiva, la Acusación se erige sobre declaraciones de partidos políticos, antecedentes desvirtuados (como el centro de tortura al interior del metro Baquedano) u otros registros en los que ni siquiera se menciona a mi persona.

Así, en su página 41, señala que las actuaciones de este ex Ministro de Estado habrían “*afectado el prestigio de la República en el exterior*”, afirmación que no se condice de forma alguna con los breves 6 artículos citados a su pie de página -dos de ellos puramente fotográficos-, donde en 5 de ellos ni siquiera se menciona mi persona.

Por lo demás, con el paso de los días ha quedado de manifiesto que las calificaciones efectuadas de ciertos hechos acontecidos en el marco de las manifestaciones aún están pendientes de definición, lo que ha obligado a las instituciones involucradas a rectificar, aclarar o incluso desmentir sus afirmaciones. Así ha quedado claro, por ejemplo, de las publicaciones del propio INDH. En efecto, con fecha 27 de octubre de 2019 el INDH informó a través de su cuenta Twitter lo siguiente:

“*El INDH informa que se han recibido 28 denuncias de personas cuyo paradero se desconoce. Hasta hoy, en 26 de los 28 casos las personas han sido encontradas. En las 2 restantes, el INDH no ha logrado comunicarse con los denunciantes para verificar si han tenido noticias de ellas*”.[[109]](#footnote-109)

Tan sólo un día después, consultado por el mismo hecho –la cifra de personas desaparecidas– el propio director del INDH, Sergio Micco, declaró un número diverso del anterior, precisando en todo caso que no correspondía calificarlos de presuntos desaparecidos, y menos de desaparecidos:

“*El instituto ha recibido 72 casos, de los cuales 68 han vuelto a sus casas, por lo tanto* ***nos quedan 4****. Lo que ha ocurrido es que nosotros no hemos podido tomar contacto con familiares normalmente que hicieron la denuncia**[…]* ***No hablaría ni de presuntos ni de desaparecidos, es gente que no ha vuelto [a sus casas] y no sabemos si fueron detenidos o no***”.[[110]](#footnote-110)

Sin perjuicio de las rectificaciones que ha debido hacer el propio INDH, cabe destacar que el listado con las identidades de 28 personas presuntamente desaparecidas se derivó el 26 de octubre de 2019 desde la Fiscalía Nacional a la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, la cual derivó la información al Servicio de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (“**SEVB**”), dependiente de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros.

La investigación del SEVB incluyó acudir a cada domicilio sindicado, cruzar las bases de datos de todas las comisarías de Chile y la revisión más mil partes policiales, descartando la existencia de personas desaparecidas. En efecto, el informe policial detalla que:

“*Doce personas manifestaron a personal policial que concurrió hasta sus lugares de residencia o trabajo,* ***que nunca estuvieron desaparecidas, ignorando los motivos por los cuales aparecieron en dicho listado****. Otras seis personas estuvieron involucradas en diferentes procedimientos policiales, resultando detenidas por diversos delitos, permaneciendo por periodos reducidos en unidades policiales tanto de Carabineros, como de la PDI, estando estos antecedentes debidamente informados a las respectivas Fiscalías Locales*”.[[111]](#footnote-111) (énfasis agregado)

En tanto, el INDH se refirió a lo anterior, precisando nuevamente que las cifras publicadas no permiten concluir con certeza alguna que existan personas que hayan desaparecido tras su detención:

“*Dentro del alto número de denuncias recibidas,* ***se relatan posibles desapariciones de personas*** *en diferentes contextos. Muchos de estos relatos contenían poca información de las personas denunciadas, a veces solo su nombre. Por la gravedad que implica la desaparición de una persona, registramos toda la información recibida, incluso de aquellas denuncias con información incompleta, para poner a disposición de las instituciones que tienen facultades investigativas dicha información, a través del Ministerio Público, a quien se le transparentaron las circunstancias en que la información había sido obtenida y las dificultades para entregar datos completos en todos los casos*”.[[112]](#footnote-112) (énfasis agregado)

Frente a esta necesidad de contar con información y que esta fuera puesta en conocimiento de las Fiscalías, **envié oficios a las policías solicitando información**. En ellos, pedí a **Carabineros y la PDI** informar sobre los casos de **civiles heridos o fallecidos**, la apertura de los respectivos sumarios administrativos y la remisión de dichos antecedentes a Fiscalía.[[113]](#footnote-113)

Del mismo modo, se entregaron todas las **facilidades necesarias al INDH**, desde el primer momento, para el cumplimiento de sus funciones legales, como organismo autónomo del Estado. Así, de los 244 mil **salvoconductos** que entregó Carabineros de Chile, **1.411 fueron al INDH** (también se otorgaron 1.082 a abogados independientes y se extendió una autorización especial para que las credenciales del personal del Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía del Ministerio Público y el Servicio Nacional de Menores, sirvieran de salvoconducto durante los toques de queda decretados).

## **El Capítulo Primero de la Acusación parte de una premisa equivocada: la violación sistemática de los derechos fundamentales durante la vigencia del Estado de Emergencia**

En primer lugar, quisiera expresar que lamento profundamente la muerte y lesiones de compatriotas durante las últimas semanas y quisiera expresarles mis sentidas condolencias a sus familias de quienes han fallecido. Dada la importancia que reviste el esclarecimiento de las circunstancias en que estos hechos se produjeron, estos casos se encuentran en conocimiento del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia para su debida investigación y sanción.

No obstante, como explicaré a continuación, no se configuran los criterios jurídicos para establecer una práctica sistemática en los términos de la Ley N° 20.357, y en cualquier caso su determinación corresponde a los órganos competentes, y ellas no pueden imputarse a mi persona, pues yo no las he ordenado ni tolerado.

La tesis de los acusadores, para imputar remotamente hechos cometidos por Carabineros de Chile a este ex Ministro de Estado, descansa sobre el supuesto de que existiría una vulneración sistemática de los derechos humanos.

En efecto, enfatizan que las lesiones producidas por las fuerzas policiales se habrían dado con sistematicidad, y con la intención directa y específica, maliciosa, de producir el daño causado:

“*Estos antecedentes, […] nos hablan de* ***una práctica sistemática*** *de los uniformados, que consistió en ocupar municiones no letales de modo tal de provocar el mayor daño posible en los manifestantes, específicamente buscando producirles daños oculares, muchas veces permanentes […]*”.[[114]](#footnote-114)

Más aún, de los hechos relatados en la Acusación, concluyen apresuradamente que los resultados revelarían un “patrón de comportamiento”, con miras a dañar “generalizadamente”:

“*De todos los hechos que hemos podido documentar y reseñar en este acápite, podemos observar claramente un patrón de comportamiento por parte de las fuerzas policiales, en especial, Carabineros de Chile en la represión de la protesta social que se vive en Chile desde el 17 de octubre y que constituye claramente un uso excesivo, abusivo y desproporcionado de la fuerza pública que ha tenido por objeto dañar generalizadamente a la población civil. No nos cabe duda del carácter “sistemático” de estos hechos, pues precisamente se enmarcan en la definición que contiene el art. 2 de la ley N° 20.357*: *“una serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas”*”.[[115]](#footnote-115)

La imputación que se formula respecto de los casos que los acusadores califican como violaciones a los derechos humanos se reconducen a casos que están siendo investigados por el Ministerio Público, cuya definición final no puede ser adelantada a este momento.

Consultado sobre ese punto, el presidente de la Excma. Corte Suprema, señor Haroldo Brito, frente a la pregunta si en este periodo hubo violaciones a los derechos humanos en Chile, señaló el día domingo 17 de noviembre de 2019 lo siguiente: “*No corresponde anticipar calificaciones jurídicas. Eso no lo puedo hacer.*”[[116]](#footnote-116)

El presidente del Máximo Tribunal también indicó que con ocasión de la Comisión Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal se insistió en la necesidad de que los partes denuncias de los policías tuvieren toda clase de detalles, individualización del personal aprehensor, lugar de detención, por cuanto esos datos “*son necesarios para dar la debida defensa jurídica a las personas que están detenidas y en segundo lugar, era la base del órgano persecutor, el Ministerio Público*”.[[117]](#footnote-117)

Es decir, la existencia y reunión de la Comisión Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal, instancia a la que concurren todos quienes participan del proceso, da cuenta que existe total transparencia y funcionamiento del Estado de Derecho. Aquí lo que se impulsó siempre fue la completa cooperación de las policías con los órganos de investigación, de manera de sancionar a quienes se apartan de la doctrina institucional y cometen actos ilícitos que afectan a nuestros compatriotas.

De este modo, no es esta la sede para discutir mi supuesta participación en aquellos graves ilícitos que se me imputan sino el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, de manera que cualquier pronunciamiento de esta Corporación en ese sentido constituiría, a su vez, en una infracción a lo previsto en el artículo 73, 80 letra A y artículos 6 y 7 de la CPR, constituyendo un prejuzgamiento y una intromisión inaceptable en las esferas de competencia de la Justicia.

Sin perjuicio de lo anterior, creo que es relevante, por la gravedad de las[[118]](#footnote-118) imputaciones, despejar algunos conceptos que los acusadores invocan de manera superficial.

Como contexto general, cabe indicar que Chile adoptó un sistema de codificación independiente en relación con la tipificación de los delitos de derecho internacional, de la Corte Penal Internacional. Así, la Ley N° 20.357 tipifica en nuestro ordenamiento jurídico los crímenes de lesa humanidad, genocidio y delitos de guerra, incluyendo además algunas cuestiones de parte general que son –por la necesaria especificidad- muy relevantes. Como lo ha reconocido la doctrina comparada, este modelo tiene la ventaja que permite consolidar y clarificar un amplio y diverso material jurídico, que a veces complejiza la labor interpretativa.

Es decir, la Ley Nº 20.357 nos entrega criterios interpretativos que al menos debemos observar antes de formular las graves acusaciones planteadas por los acusadores.

De esta manera, el artículo1 de la Ley N° 20.357 define qué se entiende por crímenes de lesa humanidad, indicando que deben concurrir las siguientes circunstancias:

*Artículo 1º.- Constituyen crímenes de lesa humanidad los actos señalados en el presente párrafo, cuando en su comisión concurran las siguientes circunstancias:*

*1º. Que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.*

*2º. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.*

Es decir, el ataque sistemático del que los acusadores sujetan sus conclusiones no basta por sí solo, sino que debe insertarse dentro de los criterios recién descritos. Para eso, la misma ley define qué se entiende por ataque sistemático o generalizado, en el artículo 2.

*Artículo 2º.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá:*

*1º. Por "ataque generalizado", un mismo acto o varios actos simultáneos o inmediatamente sucesivos, que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas, y  
     2º. Por "ataque sistemático", una serie de actos sucesivos que se extienden por un cierto período de tiempo y que afectan o son dirigidos a un número considerable de personas.*

En esos términos, es meridianamente claro que la ley emplea una construcción alternativa: o es sistemático o es generalizado. Sin embargo, los acusadores utilizan ambos términos sin mayor precisión, lo que dificulta la aproximación al problema. La diferencia no es trivial.

Se encuentran, por tanto, en juego, dos tipos de criterios alternativos: uno cuantitativo y otro cualitativo. Eso sí, en ambos casos se necesita que sea “con conocimiento de dicho ataque”, lo que implica un nuevo “umbral”.

Son características comunes a todos los delitos de lesa humanidad: 1) Comisión de actos inhumanos que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. 2) Los actos han de ser cometidos como parte de un ataque generalizado, con múltiples víctimas, o sistemático, en el contexto de una política de un Estado o de un grupo organizado para mantener o instaurar una determinada política. 3) El ataque ha de realizarse contra grupos de la población civil. 4) El ataque ha de cometerse por motivos de discriminación política, nacional, racial, étnica, cultural, religiosa, de género u otros motivos reconocidos universalmente inaceptables con arreglo al derecho internacional.

Por “ataque contra una población civil” ha de entenderse “*una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 [asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso, encarcelación u otra privación grave de libertad física, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo o esterilización forzados, abusos sexuales graves, desaparición forzada de personas, apartheid, u otros actos inhumanos similares] contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política*”.[[119]](#footnote-119)

Así, el carácter múltiple, generalizado o sistemático del ataque que se dirige a la población civil da cuenta del clima de terror al que se puede ver expuesta la población de ser víctima de una serie de delitos expresados en el mismo artículo. En relación al ataque sistemático, se ha señalado que da cuenta de estar frente a una planificación u organización dirigida a determinados fines.

De lo anterior, cabe anotar que dichos ataques sistemáticos o generalizados deben insertarse dentro de un contexto en que tales ataques sean organizados, dirigidos o tolerados por el poder político, tal como lo expresó Sergio Micco, Director del INDH.

La existencia de una política orientada a tales fines cobra relevancia en este punto. Es decir, no sólo debe acreditarse la existencia de actos individuales de ciertos agentes del Estado orientados a los fines señalados, sino que además dichos actos individuales deben estar comprendidos dentro de una política de Estado, cuestión que descarto terminantemente.

El propio director del INDH, Sergio Micco, aclaró que no existe, en los hechos, una vulneración sistémica de derechos humanos:

“*Conceptualmente, la violación sistemática de los derechos humanos supone una concertación entre distintas instituciones, donde se crean leyes o se hacen políticas públicas que directamente, intencionadamente, tienen el objetivo de violar los derechos humanos. […] Si tú me preguntas a mí,* ***como director del Instituto yo te diría que no [existe violación sistemática de los derechos humanos]****. […] Quien diga acá se coordinaron Carabineros, el Ejército, el Ministro del Interior, la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia, para violar sistemáticamente los derechos humanos… eso es una afirmación gravísima, que se tiene que probar*”.[[120]](#footnote-120)

Luego, Sergio Micco precisó su planteamiento señalando que no estaban en condiciones de afirmar que existe tal sistematicidad, aunque tampoco se podía descartar y, en todo caso, enfatizó que lo que corresponde es que cada caso se resuelva por la vía institucional respectiva, esta es, los tribunales de justicia.[[121]](#footnote-121)

Los dichos del director del INDH previenen que, para aventurar la calificación de “violación sistemática de derechos humanos” se debe atender no sólo a un componente cuantitativo, como es el definido en el artículo 2 de la Ley N° 20.357 –citado por los acusadores-, sino también a uno cualitativo, como lo es el definido en el numeral 2° del artículo 1 del mismo cuerpo legal, el cual exige:

“*2º. Que el ataque a que se refiere el numerando precedente responda a una política del Estado o de sus agentes; de grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre algún territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares, o de grupos organizados que detenten un poder de hecho tal que favorezca la impunidad de sus actos.*”

Lo anterior es de la máxima relevancia. A este respecto, los acusadores han citado la Ley N° 20.357 sólo en aquella parte que conviene a sus intereses, utilizando únicamente la definición del concepto cuantitativo, prescindiendo y haciendo caso omiso de los estándares que impone el artículo 1 del mismo cuerpo legal, recién citado.

También reconocidos políticos han descartado la tesis de los acusadores. Así, por ejemplo, se ha pronunciado Jorge Burgos, ex ministro de Defensa e [Interior y Seguridad Pública](https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_del_Interior_y_Seguridad_P%C3%BAblica_de_Chile):

“*No comparto para nada la crítica de violación sistemática de derechos. Las denuncias específicas de acción delictiva deben ser investigadas con rigor, como está ocurriendo.*”[[122]](#footnote-122)

No puede sostenerse, con la liviandad que plantean los acusadores, que exista un patrón de comportamiento, que sean constitutivo de crímenes de lesa humanidad, y someter mis acciones al juicio y valoración de esta Corporación por cuanto, como se ha expresado latamente, los hechos que se me imputan son hechos de terceros, en los cuales no he tenido ninguna participación directa y además, la imputación es falsa, ya que **en el ejercicio de mi cargo jamás he instruido ni tolerado** la afectación ni vulneración a derechos humanos de mis compatriotas. Todo los contrario, y como reafirman mis reiteradas intervenciones públicas, siempre señalé a las Policías que su accionar debía realizar con apego a la ley y los protocolos de uso de la fuerza, y que su accionar durante el Estado de Emergencia debía realizarse con estricto apego y respecto a los derechos humanos.

Los acusadores no podrán mencionar un solo caso en que mi intervención haya derivado en la actuación concreta de un policía que involucre la detención o lesión de alguna persona en el transcurso de una de las numerosas marchas autorizadas, y otras manifestaciones y concentraciones.

Ello es así por cuanto jamás intervine personalmente para ordenar un hecho de esa naturaleza ni jamás lo haría.

En ese sentido se pronuncia Jorge Correa Sutil, ex Subsecretario del Interior:

“*No me parece acorde a los DDHH acusar al exministro [Chadwick] de cada caso de uso excesivo de la fuerza en las calles, ni de los tratos crueles o degradantes en cada comisaría, a menos que se pruebe que ordenó, o que conociéndolas, no hizo nada por detenerlas*.”[[123]](#footnote-123)

Así, la falta de rigor en el relato de los hechos se ve agravada con la liviandad de las conclusiones que exponen los acusadores. Ciertamente, no es posible predicar de las lesiones sufridas por civiles una política de Estado dirigida con el preciso objeto de vulnerar derechos humanos.

Siempre, durante mi ejercicio como Ministro del Interior y Seguridad Pública, solicité a las policías el máximo apego a la legalidad vigente y respeto a los derechos humanos de todas las personas, en la condición en que estuvieran. Tan pronto tuve conocimiento de situaciones que podían ser calificadas como irregulares, solicité inmediatamente el inicio de procedimientos administrativos y la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, entre otras medidas que se desarrollan en el capítulo siguiente.

## **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública dio pleno cumplimiento a sus deberes legales durante la vigencia del Estado de Emergencia y adoptó todas las medidas necesarias para evitar vulneraciones de derechos**

## **Marco jurídico aplicable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su función de velar por el orden público y en su relación con Carabineros de Chile**

Como ya se enunció al plantear la cuestión previa, para juzgar adecuadamente sobre la responsabilidad que le cabe a este ex Ministro de Estado es imprescindible comprender adecuadamente el marco legal dentro del que actúa el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

En esta materia, es crucial distinguir entre la competencia política y normativa que le corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la competencia técnica y operativa que le corresponde a las Policías, en general, y a Carabineros de Chile, en particular. En el primer plano, este ex Ministro de Estado cumplió cabalmente con sus obligaciones legales y empleó lealmente las atribuciones que la ley le concede para prevenir vulneraciones de derecho y determinar las responsabilidades y sancionarlas, en aquellos casos lamentables en que se hayan producido.

La fuente normativa de esta distinción, como se explicó, está en la propia Constitución, artículo 101, en la Ley N° 20.502, artículo 1, 2 y 3, letra b), y en la Ley N° 18.961. Dicho conjunto de normas señala con precisión que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública “concentra la decisión política” en materia de seguridad público y le corresponde “velar” por el orden público dentro del territorio nacional. Deberes que ha de cumplir con labores que consisten en: (i) concentrar la decisión política (no operativa) en esas materias, especialmente a través de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior; (ii) coordinar, evaluar y controlar la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás Ministerios y Servicios Públicos en estas materias; y, (iii) gestionar los asuntos y procesos administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para el cumplimiento de sus funciones y que sean de su competencia.

Por su parte, en el despliegue técnico y operativo de Carabineros de Chile, la institución cuenta con independencia y autonomía, la que es resultado de su carácter profesional y que siempre, sin excepción, debe sujetarse a las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables. Por lo mismo, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no imparte órdenes o instrucciones operativas a Carabineros de Chile. Así fluye particularmente del artículo 101 de la Constitución y del artículo 2 de la Ley N° 18.961.[[124]](#footnote-124)

Esta distinción de ámbitos de competencia –entre un plano político y normativo, y otro operativo– es plenamente concordante con lo dispuesto por la Ley N° 18.575. Dicha normativa, que establece el marco jurídico general aplicable a la Administración del Estado, señala expresamente, en su artículo 22, que los Ministerios, tienen por función “*proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector*”. Por otra parte, solo en “*casos calificados*” y en virtud de una ley, podrá encomendárseles “*actuar como órgano administrativo de ejecución*”. En otras palabras, el diseño establecido por las Leyes N° 20.502 y N° 18.961 no es casual ni arbitrario, sino que sigue las normas generales que aplican a toda la Administración del Estado.

En suma, este ex Ministro de Estado carece de facultades legales para impartir órdenes operativas a Carabineros de Chile. Consecuentemente, no es posible que se me impute por no haber impartido instrucciones para las cuales no tenía habilitación legal alguna. Lo anterior queda de manifiesto de la lectura de la Acusación, la cual, si bien acusa el haber “omitido deliberadamente” dictar medidas, no señala norma alguna según la cual habría estado obligado directamente a decretar medidas operativas a Carabineros.

### **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública adoptó todas las medidas que le permitían sus competencias para prevenir cualquier vulneración de derechos fundamentales**

Con todo, esta defensa no se limitará únicamente a precisar que los hechos imputados quedan fuera del ámbito de responsabilidad del Ministro del Interior y Seguridad Pública. Este ex Ministro de Estado, y el Gobierno en general, han empleado toda su autoridad política y todas las potestades que les confieren la Constitución y la ley, para evitar cualquier vulneración de derechos, investigar los hechos que pudieren revestir el carácter de tales, determinar sus responsables y aplicar las sanciones administrativas y penales pertinentes.

La revisión de los antecedentes que se indican y acompañan a esta presentación, no permite sino concluir que se han desplegado todos los esfuerzos posibles para evitar y sancionar cualquier vulneración de derechos ocurrida con ocasión del Estado de Emergencia. No corresponde, entonces, acusar a este ex Ministro de Estado de tolerancia o pasividad frente a los hechos que la Acusación le imputa irresponsablemente.

En ese sentido, di cabal cumplimiento no solo a la normativa que los acusadores estiman vulnerada, sino que además durante mi ejercicio como titular del Ministerio del Interior y Seguridad Pública impulsé medidas inéditas orientadas a instaurar una cultura de respeto a los derechos humanos al interior de la institución.

Cabe recalcar que ni la Constitución, ni la legislación hacen responsable a este ex Ministro de las decisiones operativas de Carabineros. Por eso son falaces las expresiones de la Acusación en orden a que es “*deber del Ministro desplegar esas fuerzas de modo apropiado para mantener el orden y la seguridad pública*”.

Del mismo modo, no puede establecerse que soy responsable de hechos en los que no tuve participación alguna, pues los “casos de uso desproporcionado de la fuerza” a que hace referencia la Acusación no han sido ejecutados por mi persona, ni bajo mis órdenes, ni con mi aquiescencia o consentimiento, ni han dejado de denunciarse e investigarse por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia por orden mía o producto de una falta de diligencia en denunciarlos.

Se imputa a este ex Ministro de Estado el haber omitido adoptar medidas eficaces para cumplir con los deberes que la ley me impuso en mi calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública. Así, tal como lo ha señalado la parte acusadora, se acusa a este ex Ministro de Estado de una infracción a la CPR y a las leyes por medio de una conducta omisiva, la que puede ser definida como “*la no ejecución de un obrar esperado por el ordenamiento jurídico-penal*”.[[125]](#footnote-125)

Al respecto, para que se configure una comisión por omisión deben concurrir los siguientes elementos:

“*1) que se concrete en la realidad la situación de hecho o de derecho que impone la obligación de realizar la actividad de que se trata; 2) que en la materialidad no se realice la actividad ordenada, y 3) que el sujeto haya estado en posibilidad de ejecutarla […]*”.[[126]](#footnote-126)

Pues bien, como se verá a continuación, estas acusaciones son absolutamente falsas, no concurriendo los elementos necesarios como para que se puedan imputar a este ex Ministro de Estado las omisiones alegadas por la parte acusadora.

Por el contrario, la revisión de los antecedentes que se indican y acompañan a esta presentación, no permiten sino concluir que este ex Ministro de Estado, y el Gobierno en general, han empleado toda su autoridad política y todas las potestades que les confieren la Constitución y la ley, para evitar cualquier vulneración de derechos, investigar los hechos que pudieren revestir el carácter de tales, determinar sus responsables y aplicar las sanciones administrativas y penales pertinentes. En efecto:

### **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública adoptó todas las medidas que le permitían sus competencias para prevenir cualquier vulneración de derechos fundamentales**

Al momento de decretar el Estado de Emergencia, se tomaron una serie de medidas como precaución para evitar vulneraciones de derechos. Así, y recordando que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no cuenta con habilitación legal respecto de las decisiones operativas de Carabineros de Chile, se señalaron los siguientes criterios:

* Las instituciones encargadas de garantizar el orden público, tanto las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública como las Fuerzas Armadas, debían hacerlo con apego a los protocolos existentes;
* Respeto pleno a la autonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos y compromiso con facilitar el trabajo de esa institución;
* Respeto pleno al ejercicio autónomo de facultades por parte del Ministerio Público, Tribunales de Justicia y la Defensoría Penal Pública;
* Facilitación por parte del Gobierno, de vías para que las personas pudieran denunciar cualquier transgresión a los derechos humanos; y
* Transparencia plena en el acceso a la información disponible.

Aún más, frente a posibles detenciones que pudieran ocurrir durante el estado de emergencia, los Jefes de la Defensa Nacional extendieron una autorización especial para que las credenciales del personal del Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía del Ministerio Público y el Servicio Nacional de Menores, sirviera de salvoconducto durante los toques de queda decretados. Además, dicho salvoconducto podía ser solicitado en cualquiera de las comisarías de Carabineros o establecimiento de la Policía de Investigaciones por cualquier abogado de confianza de una persona detenida, asegurándose así el ejercicio del derecho de defensa.

### **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública tomó una serie de medidas para facilitar la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos.**

Con fecha 22 de octubre del presente año, y en razón de una reunión sostenida con el Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos el día 21 del mismo mes, envié el Oficio N° 32.816, en el que reiteraba la total disposición del Gobierno de Chile a colaborar en todas las gestiones realizadas por el INDH a lo largo del país. Para tales efectos puse a disposición a mi jefa de gabinete para la realización de esta tarea. Por medio del mismo oficio señalé que, en relación al lamentable fallecimiento de Alex Núñez Sandoval, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública había requerido toda la información pertinente a Carabineros de Chile, institución que informó que se había instruido el sumario administrativo a fin de esclarecer las responsabilidades del caso y se habían puesto los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público, para que desarrollara la investigación correspondientes.[[127]](#footnote-127)

Además, aproximadamente una semana después, volví a oficiar al Director del INDH solicitándole que me hiciera llegar las querellas que habían presentado así como las denuncias que como INDH habían recibido, a fin de que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública pudiera tomar las medidas pertinentes.[[128]](#footnote-128) Al respecto, cabe señalar que por cada querella presentada por el INDH, Carabineros de Chile inició el respectivo sumario para determinar las responsabilidades disciplinarias que existieren.

### **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública facilitó la labor de los medios de comunicación.**

El compromiso de este ex Ministro de Estado con adoptar todas las medidas a fin de prevenir vulneraciones de derechos, se manifestó también en las medidas adoptadas a fin de facilitar la cobertura periodística de lo ocurrido durante el Estado de Emergencia, de manera de garantizar la transparencia, libertad de prensa y de expresión. Con objeto de asegurar la labor y cobertura de los medios de comunicación durante el *toque de queda*, se entregaron un total de 1.746 salvoconductos a periodistas a lo largo del país. Todo lo cual aseguró exitosamente la libertad de prensa y la transparencia del actuar de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Tan cierto es lo anterior, que es un hecho que los canales de televisión abierta transmitieron en directo desde las calles del país, en vivo y las 24 horas del día, el despliegue y acción de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas, en todo cuanto no comprometiera el éxito de sus operaciones.

### **Frente a las denuncias y querellas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar el rápido y exitoso esclarecimiento de los hechos.**

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no sólo puso la mayor atención en asegurar y facilitar la correcta labor del INDH y de los medios de prensa, sino que además hizo uso de todas sus atribuciones legales para esclarecer con celeridad los hechos y responsabilidades en relación a las denuncias y querellas realizadas.

Así, con fecha 23 de octubre, oficié tanto al General Director de Carabineros de Chile como al Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitando enviar antecedentes relativos a funcionarios y civiles fallecidos o lesionados o víctimas de cualquier tipo de afectación a su integridad física. Adicionalmente, se les solicitó, en primer lugar, informar los procedimientos administrativos y/o disciplinarios puestos en marcha y, segundo, si los antecedentes de cada caso habían sido puestos a disposición del Ministerio Público para efectos de dar curso a las investigaciones correspondientes.[[129]](#footnote-129)

En la misma línea, el mismo día 23, oficié a Carabineros de Chile solicitando toda la información disponible en relación a los hechos y acciones que devinieron en el fallecimiento de Alex Nuñez Sandoval, caso que había sido puesto en mi conocimiento por el director del INDH, don Sergio Micco, en reunión sostenida en el Palacio de La Moneda, ese mismo día, oportunidad en que le expresé la total colaboración del Gobierno a la labor que realizan como organismo autónomo del Estado. Además, en caso de que los antecedentes vincularan el deceso de Alex Núñez Sandoval con algún miembro de Carabineros, se solicitó toda información sobre procedimientos administrativos y/o disciplinarios puestos en marcha, así como el estado de avance de los mismos.[[130]](#footnote-130)

De forma similar, los días 25 y 26 de octubre, este ex Ministro de Estado volvió a oficiar al General Director de Carabineros de Chile solicitándole enviar todos los antecedentes relativos a los casos de Maicol Francisco Ignacio Núñez Saavedra, de Gabriel Calderón Gutiérrez, a los hechos ocurridos en la comuna de Valparaíso, al caso de César Mallea González, de Alejandro Eugenio Torres Guerrero y de Jeremy Rigoberto Lira Fajardo. Nuevamente, se pidió además información respecto a los procedimientos administrativos y/o disciplinarios puestos en marcha, el estado de avance de estos y si respecto de ellos se realizó la comunicación correspondiente al Ministerio Público.[[131]](#footnote-131)

No corresponde, entonces, acusar a este ex Ministro de Estado de tolerancia o pasividad frente a los hechos que la Acusación le imputa irresponsablemente.

## **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplió cabalmente con todas las obligaciones contenidas en el DS N° 1.364 como también con el deber de fiscalizar el cumplimiento de la Orden General N° 2.635 de Carabineros de Chile.**

Como adelantamos al plantear la cuestión previa, en su mayoría, las imputaciones que se formulan en la Acusación corresponden a hechos de terceros en los que no tuve participación alguna. Al contrario, los antecedentes acompañados a esta defensa dan cuenta del compromiso desplegado por este ex Ministro de Estado para evitar y sancionar esos lamentables hechos.

Por otra parte, en el Capítulo Primero solo se hace alusión a dos omisiones en las que este acusado sería directa y personalmente responsable. Se señala que no habría dado cumplimiento al deber de actualizar los protocolos de actuación de Carabineros de Chile, contenido en el DS N° 1.364 y que habría omitido la fiscalización de la Orden General N° 2.635 de Carabineros de Chile.[[132]](#footnote-132)

### **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplió cabalmente con todas las obligaciones contenidas en el DS N° 1.364.**

En primer lugar, el supuesto incumplimiento del deber de actualizar los protocolos de actuación de Carabineros de Chile debe ser descartado categóricamente.

En efecto, según ya hemos reseñado, con ocasión de lo informado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en informes de fondo Nº 31/17 y Nº 67/18, relativos al Caso 12.880, *Edmundo Alex Lemún Saavedra vs. Chile*, el Estado de Chile suscribió, con fecha 9 de marzo de 2018, un "Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones Caso Nº12.880", en donde se obligó adoptar las siguientes garantías de no repetición: (1) aprobar un decreto supremo que contenga lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial; (2) revisar y actualizar los protocolos existentes relativos al empleo del uso de la fuerza para la mantención del orden público; y, (3) establecer el mecanismo para que Carabineros de Chile reporte anualmente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas relativas al uso de la fuerza y episodios violentos.

Con motivo de lo anterior, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el DS N° 1.364, publicado en el Diario Oficial con fecha 4 de diciembre de 2018, estableció las disposiciones relativas al uso de la fuerza en las intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público, cuyo contenido, a modo general, consiste en:

* Artículo 1: establece los lineamientos generales sobre el uso de la fuerza en intervenciones policiales para el mantenimiento del orden público que deben observar las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, las que consideran la protección de la seguridad pública y de los derechos de las personas, así como el respeto de Carabineros de Chile a la ley, entre otros lineamientos de la misma naturaleza.
* Artículo 2: establece obligación de Carabineros de Chile para que, dentro del plazo de noventa días contados desde publicación del DS N° 1.364, revise y actualice la Orden General N° 2.287, de 2014, de Carabineros de Chile, que aprueba la actualización de Protocolos de Intervención del Orden Público y la Circular N° 1.756, de 2013, de Carabineros de Chile, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza, a fin de verificar que dicha normativa interna dé cumplimiento de los lineamientos generales establecidos en el artículo 1 del DS N° 1.364. Esta norma es la que, de acuerdo a los acusadores, habría incumplido este ex Ministro de Estado.

Además, establece la obligación de publicar los nuevos protocolos, actualizados, en el Boletín Oficial de Carabineros de Chile y en el Diario Oficial, así como también la obligación de actualizarlos con una periodicidad mínima de 4 años.

* Artículo 3: establece obligación de Carabineros de Chile de presentar informes semestrales al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por medio de la Subsecretaría del Interior, que contengan información estadística relativa al uso de la fuerza y episodios violentos por región y provincia.

Pues bien, lo cierto es que, el señalado DS N° 1.364 instruye que es Carabineros la institución encargada de actualizar sus protocolos, por cuanto, como se ha explicado latamente, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no cuenta con habilitación legal para dictar ni actualizar dichas regulaciones. Sin perjuicio de lo anterior, y como se lee en el Considerando 13º del referido decreto, se consagra la obligación de Carabineros relativa a la actualización y revisión, de manera periódica, de los protocolos existentes.

Asimismo, se señala que, con una periodicidad mínima de cuatro años, el contenido de los protocolos deberá ser revisado por Carabineros de Chile, debiendo publicarse en el Boletín Oficial de Carabineros y en el Diario Oficial, cada vez que se modifique.

De igual forma, se establece que en el proceso de revisión y actualización de los protocolos Carabineros de Chile deberá procurar el involucramiento de la sociedad civil y del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Finalmente, el DS N° 1.364 establece que, en virtud del literal b) del artículo 3° de la Ley N° 20.502, Carabineros de Chile deberá remitir semestralmente un informe sobre orden público y delitos violentos.

Una vez publicado el DS N° 1.364 en el Diario Oficial, el Subsecretario del Interior ofició al entonces General Director de Carabineros, Hermes Soto, con el objeto de que impulsara la actualización de los señalados protocolos, al tenor de los lineamientos contenidos en el decreto.[[133]](#footnote-133)

Así, don Hermes Soto, comunicó el día 10 de diciembre de 2018 una serie de medidas administrativas para favorecer el proceso de modernización y fortalecimiento de su institución, que incluía como medida N° 5 la *“Revisión y actualización constante de los protocolos de actuación de Carabineros de Chile en intervenciones para la mantención del orden público”*, motivo por el cual dicha institución congregó a funcionarios de distintas reparticiones, para dar cumplimiento al mandato presidencial. Carabineros inició de forma autónoma el trabajo de la nueva circular y orden general.

Como ya se ha explicado en detalle, se realizaron las coordinaciones necesarias –a través de reuniones presenciales o del envío de documentos con sus observaciones y comentarios- para que en la actualización de los protocolos e instrucciones participaran el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y órganos de la sociedad civil, como lo dispone el DS N° 1.364. En ello, la Subsecretaría del Interior, órgano de colaboración inmediata del Ministro, colaboró y participó de las mencionadas reuniones.

Asimismo, en conjunto con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile se reunió con el área temática de Seguridad Pública del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) que asesora a la Subsecretaría del Interior, para efectos de recoger las observaciones de los representantes del mundo civil, utilizando el mecanismo y la institucionalidad que la ley dispuso para dicho fin.

Tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como de la Defensoría de los Derechos de la Niñez remitieron oficios y documentos que contenían recomendaciones de alto nivel técnico y de alto valor, motivo por el cual, una cantidad sustancial de puntos fueron recogidos en su integridad y otros parcialmente y fueron tomados en consideración para realizar 66 modificaciones a los textos que inicialmente había confeccionado Carabineros de Chile.

Con todos los insumos precedentemente señalados, el General Director de Carabineros de Chile, Mario Rozas Córdoba, firmó la nueva circular N° 1.832, que actualiza instrucciones sobre el uso de la fuerza y la nueva Orden General N° 2635, que actualiza los protocolos para la mantención del orden público, ambas fechadas el 01 de marzo de 2019 y publicadas tanto en el Boletín Oficial de Carabineros de Chile como en el Diario Oficial el día 04 de marzo de 2019.

Esta Orden General de Carabineros, que actualiza los protocolos para el uso de la fuerza, tiene como objetivo el resguardo del derecho de manifestacion y ordenar el correcto uso de los medios policiales para el mantenimiento del orden público. Se estructura sobre 4 principios básicos para el uso de la fuerza: Principio de Legalidad, Necesidad, Proporcionalidad y Responsabilidad.

En virtud del principio de Responsabilidad, se ordena “*el uso de la fuerza fuera de los parámetros permitidos por la Ley,* ***no sólo conlleva las responsabilidades individuales por las acciones y omisiones incurridas, sino también la responsabilidad de los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos*.**” (énfasis agregado)

De lo expuesto, cabe señalar que no es efectivo que este ex Ministro de Estado habría omitido el deber de actualizar los protocolos indicados en el artículo 2 del DS N° 1.364. Por el contrario, es un hecho cierto que dichos protocolos fueron actualizados y publicados oportunamente.

### **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplió cabalmente con el deber de fiscalizar el cumplimiento de la Orden General N° 2635 de Carabineros de Chile.**

En segundo lugar, se ha imputado también el haber omitido fiscalizar activamente el cumplimiento de la Orden General N° 2.635, de 1 de marzo de 2019, de Carabineros de Chile, que fija el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, en circunstancias en que, en mi calidad de Ministro, cumplí cabalmente con este deber.

En efecto, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplió con su deber de fiscalizar que Carabineros de Chile emitiese informes semestrales con información estadística relativa al uso de la fuerza y episodios violentos, en conformidad al artículo 3° del DS N° 1.364.

Dando cumplimiento al DS N° 1.364, durante la primera quincena del mes de julio de 2019, Carabineros de Chile remitió el Informe *“Uso de la fuerza y episodios violentos”*, correspondiente al primer semestre de 2019.

## **El Estado de Chile cumplió debidamente todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con ocasión del Estado de Emergencia**

Si se estima que es posible un análisis de esta imputación, lo primero que debe tenerse presente es que la declaración de Estados de Emergencia es legítima en el contexto de los Tratados Internacionales, y por tanto no es un ataque a la población civil, si concurren las circunstancias de “*peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado*”, artículo 27.1 Convención Americana de Derechos Humanos, o “*en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente*”, artículo 4 Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos.

Luego, en este aspecto la Acusación debe rechazarse por cuanto el Estado de Chile y este ex Ministro cumplieron debidamente con todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con ocasión del Estado de Emergencia.

## **La declaración de Estado de Emergencia se realizó en uno de los casos previstos por la Convención Americana de Derechos Humanos**

Como se expresó, el requisito objetivo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos para admitir una suspensión de garantías constitucionales es la existencia de un “*peligro público u otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado*”. Este requisito se verificó en el país los días que siguieron al 18 de octubre recién pasado.

En efecto, como es de público conocimiento, a partir del día 4 y hasta la noche de ese 18 de octubre recién pasado se vivieron diferentes episodios de alteración del orden público que fueron escalando al punto de terminar esa noche con el incendio simultáneo de varias estaciones de Metro y el inicio de saqueos y destrucción de propiedades públicas y privadas a una escala imposible de abordar, por su simultaneidad y gravedad, por las fuerzas de orden y seguridad ordinarias, incluso con los servicios extraordinarios dispuestos para ese día.

Como se mencionó, los hechos referidos comenzaron tras el anuncio de elevar el pasaje del transporte público, realizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones el 4 de octubre, en la forma de una serie de manifestaciones y llamados a “evadir los controles” del metro. Durante la primera semana, estos hechos fueron aislados y con un grupo menor de personas. Estos incidentes estuvieron concentrados en algunas estaciones ubicadas en el sector céntrico de Santiago y fueron estudiantes de colegios del dicho sector quienes concretaban estas manifestaciones. Sin embargo, la siguiente semana tales hechos se masificaron y de simples infracciones a la regulación del Sistema de Transporte Público, se pasó a la comisión de graves ataques consistentes en múltiples delitos de incendios, robos y daños, que por su número, extensión territorial y simultaneidad, adquirieron un cariz de grave alteración del orden público que determinó declarar el Estado de Emergencia, como se explicó en los Antecedentes de esta presentación.

## **Durante el Estado de Emergencia, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública veló por el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales**

En el Capítulo Segundo de la Acusación, los acusadores se limitan apenas a enunciar, de manera genérica, una serie de estándares sobre derechos humanos, uso de la fuerza en los estados de excepción y restricción de derechos, para, luego, sin mayor argumentación, alega que estos estándares habrían sido vulnerados por mí en mi calidad de Ministro de Estado.

Sin embargo, en ningún momento especifican las acciones u omisiones mediante las cuales este acusado habría infringido esos estándares. Por el contrario, como se verá a continuación, los hechos demuestran que el Estado de Chile cumplió correctamente con todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Durante el Estado de Emergencia, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública no sólo observó correctamente por el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales a las que Chile se encuentra sujeto. Así, el Gobierno informó debidamente tanto a la Organización de Naciones Unidas como a la Organización de Estados Americanos de las garantías constitucionales que, conforme a derecho, se vieron restringidas durante el estado de emergencia.

En efecto, con fecha 21 de octubre de 2019, el Gobierno de Chile, a través de su Misión Permanente ante la Organización de Estados Americanos, informó detalladamente al Secretario General de esta organización que se había declarado el estado de excepción constitucional de emergencia en diversas regiones, provincias y comunas del país. Además, se señalaron las disposiciones legales en virtud de las cuales esta declaración era procedente, la duración que podían tener los estados de emergencia decretados, las medidas que se podían tomar durante la vigencia de estos y los fundamentos en base a los cuales se tomó la decisión de declararlos. [[134]](#footnote-134)

Posteriormente, con fecha 25 de octubre de 2019, el Presidente de la República, mediante nota N° 105, procedió a trasmitir esta misma información al Secretario General de las Naciones Unidas.[[135]](#footnote-135) Además, dos días después, informó también al Secretario General la finalización del Estado de Emergencia.[[136]](#footnote-136)

Asimismo, el Gobierno no sólo informó prontamente a la Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas sobre las medidas adoptadas, sino que, con fecha 24 de octubre del presente año, invitó a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y al Director Ejecutivo de la División de las Américas de “*Human Rights Watch*” a visitar el país con el objeto de “*[…] observar la situación del país […] y tomar nota de las medidas implementadas por el gobierno para reestablecer la paz social y proteger y promover los derechos humanos*”.[[137]](#footnote-137), quienes se encuentran en el país y se han reunido con las instituciones competentes.

## **Durante el Estado de Emergencia, se realizaron manifestaciones y reuniones, limitándose los derechos de locomoción y reunión a lo estrictamente necesario para restablecer el orden y evitar más ataques graves a personas y propiedades públicas y privadas**

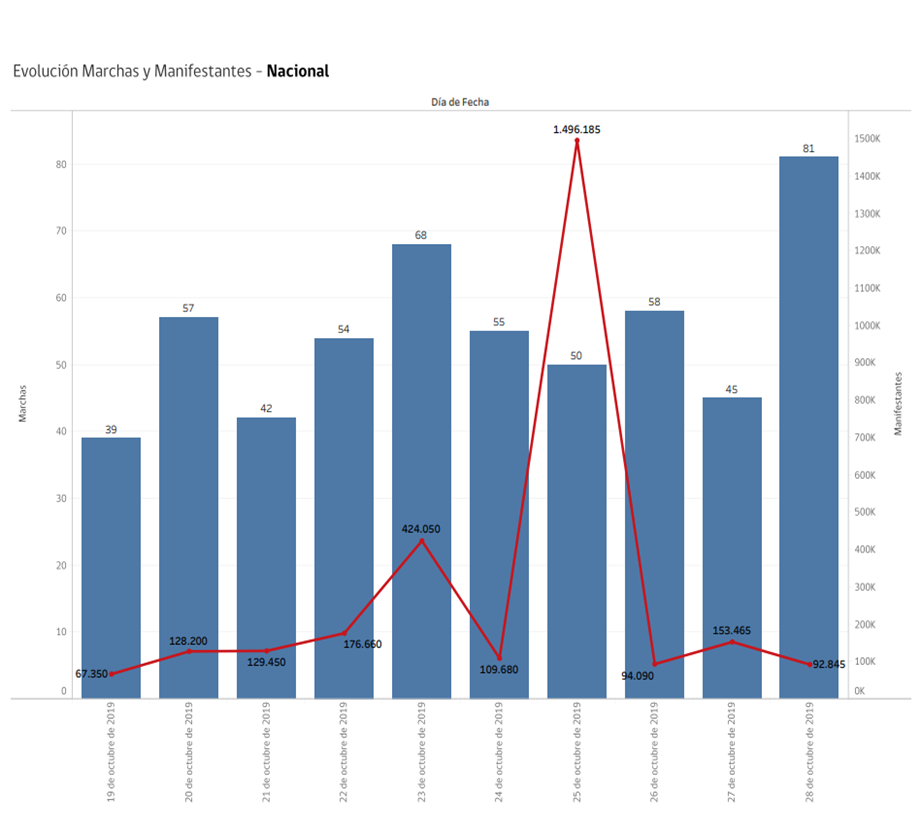
Sobre este aspecto, lo primero que cabe señalar es que con la declaración de Estado de Emergencia no se afectó en modo alguno el funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho y la protección que éstas brindaron a las personas detenidas. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y éste presentó a quienes estimó correspondía a los Tribunales de Justicia, quienes decretaron o no las medidas cautelares que consideraron correspondían, sin intervención alguna del Gobierno ni de mi persona como Ministro del mismo.

Los hospitales siguieron atendiendo a sus pacientes, incluidos aquellos que presentaban lesiones por su participación en marchas y otras manifestaciones.

El Congreso Nacional continuó sesionando en sus sedes y con los horarios que determinaron sus Cámaras soberanamente.

La Contraloría General de la República, la Defensoría Penal Pública y el Instituto de Derechos Humanos continuaron funcionando autónomamente, así como las demás instituciones públicas y privadas, la industria y el comercio siguieron funcionando en sus horarios y con sus atribuciones de siempre, salvo las alteraciones que las propias manifestaciones causaban.

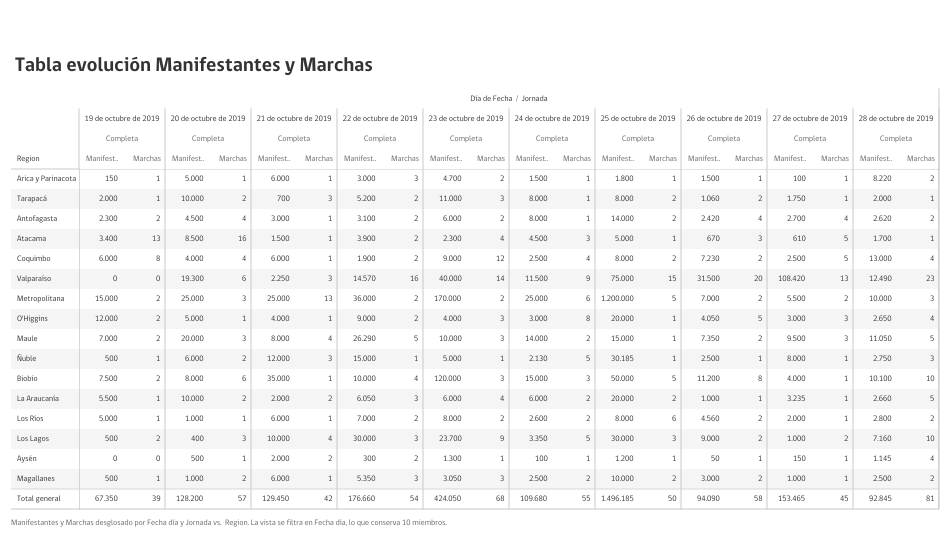
Incluso aun rigiendo el Estado de Emergencia, que permite limitar el derecho de reunión, tales limitaciones fueron mínimas. De hecho, entre el 19 y el 28 de octubre, se manifestaron a lo largo del país más de 2 millones 770 mil personas y se verificaron las siguientes marchas en el país:

**Figura N° 01. Evolución marchas y manifestantes nivel nacional**

Fuente:División de Gobierno Interior, Subsecretaría del Interior

En el gráfico, las barras azules dan cuenta de las marchas convocadas y la línea roja informa de los asistentes.

La distribución a nivel regional se observa en el siguiente cuadro:

**Tabla N° 01. Evolución manifestantes y marchas nivel regional**

Fuente: División de Gobierno Interior, Subsecretaría del Interior

Cabe destacar que el día 25 de octubre de 2019, estando vigente el Estado de Emergencia y rigiendo toque de queda, se reunieron más de 1.200.000 personas en Santiago:



**Imagen N° 01. Vista aérea marcha 25 de octubre de 2019 – Plaza Italia**

Fuente:Medios de prensa

**En síntesis:** Los acusadores no logran acreditar la infracción de deberes y la responsabilidad que pretenden y su argumentación es suficiente para sostener la gravedad de las imputaciones que realizan.

Los acusadores no dan cuenta de cuál sería la relación causal entre las omisiones que, equivocadamente, se imputan y los graves hechos en que fundan la Acusación.

Los acusadores tampoco dan cuenta de ninguna acción u omisión de este Ministro que tuviera como efecto vulneraciones a los derechos fundamentales o el incumplimiento de normas jurídicas aplicables.

En razón de lo expuesto, debe descartarse completamente que este Ministro de Estado haya infringido la Constitución y las leyes, o haya dejado estas sin ejecución al omitir las medidas necesarias para evitar vulneraciones a los derechos humanos.

# Contestación al Capítulo Segundo de la Acusación

## **Imputaciones formuladas en el Capítulo Segundo de la Acusación**

La principal imputación que se realiza en el Capítulo Segundo es que este ex Ministro habría omitido la delegación de potestades presidenciales en los Decretos de Estado de Emergencia, al concurrir con su firma, quedando los Jefes de la Defensa Nacional “*en una situación de no sujeción a la cadena normativa que somete el control de las fuerzas de orden al debido control político.*”[[138]](#footnote-138) Además, se señala que la supuesta remisión al antiguo artículo 41 N° 6 de la Constitución, derogado después de la reforma constitucional del año 2005, que contendrían los Decretos de Estado de Emergencia habría producido que, en los hechos, los Jefes de la Defensa Nacional aplicarán atribuciones propias de un Estado de Sitio.

Como se explicará en detalle, ambas imputaciones y las supuestas ilegalidades que de ellas deducen los acusadores, como la ilicitud del *toque de queda*, carecen de todo fundamento normativo y deben ser descartadas categóricamente.

Por lo demás, cabe anotar que la decisión para decretar un *toque de queda* depende del Jefe de Defensa designado en la declaratoria de emergencia, por lo tanto, no le cabe a este ex Ministro de Estado participación alguna en dicha reclamación.

## **Marco normativo aplicable al Estado de Emergencia**

Dado el carácter de las imputaciones y las imprecisiones en que incurre la Acusación respecto de la naturaleza de los Estados de Excepción Constitucional, es necesario realizar algunas precisiones antes de hacernos cargo del fondo de las acusaciones.

Los Estados de Excepción Constitucional se establecen en la Constitución, más precisamente, en el Capítulo IV, sobre Gobierno, con un párrafo destinado especialmente a ellos. Así, en el artículo 39 del texto constitucional, se señalan los casos excepcionales en que se pueden ver legítimamente afectados los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas. Estas situaciones excepcionales corresponden a casos de guerra, ya sea externa o interna, a casos de conmoción interior, emergencia y calamidad pública. Los artículos siguientes detallan los cuatro Estados de Excepción Constitucional contemplados al efecto.

En ese sentido, el artículo 40 de la Constitución, señala que en caso de una guerra externa se podrá declarar Estado de Asamblea y que frente a una guerra interna o a una situación de grave conmoción interior se podrá declarar Estado de Sitio. Además establece que, en ambos casos, la declaración la realiza el Presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional.

A continuación, el artículo 41 de la Constitución establece que en caso de calamidad pública el Presidente de la República podrá declarar Estado de Catástrofe, si bien en este caso no se necesita acuerdo con el Congreso Nacional, si debe informar de las medidas adoptadas en virtud del Estado de Catástrofe. Por último, señala que “*[d]eclarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.*”

En similar sentido, el artículo 42 señala que, “*en caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación”*, el Presidente de la República podrá declarar Estado de Emergencia. Al igual que en el Estado de Catástrofe, no se requiere acuerdo del Congreso para declararlo y se mantiene el deber de información. Sin embargo, el Estado de Emergencia tiene una duración de hasta quince días prorrogable por un único e igual período, estableciéndose que, en caso de nuevas prórrogas, se requerirá el acuerdo del Congreso Nacional. En términos idénticos al artículo 41 de la Constitución, se estable que “*las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la* República”, quien “***asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale***” (énfasis agregado).

Luego, el artículo 43 de la Constitución especifica las facultades que tendrá el Presidente de la República en los distintos Estados de Excepción Constitucional. El inciso final del artículo 43 de la CPR dispone que las garantías constitucionales que pueden ser restringidas en virtud de la declaración de un estado de excepción constitucional de emergencia, son las libertades de locomoción y reunión.

Agrega, por su parte, el artículo 44 de la Constitución que:

“***Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos****. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares*” (énfasis agregado).

Este esquema normativo ha sido modificado en dos oportunidades. La primera, el año 1989, y la segunda, el año 2005. Originalmente, el Estado de Emergencia se asemejó al Estado de Sitio, sin embargo, a partir de la reforma de 1989 tiene una regulación especial, actualmente contenida en los artículos 42 y 44 de la Constitución, recién reseñados.

A la luz de las disposiciones referidas, aparece que tanto la Constitución como la LOC de los Estados de Excepción, en relación al Estado de Emergencia, establecen un esquema normativo que reconoce que en dicho estado excepcional, es posible afectar, en mayor o menor medida, determinadas garantías constitucionales.

## **La LOC de los Estados de Excepción se encuentra plenamente vigente y es coherente con la regulación constitucional del Estado de Emergencia**

La ley a que hace referencia el artículo 44 de la Constitución es la LOC de los Estados de Excepción. Dicha normativa se encuentra plenamente vigente y es coherente con la regulación que estableció la reforma constitucional aprobada mediante la ley N° 20.050. Como se explicará en detalle, así se desprende de cualquier interpretación ajustada a derecho, de lo resuelto por la Contraloría General de la República, de la práctica administrativa y de lo fallado por los Tribunales Superiores de Justicia.

Además, la afirmación contraria por parte de los acusadores, supone una contradicción con lo que ellos mismos señalan. Por una parte, recurren a los artículos 4 y 9 de la LOC de los Estados de Excepción para fundamentar que existiría una falta de delegación, la que constituiría un vicio de los Decretos de Estado de Emergencia; y, por otra parte, a fin de justificar la supuesta falta de vigencia del artículo 5 de la misma ley, señalan que ella se encontraría derogada. Lo cierto es que la LOC de los Estados de Excepción se encuentra plenamente vigente, y que los acusadores interpretan de forma antojadiza sus artículos 4 y 9.

En nuestro ordenamiento, conforme a los artículos 52 y 53 del Código Civil, la derogación puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando el legislador dispone en términos explícitos la pérdida de vigencia de una norma y es tácita “*cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior*”, de acuerdo al artículo 52 del Código Civil. El mismo cuerpo, en su artículo 53, se encarga de precisar que la derogación tácita “*deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.*” En otras palabras, a falta de una derogación expresa, existiendo dos normas compatibles, no cabe hablar de derogación. En ese sentido la doctrina ha señalado:

“*respecto a la derogación tácita, implica que la ley general posterior no deroga tácitamente la ley especial que verse sobre la misma materia. Las disposiciones especiales o excepcionales deben ser derogadas expresamente por la ley general posterior.*”[[139]](#footnote-139)

Eso es precisamente lo que ocurre en este caso. En primer lugar, no existe norma expresa ni antecedente alguno en la historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.050 que permita concluir la intención del constituyente de derogar la LOC de Estados de Excepción. Por lo mismo, lo que sostienen los acusadores implicaría que habría existido una derogación tácita de la norma.

Sin embargo, ello no es así. La regulación de los Estados de Excepción Constitucional posterior a la reforma constitucional del año 2005 mantuvo el diseño institucional según el cual los Jefes de la Defensa Nacional están atribuidos de potestades propias, concedidas directamente por la ley respectiva.

En este aspecto, cabe destacar que la norma antiguamente contenida en el artículo 41 N° 6 de la Constitución no fue eliminada sin más por el constituyente del año 2005. Contrario a lo afirmado por los acusadores, la Constitución recoge actualmente una norma prácticamente idéntica, pero en una ubicación distinta.

En efecto, la Constitución disponía en el artículo 41 N° 6, inciso primero:

“*Declarado el estado de emergencia o de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del jefe de la Defensa Nacional que el Gobierno designe, quien asumirá el mando con las atribuciones y deberes que la ley señale.*”

Pues bien, después de la reforma constitucional del año 2005, la misma disposición quedó, en el artículo 42, inciso segundo, que dispone:

“*Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente de la República. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.*”

Sobre el particular, es pertinente señalar que la reforma constitucional del año 2005 no alteró los derechos y libertades que podrían ser restringidos o limitados en un Estado de Emergencia, es más, antes de la reforma en comento, la norma constitucional señalaba en el artículo 41 Nº 4 que por la declaración del Estado de Emergencia se podrán restringir el ejercicio de la libertad de locomoción y el derecho de reunión. Esto se debe a que, previo a la reforma constitucional del 2005, ambos estados de excepción constitucional se trataban conjuntamente. Así, puede observarse que, en el fondo, se trata de la misma disposición, sólo que fue trasladada al siguiente artículo de la Constitución, como consecuencia de la distinción que el constituyente del año 2005 quiso hacer entre Estado de Catástrofe y Estado de Emergencia. Actualmente, encontramos esa frase en el inciso final del artículo 43 de la Constitución.

Resulta absurdo, entonces, pretender que la falta de actualización de la referencia respectiva en la LOC de los Estados de Excepción, implique la derogación completa del artículo.

Sobre este punto, cabe aclarar también, que los acusadores sostienen que el sentido de la nueva disposición habría cambiado radicalmente porque el artículo 42 ya no emplea el vocablo “*mando*” que sí usaba el antiguo artículo 41 N° 6, inciso primero, de la Constitución. Sin embargo, resulta evidente que no se ha producido tal cambio radical. El sentido y alcance de ambas normas constitucionales sigue siendo establecer un ámbito de atribuciones propias del Jefe de la Defensa Nacional, especificado por la legislación orgánica.

Para confirmar lo anterior, basta considerar que el sentido natural y obvio de las palabras “*mando*” y “*dirección*” es el mismo si atendemos a las definiciones que entrega la Real Academia de la Lengua Española, según la cual dirección es la acción y efecto de dirigir que quiere decir: *Gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión*; y mando significa: *Autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos*. Resulta, entonces, absolutamente infundada la interpretación de los acusadores.

De este modo, no cabe sino concluir que la citada reforma no introdujo cambios en la norma de la LOC de los Estados de Excepción por tanto, goza de plena vigencia respecto de los estados de excepción constitucional de emergencia.

## **Sentido y alcance de las atribuciones contenidas en el artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción**

En virtud de lo expuesto, resulta incontestable que la LOC de los Estados de Excepción se encuentra plenamente vigente, en todo aquello en que es compatible con la Constitución, lo que, al tenor del artículo 42, inciso segundo de la Constitución, señala que el Jefe de la Defensa Nacional asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las “*atribuciones y deberes que la ley señale*”, las que deben entenderse referidas y, más concretamente, al artículo 5° de la LOC de los Estados de Excepción, que señala los “*deberes y atribuciones*” que le corresponden al Jefe de la Defensa Nacional.

En línea con lo anterior, cabe precisar cuáles son aquellas atribuciones que la LOC de los Estados de Excepción confiere directamente a los Jefes de la Defensa Nacional, y si entre ellas se encuentra la de instruir el llamado *toque de queda*.

El artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción especifica las atribuciones del Jefe de la Defensa Nacional, en los siguientes términos:

“*1) Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de emergencia, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción;*

*2) Dictar normas tendientes a evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar;*

*3) Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno;*

*4)* ***Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella****;*

*5) Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros;*

*6) Impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona, y*

*7) Las demás que le otorguen las leyes en su calidad de tal*"(énfasis agregado).

Es precisamente el numeral 4 de este artículo 5, la norma que confiere sustento normativo a las instrucciones, sean bandos o comunicaciones, de los Jefes de la Defensa Nacional también llamadas *toque de queda*.

Como es lógico, el “*control*” de una actividad necesariamente implica su restricción, sea ésta en menor o mayor medida, de fondo o de forma, de acuerdo a las categorías que la propia LOC de los Estados de Excepción reconoce. En el caso del *toque de queda* el control se materializa en la exigencia de una autorización especial, otorgada por Carabineros de Chile, para desplazarse dentro de la zona y horario afectos.

Para comprender lo anterior es importante tener a la vista el artículo 12 de la propia LOC de los Estados de Excepción, que distingue entre suspensiones y restricciones de derechos en los siguientes términos:

“*Entiéndese que se suspende una garantía constitucional cuando temporalmente se impide del todo su ejercicio durante la vigencia de un estado de excepción constitucional.*

*Asimismo, entiéndese que se restringe una garantía constitucional cuando, durante la vigencia de un estado de excepción, se limita su ejercicio en el fondo o en la forma.*”

Cabe señalar que los bandos y comunicaciones que establecieron el *toque de queda* establecieron un control del tránsito en determinadas zonas declaradas en Estado de Emergencia por un determinado período de horas, estableciendo además los casos que estaban exentos de dicho control, como ambulancias, carros de bomberos, personas que se encuentran en una situación de emergencia y también se establecieron exenciones particulares a través de salvoconductos, entregados por Carabineros de Chile, 1.746 de ellos a periodistas, asegurando con ello el ejercicio de la libertad de prensa, y 1.082 abogados independientes. Además, se extendió una una autorización especial para que las credenciales del personal del Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía del Ministerio Público y el Servicio Nacional de Menores, sirvieran de salvoconducto durante los toques de queda.

Nuestro ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de que el Jefe de la Defensa Nacional establezca el control de tránsito en la respectiva zona de emergencia, como ha sido la práctica común en los Estados de Catástrofe, según se verá en el apartado siguiente. Así, el verbo “*controlar*” que usa el artículo 5 N° 4 se debe entender en relación de funcionalidad con el denominado *toque de queda* en el marco de un Estado de Excepción Constitucional, de conformidad al artículo 12 de la LOC de Estados de Excepción. Esto es, “*controlar*” se refiere a la materialización de la restricción de tránsito que la autoridad consideró necesaria.

En consecuencia, los Jefes de la Defensa Nacional se encontraban plenamente habilitados para ejercer el control de la entrada y salida de la zona declarada en emergencia y del tránsito en ella, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5° de la LOC de Estados de Excepción.[[140]](#footnote-140)

## Lo resuelto por la Contraloría General de la Republica y la práctica administrativa confirman la vigencia de la LOC de los Estados de Excepción y la legalidad de los toque de queda

La plena vigencia de la LOC de los Estado de Excepción se ha mantenido sin cuestionamiento alguno en todos los estados de catástrofe que se han declarado, ejecutándose restricciones de locomoción y reunión por parte de los Jefes de la Defensa Nacional. Cabe recordar que la regulación constitucional de ambos estados de excepción es actualmente idéntica:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ESTADO DE EMERGENCIA** | **ESTADO DE CATÁSTROFE** |
| **Facultades JDN** | Art. 43, inc. final. Declarado el estado de emergencia, las zonas respectivas quedarán bajo la **dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional** que designe el Presidente de la República**. Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale**. | Art. 41, inc. final. Declarado el estado de catástrofe, las zonas respectivas quedarán bajo la **dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional** que designe el Presidente de la República. **Este asumirá la dirección y supervigilancia de su jurisdicción con las atribuciones y deberes que la ley señale.** |
| **Funciones del Presidente** | Art. 43, inciso final. Por la declaración del estado de emergencia, **el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión**. | Art. 43, inciso tercero, primera frase. Por la declaración del estado de catástrofe, **el Presidente de la República podrá restringir las libertades de locomoción y de reunión**. |

Por su parte, los decretos que declaran estados de excepción constitucional de estado de catástrofe han sido, incluso, más escuetos que los de estado de emergencia vigentes y, pese a ello, nunca se ha discutido la constitucionalidad y la legalidad de las medidas de restricción de la locomoción y de reunión adoptadas.



En consecuencia, en todos los casos de estado de excepción constitucional que se han decretado, las restricciones a la libertad de locomoción y de reunión se han efectuado en virtud de las atribuciones que contempla la LOC de los Estados de Excepción para el Jefe de la Defensa, incluso cuando no se mencionan expresamente en el Decreto de Estado de Emergencia respectivo. No se ha requerido una delegación expresa **y la Contraloría General de la República ha tomado razón de todos los decretos de estado de emergencia y de catástrofe en que se hace expresa referencia a los artículos 5º y 7º de la ley Nº 18.415, sin que haya nunca prevenido que se encontrarían derogados.**

Tanto la Contraloría General de la República como las distintas administraciones que han debido decretar Estados de Excepción Constitucional, han aplicado y refrendado esa normativa. Asimismo, tanto el actuar de la Contraloría General de la República como la práctica de las distintas administraciones confirman que la instrucción del *toque de queda* es una atribución de los Jefes de la Defensa Nacional.

La vigencia de la LOC de los Estados de Excepción ha sido confirmada por la Contraloría General de la República. Así se desprende, en primer lugar, de la toma de razón efectuada a los propios Decretos de Estado de Emergencia, impugnados por los acusadores. Adicionalmente, puede señalarse que este no fue un pronunciamiento aislado, ha sido una postura constante de la Contraloría General de la República.

Así, con ocasión de una solicitud de esta H. Cámara de Diputados realizada en relación al Estado Catástrofe decretado con ocasión de los incendios en la zona centro sur del país el año 2017, la Contraloría General de la República resolvió que:

“*es oportuno tener presente que, en el caso de medidas adoptadas en el marco de estados de excepción constitucional,* ***resulta aplicable lo preceptuado en el artículo 10 de la ley N° 18.415****, orgánica constitucional de los estados de excepción, según el cual las facultades que el Presidente de la República delegue en las autoridades que señala el mismo texto legal, ‘serán ejercidas, dentro de la respectiva jurisdicción, mediante la dictación de resoluciones, órdenes o instrucciones exentas del trámite de toma de razón*’” (énfasis agregado).[[141]](#footnote-141)

En el mismo orden de ideas, respecto al decreto N° 328, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que declara estado de catástrofe en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, la Contraloría General de la República cursó el mencionado decreto con alcance, haciendo presente que:

“*[d]e acuerdo al artículo 8°, inciso primero, de la ley N° 18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, dicha declaración no podrá exceder de noventa días, sin perjuicio que se solicite su prórroga o nueva declaración en los términos previstos en esa norma.”*

Por último, en la misma línea, pueden referirse los decretos supremos N° 152, de 2010, del Ministerio del Interior, mediante el que se decretó Estado de Catástrofe en la Región del Maule con ocasión del terremoto del 27 de febrero de 2010; N° 352, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el que se decretó Estado de Catástrofe en la región de Atacama con ocasión del aluvión que la afectó; y N° 946, de 2014, mediante el que se decretó Estado de Catástrofe en la comuna de Valparaíso con ocasión del incendio que la afectó.

En todos esos casos, los respectivos decretos supremos se remitieron a la LOC de los Estados de Excepción y fueron tomados de razón por la Contraloría General de la República.

## **El artículo tercero de los decretos de estado de emergencia establecieron que el Jefe de la Defensa Nacional tendría todas las atribuciones previstas en el artículo 5° de la LOC de Estados de Excepción**

Los acusadores sostienen que, en los Decretos de Estado de Emergencia, no se habría delegado en los Jefes de la Defensa Nacional las atribuciones necesarias de restricción de derechos. Esta omisión, por si misma, constituiría un vicio de dichos actos, ya que, después de la reforma constitucional del año 2005, las potestades propias de los Jefes de la Defensa Nacional habrían quedado derogadas y su vigencia sería incompatible con el “*principio de mínima restricción*”[[142]](#footnote-142). Por esa razón, “*el legislador orgánico ya no puede disponer facultades autónomas para los jefes de la defensa nacional*”.[[143]](#footnote-143)

Tal argumentación, como se ha visto, es errada –no es efectivo que la LOC de los Estados de Excepción sea incompatible con el texto constitucional– y contradictoria con lo señalado por los propios acusadores –que sostienen, a la vez, la derogación de la LOC de los Estados de Excepción y que ella se habría infringido en la dictación de los Decretos de Estado de Emergencia. Adicionalmente, se trata de una argumentación que interpreta erradamente los términos de la LOC de los Estados de Excepción.

Los Decretos de Estado de Emergencia establecieron expresamente que los Jefes de la Defensa Nacional tendrían todas las atribuciones previstas en el artículo 5° de la LOC de los Estados de Excepción, por lo que el reproche respecto de ellos no resulta pertinente.

En efecto, todos los Decretos de Estado de Emergencia señalan, en su artículo tercero: “*En el ejercicio de sus funciones, el* ***Jefe de la Defensa Nacional tendrá́ todas las facultades previstas en el artículo 5º de la ley Nº 18.415****, especialmente la prevista en su número 1, esto es, asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica que se encuentren en la zona declarada, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad en la zona, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, especialmente, la de la Intendente de la Región (….)*.” (énfasis agregado)

Esta redacción responde a una definición inédita en la práctica constitucional relativa a decretos que declaran estado de excepción constitucional de emergencia, que no puede ser valorada como una mera reiteración.

El artículo 4° de la LOC de los Estados de Excepción señala: “*Declarado el estado de emergencia, las facultades conferidas al Presidente de la República podrán ser delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe*.”. En efecto, esta norma contempla la posibilidad que las atribuciones de S.E. el Presidente de la República sean “*delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional*.” Como se indicó, ello precisamente ocurrió en virtud de lo dispuesto en el artículo tercero de los Decretos de Estado de Emergencia, referida a aquellas atribuciones contenidas en el artículo 5° de la LOC de los Estados de Excepción.

En efecto, aquella restricción a las libertades de locomoción y de reunión contemplada en el inciso final del artículo 43 de la CPR, corresponde a aquellas señaladas en los numerales 3 y 4 de artículo 5° de la LOC de los Estados de Excepción:

“3) *Autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno;*

*4) Controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella;”.*

Como se indicó, a través de los Decretos de Estado de Emergencia se facultó al Jefe de la Defensa Nacional respectivo para ejercer todas las atribuciones del artículo 5° de la LOC de los Estados de Excepción, **para resolver el toque de queda y las necesarias para hacerlo valer**, ya que estas incluyen el “autorizar la celebración de reuniones en lugares de uso público, cuando corresponda, y velar porque tales reuniones no alteren el orden interno” (Nº 3), pudiendo, por ende, no autorizarlas; y “controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella” (N° 4), pudiendo, en consecuencia, determinar requisitos como el salvoconducto para circular en ella durante un cierto periodo de tiempo.

## **Las medidas adoptadas por los Jefes de la Defensa Nacional satisfacen plenamente el principio de “mínima restricción de derechos”**

Sostienen los acusadores que la LOC de los Estados de Excepción Constitucional no satisface el principio de “*mínima restricción de derechos*” que se desprendería del artículo 44 de la Constitución,[[144]](#footnote-144) al señalar que la ley “*contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional*”.

Sin embargo, tal principio es una exigencia que debe satisfacer el legislador orgánico, sin que le corresponda al Presidente de la República, al Ministro del Interior y Seguridad Pública o a un Jefe de la Defensa Nacional evaluar si la ley satisface o no dicho estándar. Las autoridades, conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución, deben, en todo momento, dar pleno cumplimiento al principio de juridicidad.

Lo anterior no obsta a constatar que, en los hechos, los Jefes de la Defensa Nacional, aun cuando la LOC de los Estados de Excepción no especifica limitaciones al ejercicio de la atribución contenida en su artículo 5 N° 4, dieron estricto cumplimiento al principio de restricción mínima de derechos. En efecto, el *toque de queda* fue usado única y exclusivamente en aquellos casos en que resultaba imprescindible para asegurar el orden público y la seguridad de las personas. En el mismo sentido, su uso siempre se acoto a zonas determinadas, por horarios específicos y restringiendo su extensión progresivamente, en cuanto las circunstancias lo ameritaban. Así se desprende inequívocamente de la siguiente tabla, que da cuenta del uso racional y proporcionado de dichas instrucciones:



**Tabla N° 02. Horario *toque de queda* por Provincia/Comuna y fecha**

Fuente: Ministerio de Defensa Nacional

Empleando el mismo criterio, el Presidente de la República puso término al Estado de Emergencia, en cuanto las circunstancias lo permitieron, incluso antes de que venciera el plazo de 15 días para su prorroga, de acuerdo al artículo 42 de la Constitución.

En efecto, con fecha 27 de octubre de 2019, mediante los decretos supremos N°s 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540 y 541, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se levantaron todos los Estados de Emergencia decretados.

## **Los Decretos de Estado de Emergencia y las actuaciones de los Jefes de la Defensa Nacional se ajustaron plenamente a derecho**

Los Decretos de Estado de Emergencia, fueron dictados en completa sujeción a nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el Estado de Emergencia en las diversas provincias del país fue declarado mediante decretos supremos firmados por el Presidente de la República y por los ministros respectivos, de Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, según dispone el artículo 8 de la LOC de los Estados de Excepción.

A continuación, fueron tomados de razón por la Contraloría General de la República y publicados en el Diario Oficial. Todos los Decretos de Estado de Emergencia señalan el estado de excepción que se declara, las zonas afectadas sobre las cuales rige el estado de excepción y designan al respectivo Jefe de la Defensa Nacional. Además, todos ellos señalan expresamente que el jefe de la Defensa Nacional contará con las facultades previstas en el artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción, sin que lo anterior haya sido objeto de alcance alguno por parte de la Contraloría General de la República.

Hasta la fecha todos los estados de excepción constitucional que se han decretado desde 1990 a la fecha han seguido la misma formalidad (Terremoto 2010, Incendio Valparaíso 2014, entre otros).

Igualmente, lo obrado por los Jefes de la Defensa Nacional se ciñó estrictamente a las potestades que la LOC de los Estados de Excepción les confiere. En particular, a su artículo 5 que los habilita expresamente para controlar el tránsito en la zona afectada; potestad que siempre les ha sido reconocida y que fue usada de forma completamente racional y proporcionada, según se explicó.

## **Contraloría General de la República y la práctica administrativa confirman que la instrucción del toque de queda es una atribución de los Jefes de la Defensa Nacional**

Por otra parte, tanto Contraloría General de la República como la práctica administrativa han confirmado que, entre las potestades del Jefe de la Defensa Nacional se encuentra el instruir el *toque de* queda.

En primer término, varios de los decretos supremos que han decretado estado de catástrofe después de la reforma constitucional del año 2005 y fueron tomados de razón por Contraloría General de la República se remitieron expresamente al artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción Constitucional, que, como hemos visto, habilita al Jefe de la Defensa Nacional a instruir el *toque de queda*.

Tal es el caso, por ejemplo, de los decretos supremos N° 352, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual se declaró Estado de Catástrofe, por calamidad pública, en la Región de Atacama producto de inundaciones y aluviones; y N° 946, de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el que se decretó Estado de Catástrofe con ocasión del incendio del Valparaíso, que disponían, en sus respectivos artículos 3, que:

“*En el ejercicio de sus funciones de Jefe de la Defensa Nacional tendrá todas las facultades previstas en el artículo 7º de la ley Nº 18.415 y específicamente la prevista en el número 1 del artículo 5º de la mismo texto legal, esto es, asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada en estado de catástrofe, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad en la zona, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, especialmente, las del Intendente de la Región de Atacama, el cual fungirá como la autoridad coordinadora de la ejecución de las acciones planes y programas de rehabilitación y recuperación, tanto de los bienes como de personas afectadas por la emergencia.*”

En segundo lugar, lo mismo puede señalarse de la práctica administrativa en la materia. Ella da cuenta del entendimiento transversal según el cual los Jefes de la Defensa Nacional están atribuidos con la potestad de decretar *toque de queda*.

Así, por ejemplo, en los referidos decretos mediante los cuales se declaró Estado de Catástrofe, por calamidad pública, en la Región de Atacama producto de inundaciones y aluviones y con ocasión del incendio del Valparaíso. Asimismo, los decretos supremos N°s 152 y 153, de 2010, del Ministerio del Interior, con ocasión del terremoto, en las regiones de Maule y Bío-Bío, los respectivos Jefes de la Defensa Nacional decretaron *toque de queda* en distintas oportunidades, según se especifica a continuación:

De todos ellos, resultan especialmente pertinente destacar los últimos decretos mencionados, con ocasión del terremoto, en las regiones de Maule y Biobío, ellos ni siquiera hacían alusión a las atribuciones del artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción, sin que por eso se cuestionara la habilitación de los respectivos Jefes de la Defensa Nacional para dictar el *toque de queda*.

En consecuencia, la práctica administrativa y los precedentes de la Contraloría General de la República no dan espacio a ambigüedad alguna: la LOC de los Estados de Excepción se encuentra plenamente vigente, incluido su artículo 5, el cual confiere al Jefe de la Defensa Nacional, sin necesidad de delegación previa, la potestad para decretar el *toque de queda*, cuando este sea indispensable para resguardar el orden público y cumplir las funciones que la Constitución y la ley le encomiendan. La tesis según la cual estas instrucciones serían ilegales, o propias de un Estado de Sitio, no tiene entonces asidero alguno en nuestro ordenamiento jurídico.

## **También refrendan la vigencia de la LOC de los Estados de Excepción y lo obrado por los Jefes de la Defensa Nacional lo resuelto por los Tribunales Superiores de Justicia**

Los Tribunales Superiores de Justicia, conociendo de más de doscientos recursos de amparo cimentados sobre una tesis idéntica a la del Capítulo II de la Acusación, han rechazado ésta reiteradamente, confirmando que la LOC de los Estados de Excepción y lo obrado por los Jefes de la Defensa Nacional se ajusta a derecho.

En términos generales, las acciones de amparo señalaban que las declaraciones de toque de queda que ordenara el Jefe de Defensa Nacional respectivo constituiría un acto ilegal y arbitrario, acusando la supuesta derogación tácita del artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción, la supuesta necesidad de una delegación de potestades por parte del Presidente de la República, y la supuesta falta de proporcionalidad en las medidas tomadas.

A este respecto, corresponde recordar que la acción de amparo tiene por finalidad impedir cualquier clase de privación, perturbación o amenaza a la libertad o seguridad individual decretada o dispuesta con infracción a las normas constitucionales o legales, en beneficio de una persona determinada.

Indudablemente, el amparo del artículo 21 de la Constitución no es un medio idóneo para pretender “*declaraciones de inconstitucionalidad, ilegalidad, derogación de normativa y garantías de no repetición”*[[145]](#footnote-145), sino una acción de naturaleza cautelar, ideada para pedir un alzamiento de arresto, prisión o privación de libertad respecto de una persona determinada.

Adicionalmente, en gran parte de los casos al momento de pronunciarse la Corte respectiva había quedado ya sin efecto el Estado de Emergencia y toque de queda respectivo, perdiendo toda oportunidad la acción en cuestión.

De este modo, cierto es que no correspondía que los amparos fueran declarados admisibles. Así operaron las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones, declarando inadmisibles gran parte de los amparos deducidos, o bien rechazándolos por falta de oportunidad. **Sin embargo, ello no obstó a que los Tribunales Superiores emitieran declaraciones de fondo, pronunciándose sobre la vigencia de las normas, la legalidad del actuar de las autoridades, y la proporcionalidad de las medidas decretadas**.

Así, refiriéndose al argumento que afirma que el artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción habría sido derogado tácticamente con la dictación de la Ley N° 20.050, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia es contundente en su rechazo:

“*El ejercicio efectuado por los recurrentes en orden a estimar que la referencia del artículo 5 de la ley 18.415 dice relación con un estado de emergencia distinto al actualmente vigente no es compartido, en el entendido que desde su origen la Constitución ha regulado un único estado de emergencia, que bien ha visto morigerada ciertos requisitos de procedencia, aquello no es materia para calificar por los tribunales de justicia.* […] *De este modo, sostener que la ley 18.415 ha sido tácitamente derogada por una desinteligencia del legislador en orden a no adecuar el inciso primero del artículo 5 a la actual configuración de normas sobre la materia, según artículos 39 y siguientes de la Constitución, llevaría al contrasentido de mantener un estado de excepción sin deberes ni facultades para quien sea designado como Jefe de la Defensa Nacional en la zona afectada. En interpretación de esta Corte, la norma en análisis sigue en lo esencial, más allá de la referencia a un artículo determinado, ya modificado, al estado de excepción constitucional de emergencia cuyas variaciones en su regulación en la Constitución no tienen mayor impacto en los deberes y atribuciones regulados en el artículo 5 de la ley 18.415*”[[146]](#footnote-146).

En este mismo sentido razonó la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, en sentencia confirmada por la Excma. Corte Suprema, estableciendo que el artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción sigue en plena vigencia:

“[…] *la citada norma se refiere a las facultades que tendrá el Jefe de la Defensa Nacional durante el Estado de Emergencia, mecanismo institucional de excepción que no fue suprimido por la modificación constitucional del año 2005, sino que se mantiene vigente en el artículo 42 de nuestra Carta Fundamental, de manera que a través de una interpretación orgánica y sistemática conlleva necesariamente a comprender el verdadero sentido y alcance de la normativa en estudio y colegir que ella se encuentra en pleno vigor y en concordancia con el texto constitucional referido”*[[147]](#footnote-147).

Adicionalmente, los Tribunales Superiores dejaron establecido que el artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción faculta directamente al Jefe de la Defensa Nacional a disponer los toques de queda. Asimismo, se abocaron al argumento que señala que la restricción de libertad personal en estado de emergencia sería facultad exclusiva del Presidente de la República y acusa que dicha delegación no se habría realizado, rechazando también aquél razonamiento.

El pronunciamiento de la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel a este respecto es elocuente:

*Que el definir si un Estado de Excepción Constitucional confiere o no la posibilidad de decretar la medida de “toque de queda”, excede los contornos de cautela de la presente acción constitucional de amparo;* […] *Sin perjuicio de ello, cabe apuntar que conforme al artículo 3º del Decreto Supremo 472 de 18 de octubre del año en curso, se deja constancia que en el ejercicio de sus funciones, el Jefe de la Defensa Nacional tendrá todas las facultades previstas en el artículo 5° de la ley 18.415, específicamente la prevista en su número 1: “asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona declarada, para los efectos de velar por el orden público y de reparar y precaver el daño o peligro para la seguridad en la zona, debiendo observar las facultades administrativas de las autoridades institucionales colocadas bajo su jurisdicción, especialmente, la del Intendente de la Región de Metropolitana (sic)”. Asimismo, dentro de las atribuciones que legal y constitucionalmente han sido delegadas y entregadas por el Presidente de la República a la autoridad recurrida, se encuentra la de “controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella”, según lo dispuesto en el artículo 5º, número 4, de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, prerrogativa que debe entenderse comprendida dentro del llamado “toque de queda”, donde necesariamente el derecho de libertad ambulatoria aparece restringido, pues de otro modo, tal facultad se tornaría irrelevante;”*(énfasis agregado)[[148]](#footnote-148).

Del mismo modo razonó la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia:

*“Que en lo referente a la facultad delegable del Presidente de la República en orden a restringir las libertades de locomoción y de reunión, en razón de lo expresado en el considerando anterior, entendiendo que una de las facultades contempladas en el artículo 5 de la ley 18.415 permite controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella, lo que conlleva la facultad de limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones y advirtiendo del Decreto Supremo 477, de 20 de octubre de 2019, que el Presidente de la República dotó al Jefe de la Defensa Nacional todas las facultades previstas en el artículo 5° de la ley N° 18.415, no ha hecho sino delegar en su persona la facultad de restringir las libertades de locomoción y reunión, lo que guarda armonía en relación a la ubicación de las normas en análisis, desde que el artículo 4 de la ley 18.415 establece la facultad de delegar, para luego en el artículo inmediatamente siguiente definir deberes y atribuciones al Jefe de la Defensa Nacional, que no son más que manifestaciones concretas de la delegación permitida en el artículo anterior. De manera que no se advierte irregularidad en relación con este reclamo”*[[149]](#footnote-149).

En la misma lógica, la Excma. Corte Suprema confirmó la sentencia apelada de la Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, que estableció que:

“*Así entonces, aun cuando no se diga expresamente que se delegan facultades, del tenor del mismo, aparece con claridad que ese es su objetivo y fin, cuando el citado artículo tercero dispone que el Jefe de la Defensa Nacional tendrá todas las facultades previstas en el artículo 5° de la Ley N° 18.415*”[[150]](#footnote-150).

“*Que en este mismo orden de ideas, dentro de las atribuciones que legal y constitucionalmente han sido delegadas y entregadas por el Presidente de la República al Jefe de la Defensa Nacional recurrido, se encuentra la de “controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella”, según lo dispuesto en el artículo 5 N° 4 de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción, prerrogativa que debe entenderse comprendida dentro del llamado “toque de queda”, donde necesariamente el derecho de libertad ambulatoria aparece restringido, pues de otro modo, tal facultad sería prácticamente imposible de ejecutar. De allí entonces, que una interpretación en contrario resultaría del todo ineficaz, atendida la naturaleza del Estado de Excepción que se analiza*”[[151]](#footnote-151).

En sintonía con las sentencias recién citadas, es conclusivo el pronunciamiento de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, también confirmado sin reserva ni declaración alguna por la Excma. Corte Suprema:

“*Que por consiguiente no existe un actuar arbitrario por parte del Jefe de Defensa de la Región Metropolitana al establecer la restricción de tránsito, ni tampoco un actuar ilegal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Política de la República en relación a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 18.415, Ley Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción que establece los deberes y atribuciones del Jefe de la Defensa Nacional durante el estado de emergencia y específicamente en el numeral 4° de dicha disposición “controlar la entrada y salida de la zona declarada en estado de emergencia y el tránsito en ella*”[[152]](#footnote-152).

Finalmente, los Tribunales Superiores también abordaron los cuestionamientos a la proporcionalidad de las medidas adoptadas. Sobre este punto, destacamos los razonamientos de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia y de Talca, respectivamente:

“*Que finalmente, en relación a la proporcionalidad de la medida, conforme los fundamentos expresados en el Decreto Supremo 477 de 20 de octubre de 2019, en particular los graves sucesos acontecidos en la ciudad en la noche anterior, en cuanto saqueos y graves destrozos tanto en establecimientos de comercio como reparticiones que prestan servicios públicos, siendo razonable la restricción de circulación durante horas de la noche para frustrar el actuar de personas que amparadas en la oscuridad efectuaron incendios, levantaron barricadas, efectuaron robos y saqueos, la medida dispuesta guarda plena proporción, destacándose el hecho que no se prolongó más allá de cinco noches, no habiéndose impuesto durante las últimas tres jornadas.* ***No parece correcto valorar la proporcionalidad de la medida a la luz de los resultados, desde que su adopción merece un análisis previo conforme a proyecciones según el avance de la jornada. La valoración de escasez de detenidos no necesariamente implica desproporción de una medida, sino bien puede ser valorada como exitosa al cumplir lo pretendido en orden a propender a la paz social y seguridad de los integrantes de la población***” (énfasis agregado)[[153]](#footnote-153).

“*Que de lo antes relacionado se infiere claramente que los requisitos de conexión racional y proporcionalidad han sido plenamente satisfecho con la decisión adoptada por el Jefe de la Defensa Nacional recurrido, más aún, cuando varios de los episodios enunciados en el motivo anterior, acaecieron justamente en el horario de vigencia del precitado “toque de queda”, circunstancia que demuestra que el uso de medios de menor intensidad, como lo pretenden los recurrentes, podría haber generado una alteración mayor del orden público, con el consiguiente agravamiento de los derechos individuales de la población y de sus bienes*”[[154]](#footnote-154).

En conclusión, revisados los mismos argumentos sobre los que versa la Acusación que se me formula, los Tribunales Superiores de Justicia desecharon éstos, de forma consistente, aún en circunstancias de que un pronunciamiento de fondo no era necesario para la resolución de las acciones, según hemos señalado.

## **No es efectivo que en mi calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública haya ejercido o autorizado el ejercicio de atribuciones distintas de las que contempla el Estado de Emergencia**

## **No es efectivo que se hayan producido detenciones por contravención del “toque de queda”**

Señalan los acusadores, que los Jefes de la Defensa Nacional habrían ordenado o facultado a realizar detenciones ilegales a quienes fueran sorprendidos en infracción del *toque de queda*. Sin embargo, y al margen de todo lo señalado en relación a la legalidad del *toque de queda*, cabe precisar el procedimiento que aplicado a quienes fueron sorprendidos en infracción de dichas instrucciones. Como se verá, no es efectivo que se hayan producido detenciones en virtud de infracciones al *toque de queda*.

Por el contrario, el procedimiento adoptado frente a esas infracciones se sujetó plenamente a derecho. Concretamente, tratándose dichas infracciones de faltas penales no calificadas lo que corresponde es aplicar el procedimiento de citación, en virtud del cual el infractor debe ser trasladado a la unidad policial más cercana, donde se le comprobará su identidad y domicilio, y se comunicarán los hechos al fiscal de turno. Así corresponde, de acuerdo los artículos 129 del Código Procesal Penal y 495 N°1 del Código Penal, ya que nos encontramos frente a una hipótesis de falta flagrante. Una vez realizados dichas actuaciones, si el *toque de queda* sigue vigente, al infractor se le debe mantener, en dicha calidad, en la unidad policial hasta el término del horario de prohibición salvo que el fiscal de turno determine lo contrario. Lo contrario implicaría transformar el *toque de queda* en una instrucción imposible de ser aplicada y operativizada, en la práctica.

## **Las imputaciones consistentes en que se habría autorizado detenciones ilegales, detenciones en lugares no autorizados y limitaciones al acceso al registro de detenidos carecen de fundamento y no son imputables al Ministro del Interior y Seguridad Pública.**

* **En relación a las supuestas detenciones ilegales**

Como se explicó en la letra anterior, en el caso de infracciones al *toque de queda,* carece de sentido sostener que estamos frente a casos de detenciones ilegales, como sostienen los acusadores. Los Jefes de la Defensa Nacional dictaron dichas instrucciones en ejercicio de las atribuciones otorgadas en el Decreto de Estado de Emergencia, de conformidad a la Constitución y la LOC de Estados de Excepción.

Los acusadores, acompañan cifras del INDH sobre personas privadas de libertad, sosteniendo que se habría actuado fuera del ordenamiento jurídico y con ello atribuir responsabilidades a este ex Ministro de Estado. Sin embargo, dichas cifras, de acuerdo a lo informado por el propio INDH con fecha 26 de octubre, [[155]](#footnote-155) corresponden a **todos** los privados de libertad en el contexto de los hechos que propiciaron la declaración de los Estados de Emergencia.

No obstante, cabe tener presente que entre el 19 y el 28 de octubre, se contabilizaron un número de 7.166 personas detenidas en flagrancia, en conformidad a lo que señala el artículo 129 del Código Procesal Penal, cuyo inciso primero dice:

*“Cualquier persona podrá detener a quien sorprendiere en delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al aprehendido a la policía, al ministerio público o a la autoridad judicial más próxima.”*

Tampoco, se puede olvidar, que tanto el Ministerio Público como los Tribunales de Justicia tienen una participación activa frente a las denuncias de detenciones y privaciones de libertad, y son los órganos competentes para investigar y determinar la legalidad o ilegalidad de las mismas.

En relación a esta imputación, son relevantes las cifras comunicadas recientemente por el Defensor Nacional, señor Andrés Mankhe, que revelan que la institucionalidad funcionó adecuadamente y corrigió de forma oportuna cualquier irregularidad que pudiera haberse presentado. Vuelvo a repetir, en mi calidad de ministro del Interior y Seguridad Pública nunca formulé alguna instrucción que importara una mayor restricción de derechos ni afectación de los mismos.

Según los datos entregados por la Defensoría Penal Pública, entre el 20 y el 28 de octubre pasado, se realizaron 10.571 controles de detención, y se solicitó la ilegalidad de la misma en 31,1% de los casos, declarándose la ilegalidad de la detención en un 7,6% de los casos. “*Se trata de cifras que están muy por sobre el comportamiento habitual, ya que en el mismo período del año pasado sólo en el 9,4 por ciento de las audiencias se alegó la ilegalidad de las detenciones y sólo fue decretada en el 2 por ciento de los casos*”, indicó el Defensor Nacional.[[156]](#footnote-156)

Esta información es particularmente relevante en cuanto informa sobre el funcionamiento de la institucionalidad y de las posibilidades que todo detenido fuera asistido por un abogado y representado en la audiencia de control de detención. Es útil destacar que la decisión sobre la libertad o la formalización de un detenido es resorte del Ministerio Público, y no del Ministro del Interior y Seguridad Pública.

* **En relación a las supuestas detenciones en lugares no autorizados.**

Una vez más, los acusadores realizan imputaciones injustificadas, señalando que “*se han detectado detenciones en lugares no habilitados para tal efecto, como recintos privados y estaciones de transporte público*”.[[157]](#footnote-157) Sin embargo, dicha determinación corresponde al ámbito de competencia de los Tribunales de Justicia, y mientras ello no ocurre se trata de hechos no comprobados.

Los ejemplo citados por los acusadores se refieren a la denuncia de un supuesto centro de detención en la comisaría que se encuentra al interior de la estación de Metro Baquedano, y a las declaraciones formuladas a través de redes sociales de un grupo de jóvenes perteneciente a un partido político. Como se ha expresado previamente, la mera referencia a dichos casos no puede ser considerado una prueba de la efectividad de los hechos en los que se funda esta imputación.

En definitiva, los hechos en los que se basan las imputaciones realizadas por los acusadores, han sido desmentidos por los propios jueces y funcionarios del INDH.

* **En relación a las supuestas limitaciones al registro de detenidos**

Se trata de otro hecho respecto del cual este ex Ministro de Estado carece de toda participación. Como se ha indicado, las instrucciones que se dispusieron fueron de total colaboración y transparencia con las instituciones que solicitaran información.

Cabe señalar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la página de la Subsecretaría de Derechos Humanos ha habilitado una página informativa denominada “Información sobre la situación del país desde el 19 de octubre”, que contiene información pormenorizada, compilada por diversas instituciones del Estado, respecto a reportes de Carabineros, fallecidos en el contexto del Estado de Emergencia, Querellas presentadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desglose de Querellas, controles de detención por región, reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros. Su link es: <http://ddhh.minjusticia.gob.cl/informacion-sobre-la-situacion-del-pais-desde-el-19-de-octubre>.

## **Las citas que usa la Acusación no dan cuenta de un desprestigio que sea responsabilidad de este acusado**

Es un hecho indiscutible que los graves hechos de violencia que han ocurrido en diversas ciudades de Chile durante la última semana han afectado el prestigio de Chile en el exterior. Sin embargo, resulta artificioso y completamente infundado intentar vincular esto con supuestas omisiones que serían imputables a este ex Ministro de Estado.

En efecto, como se podrá apreciar a continuación, todos los antecedentes invocados por la parte acusadora en relación a este punto, de ninguna forma sirven para acreditar lo que alegan. Por el contrario, reflejan la falsedad absoluta del argumento y dejan en evidencia que lo que realmente ha afectado el prestigio de esta República son los graves hechos de violencia que se han podido observar durante las últimas semanas.

En primer lugar, la Acusación cita noticias publicadas por medios de comunicación que, lejos de lo señalado por la parte acusadora, no se centran en hechos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, sino que en los actos vandálicos.

Además, de manera completamente antojadiza, la parte acusadora intenta vincular la no asistencia del Presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la cumbre APEC 2019 con las actuaciones y omisiones de este ex Ministro de Estado.

Sin duda que esta inasistencia ocurre en un contexto de constantes manifestaciones, pero de eso no se sigue que su inasistencia sea responsabilidad mía ni que dicha inasistencia impacte en el prestigio de Chile. De hecho, no hay fuente alguna que vincule esta inasistencia con el deterioro de la imagen externa de este país (incluyendo la fuente citada por los acusadores).[[158]](#footnote-158) Más aún, la contraria jamás menciona que, si bien el Presidente Putin no iba a asistir, éste enviaría en su reemplazo al Primer Ministro de ese país, Dmitri Medvédev.[[159]](#footnote-159)

Incluso si es que se pudiera comprobar que efectivamente el deterioro de la imagen externa de Chile produjo su inasistencia, aun así –como ya se señaló anteriormente- la real causa de ese deterioro no son las acciones u omisiones de este ex Ministro de Estado, sino que los graves hechos de violencia en el que se ha visto envuelto este país durante semanas.

## **El comunicado del Sistema de Naciones Unidas de Chile condena los hechos de violencia en general, no aquellos provocados por Carabineros. Además, lamenta los heridos y daños materiales producidos por los actos vandálicos**

La parte acusadora procede a citar un comunicado del Sistema de Naciones Unidas de Chile, de fecha 19 de octubre de 2019. En este comunicado, el organismo no hace otra cosa que condenar los hechos de violencia en general, sin mencionar la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

A continuación, el comunicado señala que lamenta el alto número de heridos, **incluyendo a aquellos miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad**, lo que devela que claramente la condena está dirigida a todos los actos de violencia ocurridos. Confirma esto el hecho de que, en el mismo párrafo, se lamentan los daños y cuantiosas pérdidas materiales causadas, las cuales no han sido provocadas por el actuar de Carabineros de Chile.[[160]](#footnote-160)

El comunicado señala textualmente:

“*El Sistema de las Naciones Unidas en Chile expresa su profunda preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en Santiago los días 18 y 19 de octubre. Lamentamos en particular el alto número de personas, incluyendo menores de edad, y miembros de las fuerzas del orden que resultaron heridas durante estos incidentes, así como los daños y las cuantiosas pérdidas materiales causadas.*

*En relación con la declaración de estado de emergencia decretado por el gobierno de Chile, el Sistema de Naciones Unidas recuerda que las disposiciones que conlleva deben ser aplicadas bajo el más estricto apego al estado de derecho y a las normas internacionales de derechos humanos a las que Chile ha adherido.*

*El Sistema de Naciones Unidas hace asimismo un llamado a todos los sectores de la sociedad chilena a reducir tensiones, rechazar todo acto de violencia y buscar soluciones pacíficas a este desafío que enfrenta el país”.*

## **La declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da cuenta de los esfuerzos del Gobierno por evitar vulneraciones de derechos y sujetarse a los estándares internacionales de derechos humanos**

Luego, los acusadores citan un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 23 de octubre del presente año, el cual supuestamente serviría para acreditar que graves vulneraciones de derechos, cometidas por agentes del Estado, así como las decisiones de este ex Ministro de Estado, habrían afectado el prestigio de la República en el exterior.

Pues bien, absolutamente nada de lo que dice este comunicado sirve para fundar una acusación de esa gravedad. Por el contrario, éste reconoce expresamente que el Estado ha adoptado las medidas necesarias para que todos los hechos de violencia sean investigados debidamente. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“*[i]nsta al Estado a* ***seguir adoptando*** *las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables*”.[[161]](#footnote-161)

En razón de lo expuesto, debe descartarse absolutamente que este Ministro de Estado haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación o haya infringido garantía constitucional alguna.

**IV. Conclusiones**

Conforme se ha expuesto a lo largo de esta contestación, ha quedado demostrado que no he infringido la Constitución ni he dejado de aplicar las normas que estiman vulneradas y que, en el evento de no acogerse la cuestión previa, esta Acusación debe ser rechazada en todas su partes, por cuanto:

1.- Los acusadores pretenden formular un juicio político o de mérito, vulnerando la naturaleza jurídico-política de la acusación constitucional.

2.- No existe un solo hecho en que haya incurrido de manera personal, estructurándose la Acusación a través de la imputación de hechos de terceros, por hechos que actualmente son materia de investigación.

3.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública carece de facultades para impartir instrucciones en materias operativas de Carabineros de Chile.

4.- El Ministro del Interior y Seguridad Pública carece de atribuciones para decretar *toques de queda*.

5.- Mi desempeño como Ministro del Interior y Seguridad Pública se ha ajustó siempre a la Constitución y a las leyes. Así, no se verifica en mi actuación una infracción a la Constitución y a las normas que aluden los acusadores.

6.- Los acusadores no logran acreditar la infracción de deberes y la responsabilidad que pretenden y su argumentación desdice de la gravedad de las imputaciones que realizan.

7.- Los acusadores no dan cuenta de cuál sería la relación causal entre las omisiones que, equivocadamente, se imputan y los graves hechos en que fundan la Acusación.

8.- Los acusadores tampoco dan cuenta de ninguna acción u omisión de este ex Ministro de Estado que tuviera como efecto vulneraciones a los derechos fundamentales o el incumplimiento de normas jurídicas aplicables.

9.- No dejé sin aplicación los artículos 1.1, 4.1, 5, 7, 8 y 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 2, 3 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 3 letra b) de la ley Nº 20.502, en relación con los artículos 1 Nº1 y 2 del DS N° 1.364.

10.- No infringí la Constitución ni las leyes en forma alguna por acción ni omisión, ni tampoco vulneré el derecho a la vida, integridad física o psíquica, debido proceso legal, inviolabilidad del hogar y de la libertad personal de nuestros compatriotas.

11.- Las eventuales irregularidades cometidas por miembros de Carabineros o de otra institución deben ser juzgadas en su mérito por los órganos competentes, como corresponde en un Estado de Derecho.

12.- Debe descartarse completamente que este Ministro de Estado haya infringido la Constitución y las leyes, o haya dejado estas sin ejecución al omitir las medidas necesarias para evitar vulneraciones a los derechos humanos.

13.- He actuado con estricto apego a la Constitución y las leyes, en el marco de mis competencias, conforme se ha descrito en esta presentación.

**Por tanto,** en mérito de lo expuesto, argumentos de hecho y de derecho, y de las normas pertinentes citadas,

**Solicito a esta H. Cámara:** en subsidio de lo solicitado en lo principal de este escrito, tener por presentada mi defensa de acuerdo a lo señalado en el Título Cuarto de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y rechazar en todas sus partes la acusación constitucional que se ha dirigido en contra de este ex Ministro de Estado.

**En el Segundo Otrosí: acompaña documentos**

Sírvase esta H. Corporación, tener por acompañados los siguientes documentos:

**1.-** Informe en derecho “Acusación Constitucional Contra el Exministro del Interior y Seguridad Pública, Don Andrés Chadwick Piñera”, suscrito por el Profesor Arturo Fermandois Vöhringer, de noviembre de 2019.

2.- Legal brief on questions of the existence of the context elements of crimes against humanity with regard to the events in chile between 17 and 18 october as described in the acusacion constitucional of 20 october 2019, Prof Dr. Dr. HC Kai Ambos, de fecha 18 de noviembre de 2019

3- Traducción i-433-19 de Dictamen Relativo a la existencia de elementos en el factor contexto de Delitos de Lesa Humanidad en relación con los acontecimientos ocurridos en Chile entre el 17 y el 28 de octubre de 2019, que se describen en la Acusación Constitucional de 30 de octubre de 2019, del Prof. Dr. Dr.h.c.Kai Ambos.

**3.- Archivador con anexos: ANEXOS**

1. Acuerdo de cumplimiento de recomendaciones Caso N° 12.880, “Edmundo Alex Lemún Saavedra Vs. Chile”.
2. Decreto Supremo N° 1.364, publicado el 04 de diciembre de 2018, que establece disposiciones relativas al uso de la fuerza.
3. Plan de acción para Carabineros de Chile, del 10 de diciembre de 2018.
4. Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad Pública del Senado.
5. Publicación en el Diario Oficial del 04 de marzo de 2019, de la Circular N° 1.832, sobre uso de fuerza y de la Orden General N° 2.635, sobre mantención de orden público.
6. Orden General N° 2640, que eleva el Departamento de DDHH a Dirección, del 29 de marzo de 2019.
7. Acuerdo de mesa técnica entre Carabineros de Chile, la Subsecretaría del Interior, la Subsecretaría de DDHH, el INDH y la Defensoría de los Derechos de la Niñez, concluida el 06 de junio de 2019.
8. Informe del primer semestre 2019 sobre uso de la fuerza y episodios violentos de Carabineros de Chile.
9. Orden General N° 2675, programa de capacitación en DDHH y técnicas en intervención policial, del 29 de julio de 2019.
10. Planilla que da cuenta del personal capacitado en DDHH durante 2019, según Alta Repartición.
11. Oficios remitidos por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a distintas entidades durante el estado de excepción constitucional: Oficio Nº 32.816 de 22 de octubre de 2019 al Director del INDH; Oficio Nº 33.100 de 23 de octubre de 2019 al General Director de Carabineros; Oficio Nº 33.101 de 23 de octubre de 2019 al Director General de la PDI; Oficio Nº 33.102 de 23 de octubre de 2019 al General Director de Carabineros; Oficio Nº 33.103 de 23 de octubre de 2019 al Director General de la PDI; Oficio Nº 33.104 de 23 de octubre de 2019 al General Director de Carabineros; Oficio Nº 33.237 de 25 de octubre de 2019 al General Director de Carabineros; Oficio Nº 33.238 de 26 de octubre de 2019 al General Director de Carabineros; Oficio Nº 33.384 de 28 de octubre de 2019 al Director del INDH.
12. Informe consolidado sobre daños registrados en regiones del país entre el 19 y el 22 de octubre de 2019.
13. Decretos de Estados de Emergencia.

**POR TANTO**, Ruego a S.S. Excmo. tenerlos por acompañados.

**En el Tercer Otrosí: patrocinio y poder**

Sírvase esta H. Cámara tener presente que designo como abogado patrocinante y confiero poder a don Luis Hermosilla Osorio, habilitado para el ejercicio de la profesión, y domiciliado para estos efectos en Alonso de Córdova 3788, oficina 41-A, quien firma en señal de aceptación. Esta designacion también consta en mandato judicial otorgado con fecha 7 de noviembre de 2019, ante la 26º Notaria de Santiago, anotado bajo el repertorio 7684-2019.

ANDRES CHADWICK PIÑERA. LUIS HERMOSILLA OSORIO

Contenido

[I. ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES PREVIAS. 2](#_Toc25145216)

[1.1 Naturaleza de la Acusación Constitucional en Nuestro Ordenamiento Jurídico y en la práctica de esta H. Corporación. 3](#_Toc25145217)

[1.2 Estado de Excepción Constitucional como Herramienta Para Resguardar el Estado de Derecho. 6](#_Toc25145218)

[1.3 Antecedentes de hecho que llevaron a S.E. el Presidente de la República a decretar el Estado de Emergencia en diversas provincias del país 12](#_Toc25145219)

[(1) Hechos previos al día viernes 18 de octubre 12](#_Toc25145220)

[(2) Hechos ocurridos el día viernes 18 de octubre y la madrugada del día sábado 19 de octubre 15](#_Toc25145221)

[(3) Declaración de Estado de Emergencia. 18](#_Toc25145227)

[(4) Hechos ocurridos durante la jornada del día sábado 19 de octubre 20](#_Toc25145228)

[(5) Balance de los daños sufridos por el país 24](#_Toc25145229)

[1.4 La Función del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 27](#_Toc25145230)

[(1) Acuerdo Transversal sobre Modernización Institucional de Carabineros de Chile. 29](#_Toc25145231)

[(2) Preocupación y acciones en materia de Derechos Humanos 33](#_Toc25145233)

[II.- Formula Cuestiones Previas de Admisibilidad 35](#_Toc25145234)

[1.1 Primera Cuestión Previa de Admisibilidad: la Acusación contraviene el debido proceso 36](#_Toc25145235)

[(1) El debido proceso resulta plenamente aplicable a la acusación constitucional 37](#_Toc25145236)

[a) La Constitución ordena respetar el debido proceso siempre que se ejerzan facultades jurisdiccionales 37](#_Toc25145237)

[b) La acusación constitucional supone el ejercicio de una función jurisdiccional por parte del Congreso Nacional 37](#_Toc25145238)

[c) La acusación constitucional, en cuanto supone el ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Congreso Nacional, debe respetar la garantía del debido proceso 38](#_Toc25145239)

[(2) La Acusación se funda en imputaciones genéricas y en hechos no acreditados 39](#_Toc25145244)

[**a)** **Alegaciones contenidas en el Capítulo Primero de la Acusación** 39](#_Toc25145245)

[1.2 Segunda Cuestión Previa de Admisibilidad: La Acusación se funda en hechos de terceros que son arbitrariamente imputados a este Acusado 43](#_Toc25145246)

[(1) La acusación constitucional sólo procede por actos u omisiones en que la autoridad acusada sea personal y directamente responsable. 43](#_Toc25145247)

[**a)** **Los precedentes de esta H. Corporación y la doctrina más autorizada han confirmado que la acusación constitucional sólo procede por hechos personal y directamente imputables al acusado** 44](#_Toc25145248)

[**b)** **Por lo demás, la responsabilidad personal es una exigencia mínima de justicia al ejercer el *ius puniendi* del Estado** 48](#_Toc25145249)

[(2) La Acusación se funda en hechos de terceros y no en actos personales del acusado. 48](#_Toc25145250)

[**a)** **El Capítulo Primero de la Acusación imputa a este ex Ministro de Estado hechos de terceros que escapan el ámbito de su responsabilidad** 48](#_Toc25145251)

[**i)** **Hechos de terceros que se imputan a este ex Ministro de Estado en el Capítulo Primero de la Acusación** 48](#_Toc25145252)

[**ii)** **Ámbito de responsabilidad que le corresponde al Ministro del Interior y Seguridad Pública** 50](#_Toc25145253)

[**iii)** **La historia fidedigna del establecimiento de la Ley N° 20.502 confirma que Carabineros de Chile está sujeto normativamente a la autoridad política, pero tiene independencia operativa.** 52](#_Toc25145254)

[**iv)** **En razón de lo expuesto, resulta incontestable que las imputaciones realizadas en el Capítulo Primero corresponden a hechos de terceros y no existe fundamento jurídico para hacer responsable a este ex Ministro de Estado.** 54](#_Toc25145255)

[1.3 Tercera Cuestión Previa de Admisibilidad: La Acusación pretende cuestionar el mérito de la declaración del Estado de Emergencia, cuestión que no es atribución de esta H. Corporación. 55](#_Toc25145256)

[(1) La narración de los hechos que hace la Acusación revela que ésta persigue criticar las decisiones políticas tomadas por el Presidente de la República y sus Ministros. 56](#_Toc25145257)

[(2) La Constitución no permite revisar el mérito de las decisiones políticas adoptadas por el Presidente de la República y sus Ministros mediante una acusación constitucional 57](#_Toc25145258)

[(3) Permitir la revisión del Estado de Emergencia por parte de un órgano como el Congreso Nacional resulta contrario a la Constitución, y más aún, pondría en grave riesgo la seguridad nacional y el orden público. 58](#_Toc25145259)

[(4) La declaración de Estado de Emergencia fue oportuna y adecuada, permitió resguardar la seguridad nacional y evitó graves daños a infraestructura estratégica. 59](#_Toc25145260)

[En el Primer Otrosí: contesta Acusación Constitucional 62](#_Toc25145261)

[I. Contestación al Capítulo Primero de la Acusación 62](#_Toc25145262)

[1.1 Introducción 62](#_Toc25145263)

[1.2 Imputaciones formuladas en el Capítulo Primero de la Acusación 69](#_Toc25145264)

[(1) Los hechos en que se funda el Capítulo Primero de la Acusación son de la máxima gravedad, sin embargo, los acusadores los tratan de forma superficial 70](#_Toc25145265)

[**a)** **Los acusadores formulan imputaciones gravísimas fundadas en hechos que los propios acusadores reconocen como presuntos o no acreditados** 70](#_Toc25145266)

[**b)** **Los acusadores interpretan los hechos de forma antojadiza** 71](#_Toc25145267)

[**c)** **Los acusadores presentan como fundamento de la Acusación antecedentes que carecen del mínimo de rigurosidad** 73](#_Toc25145268)

[1.3 El Capítulo Primero de la Acusación parte de una premisa equivocada: la violación sistemática de los derechos fundamentales durante la vigencia del Estado de Emergencia 76](#_Toc25145269)

[1.4 El Ministerio del Interior y Seguridad Pública dio pleno cumplimiento a sus deberes legales durante la vigencia del Estado de Emergencia y adoptó todas las medidas necesarias para evitar vulneraciones de derechos 82](#_Toc25145270)

[(1) Marco jurídico aplicable al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su función de velar por el orden público y en su relación con Carabineros de Chile 82](#_Toc25145271)

[**a)** **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública adoptó todas las medidas que le permitían sus competencias para prevenir cualquier vulneración de derechos fundamentales** 83](#_Toc25145272)

[**b)** **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública adoptó todas las medidas que le permitían sus competencias para prevenir cualquier vulneración de derechos fundamentales** 85](#_Toc25145273)

[**c)** **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública tomó una serie de medidas para facilitar la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos.** 86](#_Toc25145274)

[**d)** **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública facilitó la labor de los medios de comunicación.** 86](#_Toc25145275)

[**e)** **Frente a las denuncias y querellas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública hizo todo lo que estaba en su poder para asegurar el rápido y exitoso esclarecimiento de los hechos.** 87](#_Toc25145276)

[(2) El Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplió cabalmente con todas las obligaciones contenidas en el DS N° 1.364 como también con el deber de fiscalizar el cumplimiento de la Orden General N° 2.635 de Carabineros de Chile. 88](#_Toc25145277)

[**a)** **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplió cabalmente con todas las obligaciones contenidas en el DS N° 1.364.** 88](#_Toc25145278)

[**b)** **El Ministerio del Interior y Seguridad Pública cumplió cabalmente con el deber de fiscalizar el cumplimiento de la Orden General N° 2635 de Carabineros de Chile.** 91](#_Toc25145279)

[1.5 El Estado de Chile cumplió debidamente todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con ocasión del Estado de Emergencia 92](#_Toc25145280)

[1.6 La declaración de Estado de Emergencia se realizó en uno de los casos previstos por la Convención Americana de Derechos Humanos 92](#_Toc25145281)

[(1) Durante el Estado de Emergencia, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública veló por el cumplimiento de todas las obligaciones internacionales 93](#_Toc25145282)

[(2) Durante el Estado de Emergencia, se realizaron manifestaciones y reuniones, limitándose los derechos de locomoción y reunión a lo estrictamente necesario para restablecer el orden y evitar más ataques graves a personas y propiedades públicas y privadas 94](#_Toc25145283)

[I. Contestación al Capítulo Segundo de la Acusación 98](#_Toc25145284)

[1.1 Imputaciones formuladas en el Capítulo Segundo de la Acusación 98](#_Toc25145285)

[1.2 Marco normativo aplicable al Estado de Emergencia 98](#_Toc25145286)

[1.3 La LOC de los Estados de Excepción se encuentra plenamente vigente y es coherente con la regulación constitucional del Estado de Emergencia 100](#_Toc25145287)

[(1) Sentido y alcance de las atribuciones contenidas en el artículo 5 de la LOC de los Estados de Excepción 102](#_Toc25145288)

[(2) Lo resuelto por la Contraloría General de la Republica y la práctica administrativa confirman la vigencia de la LOC de los Estados de Excepción y la legalidad de los toque de queda 104](#_Toc25145289)

[1.4 El artículo tercero de los decretos de estado de emergencia establecieron que el Jefe de la Defensa Nacional tendría todas las atribuciones previstas en el artículo 5° de la LOC de Estados de Excepción 108](#_Toc25145290)

[1.5 Las medidas adoptadas por los Jefes de la Defensa Nacional satisfacen plenamente el principio de “mínima restricción de derechos” 109](#_Toc25145291)

[1.6 Los Decretos de Estado de Emergencia y las actuaciones de los Jefes de la Defensa Nacional se ajustaron plenamente a derecho 111](#_Toc25145292)

[(1) Contraloría General de la República y la práctica administrativa confirman que la instrucción del toque de queda es una atribución de los Jefes de la Defensa Nacional 111](#_Toc25145293)

[(2) También refrendan la vigencia de la LOC de los Estados de Excepción y lo obrado por los Jefes de la Defensa Nacional lo resuelto por los Tribunales Superiores de Justicia 113](#_Toc25145294)

[1.7 No es efectivo que en mi calidad de Ministro del Interior y Seguridad Pública haya ejercido o autorizado el ejercicio de atribuciones distintas de las que contempla el Estado de Emergencia 118](#_Toc25145295)

[(1) No es efectivo que se hayan producido detenciones por contravención del “toque de queda” 118](#_Toc25145296)

[(2) Las imputaciones consistentes en que se habría autorizado detenciones ilegales, detenciones en lugares no autorizados y limitaciones al acceso al registro de detenidos carecen de fundamento y no son imputables al Ministro del Interior y Seguridad Pública. 119](#_Toc25145297)

[1.8 Las citas que usa la Acusación no dan cuenta de un desprestigio que sea responsabilidad de este acusado 121](#_Toc25145298)

[(1) El comunicado del Sistema de Naciones Unidas de Chile condena los hechos de violencia en general, no aquellos provocados por Carabineros. Además, lamenta los heridos y daños materiales producidos por los actos vandálicos 122](#_Toc25145299)

[(2) La declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da cuenta de los esfuerzos del Gobierno por evitar vulneraciones de derechos y sujetarse a los estándares internacionales de derechos humanos 123](#_Toc25145300)

1. # La referencia en la acusación es a la Ley Nº20.052, que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos, sin perjuicio, entendemos que se refiere a la Ley 20.502.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Bronfmann, Alan, y otros. 2013. Derecho Parlamentario Chileno. Editorial Legal Publishing, Santiago, Chile, p. 325. [↑](#footnote-ref-2)
3. Martínez, Gutenberg, y otro. 2004. Acusaciones Constitucionales, análisis de un caso. Una visión parlamentaria. Editorial Jurídica, Santiago, Chile, p. 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. Atria Lemaitre, Fernando, Extracto de la acusación constitucional contra el ministro Rodrigo Hinzpeter, presentada en abril de 2012, (p. 1), en texto “Observaciones sobre la acusación constitucional presentada en contra de la Ministra de Salud, Sra. Carmen Castillo Taucher”. [↑](#footnote-ref-4)
5. Acusación, p. 3. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ver Anexo 13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Acusación, p. 33. [↑](#footnote-ref-7)
8. Acusación, p. 34. [↑](#footnote-ref-8)
9. Cámara de Diputados, Legislatura 367, Sesión 94, Miércoles 23 de Octubre de 2019. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bermúdez, Jorge. 2014. Derecho Administrativo General. Legal Publishing, Santiago, Chile, 3° Ed., p. 100. [↑](#footnote-ref-10)
11. Bermúdez, Jorge. 2014. Derecho Administrativo General. Legal Publishing, Santiago, Chile, 3° Ed., pp. 95-96. [↑](#footnote-ref-11)
12. Artículo 44, que señala: “*Una ley orgánica constitucional regulará los estados de excepción, así como su declaración y la aplicación de las medidas legales y administrativas que procediera adoptar bajo aquéllos. Dicha ley contemplará lo estrictamente necesario para el pronto restablecimiento de la normalidad constitucional y no podrá afectar las competencias y el funcionamiento de los órganos constitucionales ni los derechos e inmunidades de sus respectivos titulares.*

    *Las medidas que se adopten durante los estados de excepción no podrán, bajo ninguna circunstancia, prolongarse más allá de la vigencia de los mismos.”.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Ver: <http://www.paneldeexpertostarifas.cl/>. [↑](#footnote-ref-13)
14. Acusación, p. 7. [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/escolares-protagonizan-segundo-dia-consecutivo-de-evasiones-masivas-y/2019-10-15/162835.html> [↑](#footnote-ref-15)
16. Acusación, pp. 7-8. [↑](#footnote-ref-16)
17. Acusación, p. 8. [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/transportes/metro/gobierno-invoca-ley-de-seguridad-del-estado-por-incidentes-en-el-metro/2019-10-18/193507.html> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-decreta-estado-de-emergencia-en-las-provincias-de-santiago-y-chacabuco-y-en-las-comunas-de-san-bernardo-y-puente-alto-para-normalizar-el-orden-publico/> [↑](#footnote-ref-19)
20. Anexo 12. Informe consolidado sobre daños registrados en regiones del país entre el 19 y el 22 de octubre de 2019. [↑](#footnote-ref-20)
21. Ver Anexo 13. [↑](#footnote-ref-21)
22. Punto de Prensa, Ministro del Interior y Seguridad Pública, Domingo 20 de Octubre, Salón de Comunicaciones, Palacio La Moneda [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://ellibero.cl/alerta/presidente-pinera-anuncia-fin-de-estado-de-excepcion-y-cambio-de-gabinete/> [↑](#footnote-ref-23)
24. Acusación, p. 1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Acusación, p. 20. [↑](#footnote-ref-25)
26. Contraloría General de la República, Dictamen N° 62.721-2009. [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://www.senado.cl/conozca-detalles-de-hoja-de-ruta-legislativa-para-la-modernizacion/senado/2019-01-25/152945.html> [↑](#footnote-ref-27)
28. Ver Anexo 4, Protocolo de Acuerdo Hoja de Ruta legislativa para la Modernización Policial. [↑](#footnote-ref-28)
29. H. Senado, Diario de Sesiones, Legislatura 367, Sesión 55, pp. 80 y ss. [↑](#footnote-ref-29)
30. Acusación, p. 1. Cabe notar que en la página 29 de la Acusación al atribuir la responsabilidad, se omite la referencia a la desproporcionalidad de la fuerza. [↑](#footnote-ref-30)
31. Acusación, pp. 1, 13. [↑](#footnote-ref-31)
32. García, Gonzalo y Contreras, Pablo, *El derecho a la tutela judicial y al debido proceso en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno*, Estudios Constitucionales N° 2, 2013, p. 257. [↑](#footnote-ref-32)
33. Nogueira, Humberto, *La constitucionalización del proceso: El acceso a la jurisdicción, tutela judicial efectiva o debido proceso*, en *La constitucionalización del Derecho chileno*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2003, p. 170. [↑](#footnote-ref-33)
34. Martinez, Gutenberg y Rivero, Renee, *Acusaciones Constitucionales. Análisis de un caso. Una visión parlamentaria*, Editorial Juridica de Chile, Santiago, 2004, p. 62. [↑](#footnote-ref-34)
35. Tribunal Constitucional, Sentencia Rol N° 616, Considerando Vigésimo Quinto. [↑](#footnote-ref-35)
36. Acusación, p. 3. [↑](#footnote-ref-36)
37. Nogueira, Humberto, *Consideraciones sobre la acusación constitucional en la Carta Fundamental vigente*, en *Congreso Nacional: Libro Homenaje al Profesor Alejandro Silva Bascuñán*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2013, p. 245. Énfasis agregado [↑](#footnote-ref-37)
38. Acusación, p. 28. [↑](#footnote-ref-38)
39. Acusación, pp. 16-20. [↑](#footnote-ref-39)
40. Acusación, p. 16. Dicha declaración sostiene: “*2. Insistimos en que tales acciones de ser ciertas…*” [↑](#footnote-ref-40)
41. Acusación, p. 15. [↑](#footnote-ref-41)
42. Maier, Julio, *Derecho procesal penal argentino (tomo 1b): Fundamentos*, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, p. 252. [↑](#footnote-ref-42)
43. Acusación, p. 28. [↑](#footnote-ref-43)
44. Acusación, p. 10. [↑](#footnote-ref-44)
45. Disponible en: <http://deptoddhh.carabineros.cl/assets/og_2635-protocolo_orden_publico.pdf> [↑](#footnote-ref-45)
46. El informe sobre uso de la Fuerza y Delitos Violentos fue remitido a la Subsecretaría del Interior en Julio de 2019, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el DS Nº 1.364. [↑](#footnote-ref-46)
47. Acusación, p. 34. [↑](#footnote-ref-47)
48. Acusación, pp. 12, 38. [↑](#footnote-ref-48)
49. Acusación, p. 43. [↑](#footnote-ref-49)
50. Silva Bascuñán, Alejandro, *Tratado de Derecho Constitución, Tomo VI*, Editorial Jurídica, Santiago, 2000, p. 220-221. [↑](#footnote-ref-50)
51. Acusación constitucional presentada en la Sesión de fecha 16 de mayo de 1991, de la H. Cámara de Diputados, rechazada en la Sesión de fecha 11 de junio 1991, de la H. Cámara de Diputados. [↑](#footnote-ref-51)
52. Acusación constitucional presentada en la Sesión de fecha 4 de junio de 1997 de la H. Cámara de Diputados, evacuándose su informe con fecha 18 de junio de 1991. [↑](#footnote-ref-52)
53. Silva Bascuñán, Alejandro, *Tratado de Derecho Constitución, Tomo VI*, Editorial Juridica, Santiago, 2000, p. 220-221. [↑](#footnote-ref-53)
54. Acusación constitucional rechazada por la H. Cámara de Diputados en Sesión de fecha 17 de noviembre de 2004. [↑](#footnote-ref-54)
55. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 360, Sesión 20, p. 52; y Diario de Sesiones, Legislatura 359, Sesión 76, p. 33. [↑](#footnote-ref-55)
56. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 363, Sesión 102, p. 83. [↑](#footnote-ref-56)
57. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 364, Sesión 65, p. 61. [↑](#footnote-ref-57)
58. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 363, Sesión 102, p. 37. [↑](#footnote-ref-58)
59. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 363, Sesión 102, p. 37. [↑](#footnote-ref-59)
60. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 364, Sesión 65, p. 37. [↑](#footnote-ref-60)
61. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 364, Sesión 65, p. 39. [↑](#footnote-ref-61)
62. Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, Legislatura 364, Sesión 65, p. 39. [↑](#footnote-ref-62)
63. Comisión de Estudios de la Nueva Constitución de la República, Sesión N° 353, de 19 de abril de 1978. [↑](#footnote-ref-63)
64. Silva Bascuñán, Alejandro, *Tratado de Derecho Constitución, Tomo VI*, Editorial Jurídica, Santiago, p. 129. [↑](#footnote-ref-64)
65. Ver en ZÚÑIGA URBINA, Francisco: “*Responsabilidad Constitucional de Intendentes y Gobernadores en la Acusación en Juicio Político*”, Revista de Derecho Público Vol. 63 (Santiago, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, 2003) p. 204. [↑](#footnote-ref-65)
66. Informe de la comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del Ministro de Justicia, señor Luis Bates Hidalgo, Recopilación Biblioteca del Congreso Nacional, p. 124. [↑](#footnote-ref-66)
67. Informe de la comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida en contra del ex Ministro de Obras Públicas, señor Ricardo Lagos Escobar, Recopilación Biblioteca del Congreso Nacional, p. 49. [↑](#footnote-ref-67)
68. Acusación, p. 1. [↑](#footnote-ref-68)
69. Acusación, p. 13. [↑](#footnote-ref-69)
70. Acusación, p. 14. [↑](#footnote-ref-70)
71. Acusación, p. 15. [↑](#footnote-ref-71)
72. Acusación, p. 15. [↑](#footnote-ref-72)
73. Acusación, p. 15. [↑](#footnote-ref-73)
74. Acusación, p. 15. [↑](#footnote-ref-74)
75. Acusación, p. 17. [↑](#footnote-ref-75)
76. Acusación, pp. 18 – 20. [↑](#footnote-ref-76)
77. Acusación, pp. 20-21. [↑](#footnote-ref-77)
78. Historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, Mensaje del Presidente de la República, Boletín N° 4.248-06. [↑](#footnote-ref-78)
79. Historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, Boletín N° 2.248-06. [↑](#footnote-ref-79)
80. Historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, Boletín N° 2.248-06. [↑](#footnote-ref-80)
81. Historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, Discusión en Sala, Senado, Diario de Sesiones, Legislatura 356, Sesión 35, Boletín N° 4.248-06. [↑](#footnote-ref-81)
82. Historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, Boletín N° 4.248-06. [↑](#footnote-ref-82)
83. Historia fidedigna del establecimiento de la ley N° 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, Boletín N° 4.248-06. [↑](#footnote-ref-83)
84. Acusación, pp. 38-39. [↑](#footnote-ref-84)
85. Acusación, p. 38. [↑](#footnote-ref-85)
86. Acusación, p. 41. [↑](#footnote-ref-86)
87. Acusación p. 41. [↑](#footnote-ref-87)
88. Acusación, p. 43. [↑](#footnote-ref-88)
89. Acusación, pp. 2 y 4. [↑](#footnote-ref-89)
90. Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/jorge-burgos-exministro-del-interior-defensa-no-comparto-nada-la-critica-violacion-sistematica-derechos/885468/> [↑](#footnote-ref-90)
91. Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/defensa-la-democracia-la-carta-convergencia-liberal-donde-pide-dialogo-nacional/874879/> [↑](#footnote-ref-91)
92. <http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2018/07/acuerdo-por-la-seguridad.pdf>, pg. 7. [↑](#footnote-ref-92)
93. <http://www.seguridadpublica.gov.cl/media/2018/07/acuerdo-por-la-seguridad.pdf>, pg. 10 [↑](#footnote-ref-93)
94. Presentación ante H. Cámara, sesión 23 de Octubre de 2019. [↑](#footnote-ref-94)
95. Acusación, p. 29. [↑](#footnote-ref-95)
96. Acusación, p. 1. [↑](#footnote-ref-96)
97. Acusación, p. 11. [↑](#footnote-ref-97)
98. Acusación, p. 11. “*Ahí fueron maniatados y colgados de las esposas en la estructura metálica de la antena de la Comisaría. Luego le pasaron “Gas pimienta” en estado sólido y fueron golpeados por el personal de Carabineros.*” [↑](#footnote-ref-98)
99. Primeramente, narran los casos en las páginas 11 y 12; luego, en la página 15; y, finalmente, en la página 18. Cada una de aquellas veces, los acusadores narran cada caso como si se estuviera innovando con respecto a los anteriores apartados de la Acusación. [↑](#footnote-ref-99)
100. <https://www.interior.gob.cl/noticias/2019/10/21/ministro-del-interior-realiza-quinto-balance-de-seguridad-por-estado-de-emergencia/>. [↑](#footnote-ref-100)
101. Acusación, p. 14, primera tabla. [↑](#footnote-ref-101)
102. Acusación, p. 19. [↑](#footnote-ref-102)
103. Disponible en: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/jueces-se-constituyeron-estacion-baquedano-no-encontramos-personas-detenidas-menos-colgando-del-techo/874175/> [↑](#footnote-ref-103)
104. Disponible en: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/jueces-se-constituyeron-estacion-baquedano-no-encontramos-personas-detenidas-menos-colgando-del-techo/874175/> [↑](#footnote-ref-104)
105. La ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, expresó por Twitter que “*INDH denuncia torturas, sí, torturas en la Estación Baquedano. Simplemente inaceptable.* *El Ministro del Interior @andreschadwickp debe renunciar hoy.*” Disponible en <https://twitter.com/labeasanchez/status/1186995186028728321> [↑](#footnote-ref-105)
106. Disponible en: <https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/23/indh-y-juez-de-garantia-confirman-indagaciones-por-presunto-centro-de-torturas-en-estacion-de-metro-baquedano/>. [↑](#footnote-ref-106)
107. Disponible en: <https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/10/23/jueces-que-se-constituyeron-en-estacion-baquedano-no-habian-detenidos-ni-tampoco-registros-de-ellos/> [↑](#footnote-ref-107)
108. Acusación, p. 17. [↑](#footnote-ref-108)
109. En <https://www.cnnchile.com/pais/indh-informe-detenidos-heridos-desaparecidos-protestas_20191027/> [↑](#footnote-ref-109)
110. En <https://www.t13.cl/noticia/nacional/indh-aclara-denuncias-personas-desaparecidas-manifestaciones> [↑](#footnote-ref-110)
111. En <https://www.latercera.com/nacional/noticia/las-28-desapariciones-denunciadas-indh-fueron-aclaradas-carabineros-12-nunca-salieron-casas/890580/> [↑](#footnote-ref-111)
112. En <https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/11/06/carabineros-aclara-las-28-desapariciones-informadas-por-el-indh/> [↑](#footnote-ref-112)
113. Oficios N°s, 33.102 y 33.103, ambos de 23 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ver Anexo 11. [↑](#footnote-ref-113)
114. Acusación, p. 17. [↑](#footnote-ref-114)
115. Acusación, p. 20. En el mismo sentido, página 43. [↑](#footnote-ref-115)
116. Diario El Mercurio, 17 de noviembre de 2019, Cuerpo D, pg 7 [↑](#footnote-ref-116)
117. Ib. Id. [↑](#footnote-ref-117)
118. Diario El Mercurio, 17 de noviembre de 2019, Cuerpo D, pg 7 [↑](#footnote-ref-118)
119. Artículo 7.2 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. [↑](#footnote-ref-119)
120. En <https://www.youtube.com/watch?v=D7WUHceZsRc&feature=share&fbclid=IwAR3IHXp8iudeSVqZ-DuindmlXErYTze-coea_RpOBkKUQKHe1eRxR8PjTGc> [↑](#footnote-ref-120)
121. Disponible en: <https://www.elmostrador.cl/dia/2019/11/09/indh-violaciones-a-derechos-humanos-son-graves-y-reiteradas/> [↑](#footnote-ref-121)
122. Disponible en: <https://www.latercera.com/politica/noticia/jorge-burgos-exministro-del-interior-defensa-no-comparto-nada-la-critica-violacion-sistematica-derechos/885468/> [↑](#footnote-ref-122)
123. Disponible en: <https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/11/04/966078/Jorge-Correa-Sutil-acusacion-Chadwick.html> [↑](#footnote-ref-123)
124. Todo lo anterior, sin perjuicio de las facultades legales que detenta el Intendente y el Gobernador en cuanto a requerir, en conformidad a la ley, el auxilio de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción, conforme a los artículos 2 letras b) y c) y 4 letras a) y d) de la ley N° 19.175. [↑](#footnote-ref-124)
125. Garrido, Mario, *Derecho Penal: Parte General (Tomo II)*, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 235. [↑](#footnote-ref-125)
126. Garrido, Mario, *Derecho Penal: Parte General (Tomo II)*, Editorial Jurídica de Chile, 2005, p. 240. [↑](#footnote-ref-126)
127. Oficio N° 32.816, 22 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. [↑](#footnote-ref-127)
128. Oficio N° 33.384, 28 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. [↑](#footnote-ref-128)
129. Oficios N°s 33.100, 33.101, 33.102 y 33.103, todos de 23 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. [↑](#footnote-ref-129)
130. Oficio N° 33.104, 23 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. [↑](#footnote-ref-130)
131. Oficios N°s 33.237 y 33.238, de 25 y 26 de octubre de 2019, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. [↑](#footnote-ref-131)
132. Acusación, p. 28. [↑](#footnote-ref-132)
133. Oficio Nº 37556, de fecha 4 de diciembre de 2019, del Subsecretario del Interior al General Director de Carabineros. [↑](#footnote-ref-133)
134. Misión Permanente de Chile ante la Organización de Estados Americanos, Nota N° 155/19, 21 de octubre de 2019. [↑](#footnote-ref-134)
135. Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, Nota N° 105/2019, 25 de octubre de 2019. [↑](#footnote-ref-135)
136. Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, Nota N° 106/2019, 27 de octubre de 2019. [↑](#footnote-ref-136)
137. Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores al Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, 24 de octubre de 2019. Ver también Nota N° 390, de fecha 24 de octubre de 2019, enviada por la Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, a la Oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos. [↑](#footnote-ref-137)
138. Acusación, p. 39. [↑](#footnote-ref-138)
139. Ducci, Carlos, *Derecho Civil: Parte General*, Editorial Jurídica de Chile, 2010, p. 66. [↑](#footnote-ref-139)
140. En el mismo sentido, la Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, en recurso de amparo N° 87-2019, señaló: “*la facultad en análisis al contemplar el control sobre el tránsito de la zona de emergencia, faculta a la autoridad a limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones en ella y en este caso, dicha actividad dice relación con el tránsito por la vía pública, esto es ir de un lugar a otro, siendo indistinto el lugar en el cual la persona ha de permanecer a buen recaudo…*.” (considerando noveno). [↑](#footnote-ref-140)
141. Contraloría General de la República, Dictamen N° 16.596-2017. [↑](#footnote-ref-141)
142. Acusación, p. 37. [↑](#footnote-ref-142)
143. Acusación, p. 37. [↑](#footnote-ref-143)
144. Acusación, p. 33. [↑](#footnote-ref-144)
145. Así lo declaró, entre otras, la Iltma. Corte de Apelaciones de Copiapó, en sentencia de fecha 30 de octubre de 2019, en recurso de amparo N° 54-2019, acumulado a los números de ingreso 56 y 58-2019. [↑](#footnote-ref-145)
146. Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, sentencia de fecha 5 de noviembre de 2019, recurso de amparo N° 87-2019, Considerando Octavo. La sentencia no fue impugnada, quedando firme la decisión de la Iltma. Corte. [↑](#footnote-ref-146)
147. Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, sentencia de fecha 26 de octubre de 2019, recurso de amparo N° 224-2019, Considerando Quinto; confirmada por la Excma. Corte Suprema, en Rol N° 29978-2019. [↑](#footnote-ref-147)
148. Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, sentencia de fecha 29 de octubre de 2019, recurso de amparo N° 522-2019, Considerando Sexto. La sentencia no fue impugnada, quedando firme la decisión de la Iltma. Corte. [↑](#footnote-ref-148)
149. Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, sentencia de fecha 5 de noviembre de 2019, recurso de amparo N° 87-2019, Considerando Décimo. La sentencia no fue impugnada, quedando firme la decisión de la Iltma. Corte. [↑](#footnote-ref-149)
150. Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, sentencia de fecha 26 de octubre de 2019, recurso de amparo N° 224-2019, Considerando Cuarto; confirmada por la Excma. Corte Suprema, en Rol N° 29978-2019. [↑](#footnote-ref-150)
151. Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, sentencia de fecha 26 de octubre de 2019, recurso de amparo N° 224-2019, Considerando Sexto; confirmada por la Excma. Corte Suprema, en Rol N° 29978-2019. [↑](#footnote-ref-151)
152. Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia de fecha 29 de octubre de 2019, recurso de amparo N° 2207-2019, Considerando Cuarto; confirmada por la Excma. Corte Suprema, en Rol N° 31734-2019. [↑](#footnote-ref-152)
153. Iltma. Corte de Apelaciones de Valdivia, sentencia de fecha 5 de noviembre de 2019, recurso de amparo N° 87-2019, Considerando Duodécimo. La sentencia no fue impugnada, quedando firme la decisión de la Iltma. Corte. [↑](#footnote-ref-153)
154. Iltma. Corte de Apelaciones de Talca, sentencia de fecha 26 de octubre de 2019, recurso de amparo N° 224-2019, Considerando Octavo; confirmada por la Excma. Corte Suprema, en Rol N° 29978-2019. [↑](#footnote-ref-154)
155. <https://www.cnnchile.com/pais/indh-heridos-detenidos-estado-de-emergencia-protestas_20191026/> (consulta última vez el 12 de noviembre de 2019) [↑](#footnote-ref-155)
156. <http://www.dpp.cl/sala_prensa/noticias_detalle/9875/defensores-publicos-han-representado-a-mas-de-24-mil-detenidos-desde-el-inicio-de-la-crisis-social> [↑](#footnote-ref-156)
157. Acusación, p. 40. [↑](#footnote-ref-157)
158. <https://www.mega.cl/noticias/mundo/280648-vladimir-putin-presidente-de-rusia-no-vendra-a-chile-apec-2019.html> [↑](#footnote-ref-158)
159. <https://www.latercera.com/pulso/noticia/vladimir-putin-decide-no-asistir-la-apec-se-realizara-chile/883313/> [↑](#footnote-ref-159)
160. Acusación, p.41. [↑](#footnote-ref-160)
161. Acusación, p.42. [↑](#footnote-ref-161)